

DIARIO DE SESIONES

Número 142

V Legislatura

Año 1999

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JAVIER TORRES VELA

Sesión Plenaria número 80

celebrada el miércoles, 10 de noviembre de 1999

ORDEN DEL DÍA

Proyectos de Ley

Debate final del Proyecto de Ley 5-99/PL-0005750, de creación de la empresa pública Hospital Alto Guadalquivir en Andújar, Jaén.

Debate de totalidad del Proyecto de Ley 5-99/PL-0008608, de regulación de las consultas populares locales en Andalucía.

Debates Generales

Debate General 5-99/DG-0031199, sobre política hidráulica y de abastecimiento de agua a poblaciones.

Mociones

Moción 5-99/M-00010927, relativa a la protección ambiental, presentada por el G.P. Popular de Andalucía.
Moción 5-99/M-00010955, relativa a la política general de

empleo, presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía.

Acuerdos de los órganos de la Cámara

Solicitud de creación de una Comisión de Investigación 5-99/CC-0010019, para analizar el estado y funcionamiento de las residen-

cias de mayores en nuestra Comunidad Autónoma, presentada por los Ilmos. Sres. D. Antonio Sanz Cabello, Dña. Ana María

Corredera Quintana, D. Rafael Salas Machuca, D. Salvador Fuentes Lopera, D. Juan Ramón Casero Domínguez, D. Miguel Sánchez de Alcázar Ocaña, D. Aurelio Romero Girón, D. Matías

Conde Vázquez, D. José Guillermo García Trenado, Dña. María del Carmen Crespo Díaz y D. José Manuel Gómez-Angulo Giner, del G.P. Popular de Andalucía.

Proposiciones no de Ley

Proposición no de Ley 5-99/PNLP-10021, relativa a la firma de un convenio para la mejora del ferrocarril en la línea Sevilla-Mérida, presentada por el G.P. Socialista.

Interpelaciones

Interpelación 5-99/I-00010947, relativa a la política general del Gobierno andaluz en relación a las Corporaciones locales,

formulada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía.

Preguntas orales

Pregunta oral 5-99/POP-010966, relativa a la incidencia real del acuerdo sobre retribuciones en la homologación de los funcionarios y laborales de la Administración de la Junta de Andalucía, formulada por el Ilmo. Sr. D. Juan Miguel Calvo Castaños, del G.P. Popular de Andalucía.

Pregunta oral 5-99/POP-010967, relativa al personal transferido y no integrado, formulada por el Ilmo. Sr. D. José Guillermo García Trenado, del G.P. Popular de Andalucía.

Pregunta oral 5-99/POP-011202, relativa al estado de tramitación del Proyecto de Ley de Coordinación de Policías Locales, formulada por el Ilmo. Sr. D. Rafael Ortega Cruz, del G.P. Socialista.

Pregunta oral 5-99/POP-010969, relativa a la problemática del colegio público Pedro de López en La Redondela, Huelva, formulada por el Ilmo. Sr. D. José Luis Rodríguez Domínguez, del G.P. Popular de Andalucía.

Pregunta oral 5-99/POP-010149, relativa al expolio del patrimonio histórico de Andalucía, formulada por el Ilmo. Sr. D. José María Calderón Calderón, del G.P. Popular de Andalucía.

Pregunta oral 5-99/POP-011206, relativa a la designación de Sevilla como sede del Campeonato Mundial de Remo y Piragüismo, formulada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Francisco Castillo García y Dña. Blanca Alcántara Reviso, del G.P. Socialista.

Pregunta oral 5-99/POP-011216, relativa a la remodelación del estadio de La Rosaleda, Málaga, formulada por el Ilmo. Sr. D. Joaquín Luis Ramírez Rodríguez, del G.P. Popular de Andalucía.

Pregunta oral 5-99/POP-010970, relativa a las medidas de la Junta para paliar los efectos de la sequía sobre la ganadería ovina, caprina y vacuna de Jaén, formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Rodríguez Serrano, del G.P. Popular de Andalucía.

Pregunta oral 5-99/POP-011214, relativa a la situación del porcino blanco, formulada por el Ilmo. Sr. D. Ildefonso Dell'Olmo García, del G.P. Andalucista.

Pregunta oral 5-99/POP-010961, formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Mesones Galán, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía.

Pregunta oral 5-99/POP-011203, relativa al tipo de hospital del Campus de la Salud, formulada por los Ilmos. Sres. D. Antonio María Claret García García, D. Francisco José Álvarez de la Chica y Dña. Elena Víboras Jiménez, del G.P. Socialista.

Pregunta oral 5-99/POP-011204, relativa al desarrollo de atención al usuario, formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María del Carmen Ortiz Rivas, D. Francisco Pérez Conchillo y Dña. Elena Víboras Jiménez, del G.P. Socialista.

Pregunta oral 5-99/POP-010963, relativa al control del pastoreo en la zona de Entremuros afectada por el vertido tóxico de las minas de Aznalcóllar, formulada por el Ilmo. Sr. D. Manuel López Calvo, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía.

Pregunta oral 5-99/POP-010971, relativa a la adjudicación administrativa del aula de la naturaleza de Paredes, refugio de Ubeire y refugio de La Dehesa, formulada por los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández, D. Eugenio Jesús González García, Dña. María del Mar Agüero Ruano, Dña. Estébana Palmero Martínez y Dña. María del Carmen Crespo Díaz, del G.P. Popular de Andalucía.

Pregunta de Iniciativa Ciudadana 5-99/PICP-10426, relativa a la propuesta de lugares de interés comunitario a incluir en la red Natura 2000, formulada por la Ilma. Sra. Dña. Beatriz Martín Ovando, del G.P. Popular de Andalucía.

Pregunta oral 5-99/POP-010968, relativa a la evaluación de la red de carreteras de titularidad autonómica, formulada por el Ilmo. Sr. D. Jorge Ramos Aznar, del G.P. Popular de Andalucía.

Pregunta oral 5-99/POP-010962, relativa a la elección del Director General de la RTVA, formulada por la Ilma. Sra. Dña. Concepción Caballero Cubillo, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía.

Pregunta oral 5-99/POP-010964, relativa a la Ley de Cajas de Ahorro de Andalucía, formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Sanz Cabello, del G.P. Popular de Andalucía.

SUMARIO

Se abre la sesión a las dieciséis horas, cuarenta minutos del día diez de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.

Punto primero del orden del día: Proyectos de Ley

Debate final del Proyecto de Ley 5-99/PL-0005750, de creación de la empresa pública Hospital Alto Guadalquivir en Andújar, Jaén.

Intervienen:

Ilmo. Sr. D. Antonio Moreno Olmedo, del G.P. Andalucista (pág. 8.388).

Ilmo. Sr. D. Leocadio Fernández García, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (pág. 8.388).

Ilmo. Sr. D. José Guillermo García Trenado, del G.P. Popular de Andalucía (pág. 8.390).

Ilmo. Sr. D. José Ramón Pozuelo Borrego, del G.P. Socialista (pág. 8.391).

Votación: Consultar texto.

Debate de totalidad del Proyecto de Ley 5-99/PL-0008608, de regulación de las consultas populares locales en Andalucía.

Intervienen:

Excm. Sra. Dña. María del Carmen Hermosín Bono, Consejera de Gobernación y Justicia (pág. 8.394).

Ilmo. Sr. D. Antonio Moreno Olmedo, del G.P. Andalucista (pág. 8.395).

Ilmo. Sr. D. Diego Valderas Sosa, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (pág. 8.396).

Ilmo. Sr. D. Juan Miguel Calvo Castaños, del G.P. Popular de Andalucía (pág. 8.398).

Ilmo. Sr. D. Rafael Ortega Cruz, del G.P. Socialista (pág. 8.401).

Punto segundo del orden del día: Debates Generales

Debate General 5-99/DG-0031199, sobre política hidráulica y de abastecimiento de agua a poblaciones.

Intervienen:

Excmo. Sr. D. Francisco Vallejo Serrano, Consejero de Obras Públicas y Transportes (págs. 8.403, 8.421).

Ilmo. Sr. D. Ildefonso Dell'Olmo García, del G.P. Andalucista (págs. 8.409, 8.423, 8.430).

Ilmo. Sr. D. Manuel López Calvo, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (págs. 8.412, 8.424, 8.430).

Ilmo. Sr. D. Jorge Luis Ramos Aznar, del G.P. Popular de Andalucía (págs. 8.415, 8.426, 8.430).

Ilmo. Sr. D. Francisco José Álvarez de la Chica, del G.P. Socialista (págs. 8.418, 8.428, 8.431).

Votación: Consultar texto.

Se suspende la sesión a las veintidós horas, cuarenta minutos del día diez de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.

DEBATE FINAL DEL PROYECTO DE LEY 5-99/PL-0005750, DE CREACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR EN ANDÚJAR, JAÉN

El señor PRESIDENTE

—Ruego a sus señorías que vayan ocupando sus escaños, por favor.

Se abre la sesión con el punto primero del orden del día, proyectos de ley, con el debate final del proyecto de ley de creación de la empresa pública Hospital Alto Guadalquivir, en Andújar, Jaén. ¿La Comisión ha designado algún ponente para que defienda el dictamen de la misma? Pues pasamos entonces directamente al posicionamiento o defensa de los votos particulares de los distintos Grupos parlamentarios.

Tiene la palabra, en primer lugar, el portavoz del Grupo Parlamentario Andalucista, señor Moreno Olmedo.

El señor MORENO OLMEDO

—Muchas gracias, señor Presidente. Señoras Diputadas, señores Diputados.

Con la misma brevedad que este portavoz mantuvo en su intervención durante el debate de totalidad al proyecto de ley, el Grupo Parlamentario Andalucista, como ya habíamos anunciado, no habíamos presentado ninguna enmienda al articulado de este proyecto. Lo que sí, después de esta tarde después consultar con algunos de los portavoces, queríamos presentar una enmienda *in voce*, simplemente es cuestión de redacción, en la que entendíamos que, en la Disposición Adicional Segunda, en su apartado dos, donde dice que para llevar a cabo la operación descrita en el punto anterior la Tesorería General de la Junta de Andalucía se referirá al Servicio Andaluz de Salud, entendíamos que podía decir «Consejería de Salud, Servicio Andaluz de Salud, los fondos necesarios». Esto, como sus señorías saben, tiene que ser aprobado y aceptado por todos los portavoces, a los cuales ya he comentado anteriormente y espero su posicionamiento al final.

Y, en primer lugar, este proyecto de ley entendemos que no pone en peligro el carácter público del sistema sanitario andaluz, y sus señorías saben que en el Partido Andalucista hemos defendido, desde esta tribuna, la necesidad de mantener esta condición para nuestra sanidad. Si esta ley supusiese abrir una mínima posibilidad a la privatización del sistema sanitario público andaluz, hubiésemos impedido su aprobación con una enmienda a la totalidad; sin embargo, éste no es el caso y no tenemos la más mínima duda al respecto.

En segundo lugar, este texto legal implica un nuevo modelo en la gestión de los servicios sanitarios, cuestión esta que también hemos reivindicado en numerosas ocasiones. La mejora en la prestación de los servicios sanitarios, así como la contención del gasto sanitario, pasan por la búsqueda de modelos diferentes de organización

y gestión. Así lo aseguran los especialistas y así lo hemos reclamado también desde el Partido Andalucista.

Nos es grato comprobar cómo el Gobierno andaluz ha emprendido el camino de la modernización en la gestión de la sanidad pública, y esta ley es buena prueba de ello. Los andalucistas confiamos en que la creación de la empresa pública Hospital Alto Guadalquivir, de Andújar, supondrá esa puerta necesaria hacia un modelo nuevo de gestión de los servicios sanitarios andaluces, y es más, creemos que este modelo organizativo acabará generalizándose.

En nuestra opinión, la creación del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar, con la figura de empresa pública, supondrá una mayor coherencia en la gestión, una mayor efectividad en la contención del gasto, así como una racionalización de los recursos, permitiendo, además, un control económico que suponemos real. Es más, esta mejor gestión debe suponer para los usuarios de este hospital —y así lo esperamos— un aumento en las prestaciones sanitarias a la vez que un incremento en la calidad de los servicios que percibe. Estamos esperanzados en que el proceso de cambio que está iniciando el Ejecutivo andaluz, reformando la gestión y buscando nuevos modelos organizativos capaces de dar respuesta a las necesidades planteadas, traiga de forma pareja un cambio en el modelo de atención sanitaria, acercando la atención primaria a la hospitalaria, optimizando los recursos técnicos y humanos disponibles.

Señorías, creo que todos podemos felicitarnos por la aprobación de la presente ley, felicitación que debe ser doblemente motivada: por un lado estamos articulando soluciones a los problemas de la contención del gasto y del mantenimiento de un sistema sanitario público de calidad, y por otro lado estamos posibilitando la apertura de un nuevo centro sanitario, centro que dará servicio a los ciudadanos de la comarca del Alto Guadalquivir, atendiendo a la demanda existente en lo que a servicios hospitalarios se refiere; esto es, estamos acercando las prestaciones sanitarias a los ciudadanos que nos las demandan.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE

—Muchas gracias, señor Moreno Olmedo.

A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, señor Fernández.

El señor FERNÁNDEZ GARCÍA

—Sí, muchas gracias, señor Presidente. Señorías.

Corresponde el turno de posicionamiento del Grupo de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía sobre el debate final de la ley de creación de la empresa pública que gestionará el hospital de Andújar. Me van a permitir, señorías, que, cada vez que hablemos de este hospital, y aquí en este Parlamento y desde esta tribuna...

El señor PRESIDENTE

—Perdone un momento, señor Fernández.
¿Pueden sus señorías apagar los teléfonos móviles?
Señorías, les ruego silencio, por favor.
Puede continuar su señoría.

El señor FERNÁNDEZ GARCÍA

—Decía, señor Presidente, decía, señorías, que me van a permitir que, cada vez que hablemos del hospital de Andújar en este Parlamento, hagamos un reconocimiento claro y rotundo al pueblo de Andújar, como no podía ser de otra manera, y a la comarca de Andújar, gracias a los cuales hoy estamos aquí debatiendo y aprobando, con toda seguridad, la ley de creación de la empresa pública que gestionará dicho hospital. Ellos fueron, el pueblo de Andújar y la comarca, sus hombres, sus mujeres, son y fueron, insisto, los artífices de que hoy exista dicho hospital. Gracias a su preocupación, gracias a sus movilizaciones, y gracias también a que hubo sensibilidad por parte de este Parlamento, se inició el proceso para que hoy estemos hablando, en este momento, del debate final de la ley de creación de esa empresa pública.

Señorías, entendemos, desde el Grupo que yo represento, desde el Grupo de Izquierda Unida, entendemos que el debate de hoy debería haber sido totalmente innecesario si el Gobierno del señor Chaves hubiese aplicado la Ley de Salud de Andalucía y hubiese integrado dicho hospital en la red sanitaria de Andalucía. Ya estaría integrado, ya estaría dentro de la red sanitaria, y no tendríamos que estar aquí hablando de crear una empresa para que gestionara dicho hospital, porque el hospital se hubiese terminado y ese hospital hubiese estado en la red de asistencia sanitaria y no tendríamos que haber creado ningún tipo de ley ni de empresa que gestionara dicho hospital.

Ya lo dijimos en su momento, y lo volvemos a repetir desde aquí, desde esta tribuna, que esta ley, para Izquierda Unida y para muchos agentes sociales, no solamente Izquierda Unida, sino muchos agentes sociales y ciudadanos y ciudadanas, esta ley no aporta nada positivo a la gestión del hospital de Andújar. Lo decíamos y lo repetimos, y lo subrayamos: más bien, todo lo contrario. Como he dicho anteriormente, ha alargado en el tiempo la figura que gestiona dicho hospital; no aporta nada, desde nuestro punto de vista, que mejore el servicio que se debe prestar, puesto que no tendría sentido entonces hacer una ley para gestionar este hospital y no hacer una ley que gestione el Macarena, por ejemplo, o que gestione Virgen del Rocío, o que gestione Reina Sofía, o que gestione Ciudad de Jaén, etcétera, etcétera. Por lo tanto, entendemos que no viene a aportar nada a la mejora del servicio que debe prestar. No permite, sin embargo, por otro lado, ningún tipo de control por parte de este Parlamento. Además, como toda empresa, entendemos que utiliza criterios, o va a utilizar criterios mercantilistas, buscando más la rentabilidad económica, posiblemente, que la propia rentabilidad social,

lo cual va a influir negativamente en la calidad del servicio que se preste. Al mismo tiempo, decíamos —y lo seguimos diciendo—, rompe la red de asistencia sanitaria de Andalucía; si no hoy, está abriendo las puertas para romperlo en el futuro, porque, en la línea de lo que se está proponiendo, se irán creando nuevas empresas para ir gestionando la red de asistencia sanitaria. Si no, insisto —si no que se me demuestre lo contrario—, qué teoría es la que avala el que se ponga en marcha una ley para crear una empresa pública que gestione un servicio público, en este caso la sanidad, si no es ir buscando en el futuro ir creando diferentes empresas públicas de esta categoría.

Al mismo tiempo, señorías, decíamos —y lo repetimos—, deja al Consejo de Gobierno toda capacidad para su desarrollo posterior sin participación de este Parlamento. Si no ya lo veremos después, cuando entremos en el debate ya de las enmiendas en concreto, puesto que el Estatuto, el plan de financiación, etcétera, etcétera, todo eso lo va a realizar luego el Gobierno, simplemente por decreto y sin participación para nada de este Parlamento.

Al mismo tiempo, señorías, todo lo que nosotros estamos diciendo hoy aquí, y hace un tiempo también desde esta tribuna, y en los medios de comunicación, y que también dicen diferentes agentes sociales, organizaciones ciudadanas, etcétera, viene avalado también por el propio Defensor del Pueblo, que no hace muchos días, el pasado día 27 de octubre, en esta tribuna, en el informe que se nos presentaba, denunciaba públicamente la proliferación de empresas públicas como entidades de estructura privatista. Y decía, además, y sugería, que las funciones irreductiblemente públicas no pueden ser prestadas bajo fórmulas de Derecho privado —textualmente aparece en el *Diario de Sesiones*—, y la función irreductiblemente pública que debe ser el servicio sanitario, la atención sanitaria, no puede —entendemos nosotros y coincidimos con el Defensor del Pueblo— ser prestada bajo fórmulas de Derecho privado.

Señorías, todas las opiniones, propuestas, sugerencias que se vienen haciendo desde la calle, en esta tribuna, en diferentes debates que se han ido produciendo, han ido entrando por un oído y han ido saliendo por el otro, de tal manera que han seguido su proceso normal y se ha querido imponer, de alguna manera, la creación de estas empresas para gestionar este hospital.

Bien, pues ante esta situación, a este Grupo, al Grupo de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, no nos queda más remedio que presentar una serie de enmiendas a la ley, intentando mejorar su contenido —intentándolo, repito; no sé si lo habremos conseguido—. Seguramente no lo habremos conseguido puesto que el Grupo mayoritario no ha tenido en cuenta para nada ninguna de las enmiendas que hemos presentado. Por lo tanto, quiere decir que el esfuerzo nuestro no habrá sido muy interesante, ya que, insisto, el Grupo mayoritario no ha hecho ningún esfuerzo para aceptar algunas de estas enmiendas e incorporarlas al texto.

De tal manera que, resumiendo, señorías, porque tienen ustedes en su carpeta cuáles son nuestras enmien-

das, decir que son cinco los objetivos que pretendemos con esas enmiendas. Primer objetivo: limitar el ámbito de intervención de la empresa que se crea. Si ustedes miran la exposición de motivos y miran también el artículo 1, se darán cuenta de que no solamente tiene el ámbito esta empresa pública de gestionar el propio hospital, sino que también se le permite abrirse a los centros periféricos que en su caso se le adscriban. Por lo tanto, ése es nuestro primer objetivo: intentar limitar el ámbito de intervención de esta empresa, suprimiendo, tanto en la exposición de motivos como en el artículo primero, el apartado e el párrafo que haga referencia a los centros periféricos que, en su caso, se le adscriban.

El segundo objetivo que pretendemos es mayor participación y control de este Parlamento, puesto que, como decía anteriormente, el Estatuto y todo lo que se derive de esta ley deja manos libres al propio Gobierno para que lo vaya desarrollando sin que haya participación, sin que haya ningún tipo de control de este Parlamento; es decir, que el Parlamento se va a quedar simplemente, pues, para venir, vernos, dar un pequeño discurso, y después no hacer ningún tipo de control, ni de participación, ni de impulso, ni de nada que se le parezca.

Tercer objetivo. Queremos que haya transparencia en todos los procesos de selección del personal; por eso enmendamos el artículo 3.2, el 3.3, e incluso incorporamos un nuevo artículo, que es el artículo 7.

Un cuarto objetivo es el reconocimiento de todos los derechos a los trabajadores y trabajadoras que lo hagan en este hospital; para eso planteamos la adicional única.

Y por último, que haya igual servicio en este hospital que en el resto de los hospitales de carácter comarcal, reconociendo, señorías, que este hospital tiene un diseño totalmente diferente a los demás, reconociendo que tiene una buena tecnología, pero no queremos que eso encubra, de alguna manera, el que se le dé diferentes servicios en cantidad, no solamente en calidad, sino también en cantidad.

Por lo tanto, concluyendo, señorías, éstas son las enmiendas y propuestas que hace el Grupo de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, que deseáramos que se tuviesen en cuenta en este debate para enriquecer, de alguna manera, la ley de creación de esta empresa pública, aun estando, insisto, en desacuerdo con que este hospital se gestione de esta manera.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE

—Muchas gracias, señor Fernández.

A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor García Trenado.

El señor GARCÍA TRENADO

—Señor Presidente. Señorías.

Estamos ya en el último trámite para la creación de los órganos que van a regir los destinos de un nuevo

hospital en Andalucía, del hospital del Alto Guadalquivir, en la ciudad de Andújar y su comarca.

Yo creo que, en este momento, lo primero que tendríamos que hacer es felicitar, fundamentalmente a los ciudadanos de Andújar y de su comarca, que, con su movilización, con su sensibilidad y con su lucha, consiguieron..., son los artífices de haber conseguido que este hospital esté funcionando.

En segundo lugar, yo creo que la sanidad andaluza se debe felicitar en su conjunto por disponer de un nuevo centro sanitario, un nuevo hospital, que, lógicamente, debe venir a mejorar la asistencia y la calidad de la asistencia, y sobre todo la rapidez y la cercanía de la asistencia sanitaria que se presta.

Y por último, yo creo que este Parlamento, que tuvo el impulso de aprobar una proposición no de ley, a propuesta —y hay que recordarlo— del Partido Popular para que se pusiera en marcha toda la maquinaria de la Administración al objeto de crear este nuevo centro hospitalario...

Y, por otro lado, hay que lamentar, yo tengo que lamentar que en el desarrollo del trámite parlamentario de la ley, pues no sé si el orgullo, si la prepotencia, si el sectarismo o la cerrazón, han hecho que no se tenga en consideración ninguna de las iniciativas, de las enmiendas que, con el único objeto de mejorar la ley, desde los distintos Grupos políticos se han planteado.

Y digo que es una lástima, porque yo creo que, desde Marbella hasta hoy, desde la creación de la empresa pública en Marbella hasta hoy, ha pasado suficiente tiempo que nos permita el análisis de cuál es el momento por el que han ido transcurriendo estos nuevos centros, estas nuevas fórmulas de gestión.

Yo creo que la situación de las primeras fundaciones o de la primera empresa pública de Marbella dio como consecuencia una ley consensuada, la Ley 15/97, de 25 de abril, que es en la que se fundamenta la asunción por parte de Administraciones de distinto signo político de algo que estaba en la sociedad y que estaba en los profesionales, que es implantar unos nuevos criterios para una mayor competencia a la hora de prestar los servicios.

Pues bien, yo creo, señorías, que, con la ley que aprobamos, seguimos estando como al principio, seguimos estando como en Marbella; es decir, el análisis no nos ha servido. Seguimos creando... Y se ha debatido en este Parlamento en más de una ocasión; este portavoz lo ha planteado. Es más, si tiramos de *Diario de Sesiones*, el señor Consejero lo ha reconocido, que había un problema en la creación de estas empresas de Marbella, de EPES, del Poniente, y hoy en Andújar, en el sentido de que creaba un grupo de profesionales que estaban fuera del sistema y que era difícil su movilidad dentro del mismo y su integración con respecto al personal del Servicio Andaluz de Salud.

Nosotros hemos propuesto en una enmienda esa solución, que es el mantenimiento de la condición de estatutarios de aquellos que se quieran incorporar, para que puedan volver en su día, no durante tres años, sino durante un período mayor, a su puesto de trabajo. La permeabilidad, que si no se recoge en esta ley, señorías

—y no se va a recoger porque ya conocemos cuál es la posición de los Grupos que sustentan al Gobierno a través de la Comisión—, la permeabilidad de que inexorablemente, en otro momento —y la verdad es que no me gusta hacer de oráculo, pero la experiencia demuestra a lo largo de estos años que propuestas que se han hecho desde esta tribuna y por este portavoz acaban siendo asumidas pasado el tiempo—, la permeabilidad, que tendrá que ser obligatoriamente asumida por esta Administración o por la que sustituya a esta Administración en un futuro por una razón elemental, porque en la medida en que aumentan los centros —y van a seguir aumentando— que están fuera del Servicio Andaluz de Salud ese gueto, esa bolsa de profesionales, va a ir aumentando y van a demandar, y la propia dinámica va a imponer el que se estudien las fórmulas jurídicas que permitan esa permeabilidad. Permeabilidad que tiene que ser, como es lógico, en ambas direcciones.

Es una pena, señorías, que, cuando se da un paso yo creo que..., y ahí tengo que decir que creo que importante cuando se habla de la adscripción de centros periféricos, no se dé el paso decididamente. Parece como si estuviéramos ante una actitud vergonzante, como si temiera que desde otra opción, desde otra posición política, se le recordaran cosas que pertenecen al pasado. Es decir, hoy, cualquiera que está en el concepto moderno de lo que es la prestación sanitaria, sabe que la gran preocupación de los administradores de la sanidad está en el sistema integrado de salud, no está en compartimentos estancos, no está en la adscripción pública/privada, la adscripción de atención primaria/hospitalaria, etcétera. Todo el mundo, todos los sistemas de salud de la Europa civilizada, está buscando un sistema integrado donde la permeabilidad entre los distintos elementos que prestan la atención y la permeabilidad entre las distintas estructuras sea coherente.

Por lo tanto, yo hubiese preferido, desde luego —y así lo decíamos—, que esta empresa, este hospital, ejerza la coordinación y asuma la integración funcional de todos los centros de su área hospitalaria. Y eso es algo que va a venir a ocurrir. Ya sé que me van a decir que luego se hará, pero no costaba nada que quedara reflejado sino actitud vergonzante dentro de la ley.

También, señorías, yo creo que, para disipar cualquier duda sobre la transparencia o no transparencia —otro portavoz se ha referido a eso, la capacidad de análisis de este Parlamento, que puede estar garantizada por otros caminos, no lo niego— sobre esta empresa pública, sería bueno que este Parlamento hubiese tenido representantes dentro de su consejo de administración. Y, desde luego, vuelvo a insistir en que hay que reconocer y se llegará al reconocimiento de la permeabilidad entre el personal que presta servicios sanitarios para el conjunto de la sanidad pública andaluza, independientemente de la red en la que esté, y eso, si no se toma en esta ley en consideración, habrá que tomarlo a corto plazo. De igual modo, hay una enmienda en donde se intenta garantizar que, salvo el caso del director gerente, que entendemos que es un cargo de libre designación y es un cargo de confianza, el resto del personal debería estar

sometido a los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

Pero, como digo, esta iniciativa, que lo único que ha querido es completar la ley y, en definitiva, dar un paso más y no quedarnos como si estuviéramos en estos momentos aprobando la ley de creación del hospital de Marbella, ha sido rechazada en Comisión, y mucho me temo que sufra la misma suerte en este Pleno. Esto, si ocurre, no tiene más justificación, señorías, que el orgullo, que la prepotencia, que el sectarismo o que la cerrazón.

Por lo tanto, como nosotros no vamos a ser cómplices ni partícipes de sacar una ley que sigue anclada en el pasado, cuando existen posibilidades y se están haciendo en el resto del conjunto del Estado y en Europa otras fórmulas mucho más ágiles, nosotros no vamos a oponernos a algo que se sustenta en una ley de la que fuimos los impulsores y que contó con el amplio respaldo del Congreso de los Diputados; pero tampoco queremos, con el voto positivo —y, por lo tanto, nos abstendremos—, dar carta de naturaleza años después a algo que ya se ha hecho en el pasado.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE

—Muchas gracias, señor García Trenado.

A continuación tiene la palabra la portavoz del Grupo..., el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Pozuelo.

Perdón, señor Pozuelo, creía que iba a intervenir la señora Víboras y de ahí mi error.

El señor POZUELO BORREGO

—Sí, gracias, señor Presidente. Señorías.

Nos encontramos en la etapa final del recorrido de la tramitación del proyecto de la ley de creación de la empresa pública Hospital Alto Guadalquivir, en Andújar, estamos en el último debate antes de someterlo a votación para su aprobación por la Cámara, un proyecto de ley al que, como no podía ser de otra manera, mi Grupo va a dar su apoyo. Entre otras razones porque el análisis de las experiencias desarrolladas por las empresas públicas andaluzas creadas para la gestión de servicios sanitarios nos permite afirmar que se puede obtener un alto grado de eficacia y de eficiencia, y con ello conseguir los objetivos fundamentales que un hospital debe perseguir; objetivos que ya se comentaron por el señor Consejero y por este Diputado que habla en el anterior debate a la totalidad de esta ley, pero que el recuerdo que era situar al ciudadano como protagonista real con derecho a utilizar y a elegir unos servicios sanitarios personalizados, confortables y de alta calidad humana y científico-técnica. Otro objetivo era integrar e implicar a los profesionales sanitarios en una organización flexible y comunicativa, que va a reconocer los logros de quienes le dedican su trabajo y va a estimular su desarrollo, tanto personal como profesional. Y, finalmen-

te, un tercer objetivo, que es alcanzar la máxima rentabilidad de los recursos utilizados en los niveles establecidos de calidad en el servicio y de producción, con el nivel máximo de eficiencia en un proceso enmarcado en la mejora continua de la gestión.

Dicho esto con carácter preliminar, paso a posicionar a mi Grupo respecto a las enmiendas presentadas por Izquierda Unida.

El portavoz de Izquierda Unida nos acusa de que..., en fin, que no hemos hecho el menor esfuerzo en aceptar ninguna de sus enmiendas. Le recuerdo que se le aprobó una, la número 9, en Comisión; ya no son todas. Pero, no obstante, a su señoría lo que le ocurre es que el esfuerzo se realiza cuando realmente merece la pena hacerlo. Pero es que Izquierda Unida siempre tiene el erre que erre de dar esos discursos tocando todas las alarmas, encendiéndolo todas las luces de alarma, esos discursos teóricos que después, a la hora de plasmarlos en forma de enmienda, pues la verdad es que el contenido es muy escuálido, y entonces, claro, ¿dónde le metemos mano? ¿Dónde le aprobamos a usted alguna enmienda?

Porque, si usted observa, la mayoría de las enmiendas que pone Izquierda Unida se podrían haber evitado solamente con haberse repasado un poco el Estatuto de Autonomía, de saber cuáles son las competencias del Gobierno, cuáles son las competencias del Parlamento... Claro, claro. Incluso de haberse leído o haber enfocado y haber repasado la Ley de Salud. O basta con haber profundizado un poquito más en el estudio de esta ley. Y, claro, así nos encontramos con que la mitad o más de la mitad, solamente con ese pequeño esfuerzo recordatorio de las competencias del Parlamento y del Consejo de Gobierno, quizás no hubiera tenido que poner este número de enmiendas. Pero, no obstante, una por una las vamos a analizar.

Tanto en la exposición de motivos como en el artículo 1, a cada uno le enmienda con la enmienda número 6 y la número 7, ambas de igual contenido, que es la supresión de los centros periféricos. Recordarle a su señoría que los centros periféricos se crean para satisfacer las necesidades asistenciales detectadas, bien porque el hospital no permite nuevas instalaciones que se precisen, o sea necesario acercar algún servicio concreto a la población, siendo preciso que los servicios especializados de carácter diagnóstico o terapéuticos se encuentren fuera del recinto hospitalario, manteniendo, por supuesto, la dependencia con el hospital. Pensamos que es necesario dejar abierta la posibilidad de crecimiento del hospital, de forma que, en el futuro, el desarrollo de éste se ajuste a las nuevas tecnologías y a las futuras necesidades que puedan ir surgiendo, por lo que consideramos que no son aceptables estas dos enmiendas.

Al artículo 2, que también presentaba dos enmiendas, se ha quedado una, ya que la número 9 se le aprobó, queda la número 8, y quiero también recordarle a su señoría que la aprobación —estamos hablando ya de esas competencias que yo le decía, que si se supieran esto, no hubiera venido— del decreto por el que se constituye la empresa pública Alto Guadalquivir y se aprueban sus estatutos es competencia exclusiva del Consejo de

Gobierno, potestad recogida en el Estatuto de Autonomía. El Parlamento puede conocer perfectamente el contenido de los estatutos por la vía del control del Poder ejecutivo, sabe usted: las interpelaciones, las comparecencias, preguntas, etcétera, etcétera.

Al artículo 3 presentan dos enmiendas: la enmienda número 10, que coincide, precisamente, con la 4 del Grupo Popular al artículo 3, que trata del personal y régimen jurídico. Sus señorías de Izquierda Unida lo que redactan en esta enmienda son principios constitucionales, que tienen que cumplirse, y, por tanto, no es necesario que los recoja nuevamente esta ley. En cuanto a la reserva de plazas a minusválidos, la empresa pública está sujeta a dicha reserva, al igual que el resto de la Administración pública, según la normativa vigente. La enmienda número 11 consideramos que está recogida perfectamente en el apartado 3 del artículo 3; por tanto, tampoco la aceptamos. La número 12 es una enmienda de adición. Crea un artículo 7 referido al control parlamentario del PAIF, que por supuesto que no procede, porque su señoría debe saber que el control del PAIF de esta empresa y de todas las demás lo realiza el Parlamento a través de la Ley de Presupuesto, y también a través de la Cámara de Cuentas, toda la información obligatoria a que llega el Parlamento. ¿Qué habla usted, señor Fernández, de falta de esfuerzo?

En la número 13, una enmienda de adición a la Disposición Adicional Única, añadiendo un punto sobre la igualdad de derechos del personal de las empresas públicas con respecto al personal del SAS. A esto, por supuesto, le contesto que la empresa pública, entre otras cuestiones, supone cambios culturales en la gestión, lo que implica, pues, diferentes elementos retributivos, jornada laboral que puede variar..., que se acuerda, no lo olvide usted, por el convenio colectivo, atendiendo a la legalidad vigente.

Finalmente, presenta una última enmienda de adición a la Disposición Adicional Segunda, sobre los mismos servicios y dotaciones del hospital de Andújar que los hospitales comarcales del SAS. Claro, este hospital público es un centro hospitalario de ámbito comarcal, y tendrá el mismo nivel de prestaciones y servicios sanitarios que el resto de los hospitales del sistema sanitario público de Andalucía; qué duda puede haber y qué reticencia. Y las dotaciones estarán adecuadas a su nivel asistencial y a satisfacer las necesidades de los ciudadanos.

Lamento, ya le digo, no poder aceptar ninguna de sus enmiendas, pero es que unas, bien por redundantes, u otras porque realmente lo contemplan en la ley, no veo necesidad de aceptarle; honradamente lo pienso. No es por falta de interés ni por falta de esfuerzo, que bastante le garantizo que he estudiado sus enmiendas.

En cuanto a las enmiendas del Grupo Popular, que también nos acusa no de falta de esfuerzo, pero el señor García Trenado nos habla de soberbia, prepotencia... Vaya... Eso se podría justificar siempre cuando las enmiendas que usted ha propuesto fuesen unas enmiendas razonablemente buenas, pero ahora, cuando las estudie, y las vamos a estudiar una por una, comprenderán sus señorías el por qué no se las puede aceptar. Y no precisamente por falta de ganas de hacerlo, pero en nin-

gún caso por soberbia o prepotencia; eso se lo aplican ustedes mejor, ¿eh?

Vamos a ver, en cuanto a las enmiendas del Grupo Popular, dice: «la número 2 es una enmienda al artículo único». Bien, a esto le recuerdo a su señoría que las áreas hospitalarias son demarcaciones funcionales en el ámbito del SAS, y que la dependencia de los centros periféricos al hospital correspondiente, como en todo el sistema sanitario público de Andalucía, es, a todos los efectos, dependiente, y no sólo funcional y de coordinación, de forma que en su área de influencia toda la asistencia especializada que se presta está bajo la misma estructura de gestión.

En la enmienda número 3 al artículo 2, que se refiere a incluir en el Consejo de Administración miembros elegidos por el Parlamento, también decirles muy brevemente a sus señorías, porque caen también en el mismo error que el señor Fernández respecto a otra sobre las competencias, decirles que la empresa pública es una competencia, un problema del Poder ejecutivo, y no una tarea del Poder legislativo, señor García Trenado.

La enmienda número 4 no la aceptamos tampoco por no ser necesaria...

El señor PRESIDENTE

—Señor Pozuelo, su señoría debe ir terminando.

El señor POZUELO BORREGO

—Termino, señor Presidente. Espero algo de benevolencia teniendo en cuenta que debo contestar al resto de las enmiendas.

El señor PRESIDENTE

—Sí, señor Pozuelo, pero le ruego a su señoría que vaya...

El señor POZUELO BORREGO

—Me permite dos minutos.

La enmienda número 4 tampoco la aceptamos, como ya le digo. No es necesaria, ya que la Ley 2/1998, de Salud de Andalucía, recoge en su artículo 60 la situación en la que queda el personal estatutario, cuyo régimen jurídico se modifica como consecuencia de su incorporación a la plantilla de las empresas públicas, no pudiendo, por tanto, la ley de creación de empresa del Alto Guadalquivir contradecir la Ley de Salud; es obvio.

Finalmente, la enmienda número 5 ya la contesté anteriormente, conjuntamente con la enmienda número 10 de Izquierda Unida, ya que las dos tienen idéntico contenido. Los derechos constitucionales hay que cumplirlos siempre, aunque no vengán expresados en la ley.

Y, finalmente, presenta una enmienda *in voce* el Grupo

del Partido Andalucista, en la que habría que hacer una transaccional, porque hay que corregirla también en los tres apartados. Solamente lo corregía en el apartado 2; habría que corregirlo en el 1 y en el 3 también, pero que hay ningún inconveniente en aceptarlo por parte del Grupo Socialista.

Señorías, nuestro Grupo considera que la ley de creación de la empresa pública Alto Guadalquivir —y ya concluyo, señor Presidente— en Andújar es una opción acertada del Gobierno de Andalucía, con el objetivo de mejorar la forma de gestionar la sanidad al servicio de los ciudadanos, pero siempre salvaguardando nuestro patrimonio público, adoptando las fórmulas de gestión consagrada en nuestro ordenamiento jurídico, y preservando todas las garantías de control por el Gobierno y el Parlamento, para que la gestión del patrimonio público sea en todo momento transparente.

Y, señorías, con estas mejores posibilidades de gestión, se logrará una mayor eficiencia que redundará en una mejor y más ágil asistencia a los problemas de salud de la población asignada, motivos estos más que suficientes para no dudar en votar favorablemente a este proyecto de ley.

Gracias, señor Presidente.

[Aplausos.]

El señor PRESIDENTE

—Gracias, señor Pozuelo.

Señorías, vamos a pasar a votación. En primer lugar, señorías, en primer lugar antes de pasar a someter las votaciones de los votos particulares, solicitar si existe asentimiento de la Cámara para tramitar la enmienda *in voce* formulada por el portavoz del Grupo Parlamentario Andalucista.

Hay asentimiento de la Cámara.

Entiende la Presidencia también que, tal y como se han expresado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y el propio portavoz del Grupo Parlamentario Andalucista, existe mayoría en la Cámara para su aprobación; en consecuencia, será votada después de los votos particulares para su incorporación al dictamen.

Señorías, votamos en primer lugar el voto particular del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía.

Se inicia la votación.

El resultado de la votación es el siguiente: ha sido rechazado, al haber obtenido 10 votos a favor, 50 votos en contra, 31 abstenciones.

Señorías, votamos a continuación el voto particular formulado por el Grupo Parlamentario Popular.

Se inicia la votación.

El resultado de la votación es el siguiente: ha sido rechazado, al haber obtenido 31 votos a favor, 50 votos en contra, 10 abstenciones.

Señorías, votamos a continuación la enmienda *in voce* formulada por el portavoz del Grupo Parlamentario Andalucista.

Se inicia la votación.

El resultado de la votación es el siguiente: ha sido aprobada, al haber obtenido 91 votos a favor, ningún voto en contra, ninguna abstención.

Señorías, votamos a continuación el texto del dictamen. Se inicia la votación.

El resultado de la votación es el siguiente: ha sido aprobado, al haber obtenido 51 votos a favor, 10 votos en contra, 30 abstenciones.

Queda aprobado el proyecto de ley de creación de la empresa pública Hospital Alto Guadalquivir en Andújar.
[Aplausos.]

DEBATE DE TOTALIDAD DEL PROYECTO DE LEY 5-99/PL-0008608, DE REGULACIÓN DE LAS CONSULTAS POPULARES LOCALES EN ANDALUCÍA

El señor PRESIDENTE

—Señorías, pasamos a continuación al debate de totalidad del proyecto de ley de regulación de las consultas populares locales en Andalucía. Para su presentación, tiene la palabra la Consejera de Gobernación y Justicia del Consejo de Gobierno.

La señora CONSEJERA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

—Gracias, señor Presidente. Buenas tardes, señoras y señores Diputados y Diputadas.

Me cabe la satisfacción en este momento de presentar en nombre del Gobierno el proyecto de ley de consultas populares locales.

El sistema político español, como saben sus señorías, consagra en la constitución dos tipos de referéndum: uno vinculante, cuyo objeto es la ratificación y cuyas materias están tasadas —reformas constitucionales reguladas en el Título X, iniciativa autonómica y aprobación y modificación de Estatutos de Autonomías en los artículos 151 y 152, posible incorporación de Navarra al régimen autonómico, etcétera—, y, por otra parte, el consultivo, el otro tipo de referéndum, que se diferencia del anterior en que su resultado no es vinculante y su convocatoria tiene origen en la discrecionalidad. Es en el artículo 92.1 de la Constitución donde se encuentra una primera referencia a lo que verdaderamente singulariza respecto de la institución tradicional a este tipo de referéndum, su carácter consultivo y no vinculante.

También en el artículo 149.1.32 hay una primera aproximación —me refiero en la Constitución—, ya que, en las reservas de competencias exclusivas del Estado, se establece, entre otras, la autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum. Es precisamente este término, el de consulta popular, el que ha sido utilizado en el resto de la normativa estatal, en la Ley Orgánica 2/80, de 18 de enero, de regulación de distintas modalidades de referéndum, y en la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, y en el propio

Estatuto de Autonomía para Andalucía, que, en su artículo 15.2, atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia para el desarrollo legislativo del sistema de consultas populares locales en el ámbito de Andalucía, de conformidad con lo que dispongan las leyes y a que se refiere el apartado 3 del artículo 92 y los números 1 y 32 del artículo 149.1 de la Constitución.

Dado que la disposición adicional de la Ley Orgánica 2/80, del referéndum, excluye expresamente de su ámbito de aplicación las consultas populares que puedan celebrarse por los Ayuntamientos y que, por otra parte, la Ley 7/85, de Bases de Régimen Local, enmarca dentro de la legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma, con competencia estatutariamente atribuida, la posibilidad de que los Alcaldes sometan a consulta popular determinados asuntos, queda despejada la vía del desarrollo legislativo del sistema de consultas populares locales contenida en el mencionado apartado 2 del artículo 15 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Así, y para ser coherentes y respetuosos con el Estatuto, se ha tomado la nominación de «consulta popular local» para el título de este anteproyecto de ley que hoy presentamos.

Sus características, sin embargo, se han extraído de la legislación estatal; de la Constitución, su carácter consultivo, y, por tanto, no vinculante, y la competencia exclusiva del Estado para su autorización —artículos 92.1 y 149.1.32—; de la Ley Orgánica 271/1980, su ámbito municipal, el Ayuntamiento, y de la Ley de Bases del Régimen Local, su iniciativa, objeto, excepciones y regulación.

Como hemos visto, por lo tanto, buena parte de la justificación de este proyecto se encuentra, de alguna forma, en la necesidad de llenar el vacío legal existente. Como hemos visto, la disposición adicional de la ley orgánica, que regula las distintas modalidades de referéndum, contiene una inhibición expresa del legislador estatal en cuanto a las consultas populares que puedan celebrarse por los Ayuntamientos, que se regirán por lo dispuesto en la legislación de régimen local. Pero, a pesar de esta remisión, la regulación que de las consultas populares hace la Ley de Bases del Régimen Local resulta escasa e insuficiente, ya que su artículo 71 se limita a señalar que, de conformidad con la legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma, cuando ésta tenga atribuidas competencias, etcétera, los Alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la nación, podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la Hacienda local.

La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene atribuida la competencia por el artículo 15.2 del Estatuto. La regulación legal de las consultas populares, por lo tanto, va a venir a contribuir a la profundización y desarrollo de la autonomía andaluza. Por otra parte, y dado que de hecho se han venido realizando consultas populares por los Ayuntamientos, resulta conveniente, necesario, respetando el principio de autonomía municipal, establecer una regulación del procedimiento a seguir en este tipo

de consultas que garantice su transparencia y la participación de todos los ciudadanos en condiciones de igualdad; de ahí que se haya optado por hacer intervenir a las juntas electorales de zona, órganos independientes y cuya finalidad es, precisamente, garantizar su transparencia y la objetividad del proceso electoral y del principio de igualdad.

Con estas consideraciones se ha elaborado el proyecto de ley que se presenta y cuyo articulado se ha sistematizado en un título preliminar, que determina su objeto y ámbito de aplicación; un Título Primero, dividido en dos capítulos, que regula los aspectos básicos de la consulta, materias objeto de la misma, circunscripción, períodos excluidos y los requisitos de la iniciativa, tramitación de la preceptiva autorización del Gobierno de la nación y convocatoria.

Respecto de la iniciativa, conviene decir que, de conformidad con lo establecido en el artículo 18.1 de la Ley de Bases del Régimen Local, que reconoce el derecho de los vecinos a pedir la consulta popular en los términos previstos en la ley, se ha articulado también un mecanismo para posibilitar esta petición.

El Título II trata, por un lado, de la Administración electoral, cuya finalidad es garantizar la objetividad y transparencia de la consulta, y que se ha reducido únicamente a la junta electoral de zona y a las mesas electorales, bajo la superior autoridad de la Junta Electoral de Andalucía. Por otra parte, se define el cuerpo electoral y la elaboración de las listas electorales, y, por último, se regula la determinación de las sesiones electorales y la formación de las mesas, todo ello de acuerdo con la normativa electoral vigente, salvo en lo que respecta a las funciones de la oficina del censo electoral, que son asumidas por el Ayuntamiento y por la junta electoral de zona.

El Título III regula el desarrollo del proceso y se ha dividido en cuatro capítulos que tratan de la campaña de propaganda de los documentos oficiales, del voto anticipado, simplificando la tramitación exigida para el voto por correo en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, y de la votación, escrutinio, proclamación de resultados y recursos.

Como novedad, se crea en la Disposición Adicional Primera un registro de consultas populares locales, radicado en la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, que podrá proporcionar a cualquier organismo o persona interesada en el tema información sobre las consultas populares tramitadas, las autorizadas, la materia objeto de las mismas y los resultados de las que se hayan celebrado. Asimismo se ofrece a los Ayuntamientos la cooperación y asistencia técnica que precisen para el desarrollo del proceso.

En cuanto a los costes económicos que pudieran derivarse de la celebración de una consulta, éstos correrán a cargo del Ayuntamiento convocante de la consulta y se concretan casi exclusivamente en las compensaciones económicas a los miembros de la junta electoral de zona y de mesas electorales, así como los gastos correspondientes a la confección de impresos oficiales y papeletas y sobres de votación.

El texto actual del proyecto de ley ha asumido, en la medida de lo posible, las sugerencias contenidas en los informes que han sido solicitados, muy especialmente las sugerencias formuladas por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, dado el carácter que tiene esta ley, y, por supuesto, se ha incorporado la inmensa mayoría de las observaciones formuladas por el Consejo Consultivo de Andalucía. Este proyecto de ley, que espero alcance la aprobación de esta Cámara, viene a completar y a desarrollar la competencia de la Comunidad Autónoma en materia de Administración local. Asimismo, la ley, estoy segura, va a permitir un acceso más ágil, garantista y democrático a la participación ciudadana de los vecinos en los Ayuntamientos andaluces.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE

—Muchas gracias, señora Consejera de Gobernación y Justicia.

A este proyecto de ley no se le han formulado enmiendas de totalidad; en consecuencia, corresponde el posicionamiento de los distintos Grupos parlamentarios.

Tiene la palabra, en primer lugar, el portavoz del Grupo Parlamentario Andalucista, el señor Moreno Olmedo.

El señor MORENO OLMEDO

—Muchas gracias, señor Presidente. Señoras Diputadas, señores Diputados.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 15.2, recoge —y cito textualmente—: «Corresponde a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo del sistema de consultas populares locales en el ámbito de Andalucía». Desde que el 1 de febrero de 1982, fecha en la que el Estatuto andaluz es publicado en el BOJA, hasta el día de hoy han pasado más de diecisiete años; tiempo que hemos tenido que esperar a que por parte del Ejecutivo andaluz se hiciese uso de las competencias que el Estatuto andaluz le confiere, y podemos afirmar, por lo tanto, que hasta ahora los distintos Gobiernos andaluces no han sido capaces, o simplemente no han querido por cuestión de estrategia política, de cumplir con el Estatuto andaluz. Entendemos que es una dejadez de funciones que nos ha llevado a tener numerosas lagunas legislativas, que nos ha impedido avanzar en el autogobierno de Andalucía y que nos ha venido a demostrar una falta de fe de los diferentes Ejecutivos en las posibilidades del país andaluz.

El Gobierno catalán tiene regulados los aspectos que recoge este proyecto de ley desde el año 1987, Navarra lo hizo en 1990, Galicia hace tres años, e incluso Aragón, desde hace siete meses, dispone de un texto legal propio que regula las consultas populares locales. Andalucía, como repito, señorías, ha tenido que esperar diecisiete años para conseguirlo. Más vale tarde que nunca.

Hoy, por fin, tenemos la oportunidad de debatir sobre la legislación que regulará las consultas populares locales

en Andalucía, lo que significa no ya profundizar en la autonomía andaluza, sino, simplemente, cumplir lo que marca el Estatuto de Andalucía.

Señorías, hechas estas consideraciones previas, entro de lleno en el texto que nos ocupa.

El Grupo Parlamentario Andalucista tiene que volver a mostrar su más absoluta disconformidad por la forma en que se nos presenta este proyecto de ley. Al igual que ocurrió con el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía cuando se tramitó la Ley de Bienes de las Entidades Locales, ahora se nos vuelve a presentar un texto que, a nuestro entender, es un texto aislado para regular aspectos de la vida municipal. Tengo, por lo tanto, que volver a mostrar la disconformidad del Partido Andalucista, porque entendemos que la ley de consultas populares locales debe estar de un modo... y no en un texto aislado, que es el mismo posicionamiento que hemos hecho desde esta tribuna con relación a algo tan importante que desde el Partido Andalucista supone la autonomía municipal.

Cada día se hace más necesario que el Gobierno andaluz comience a trabajar en la Ley de Régimen Local de Andalucía, texto que debería contener el presente proyecto, al igual, por ejemplo, que ocurre en la legislación catalana, gallega, navarra y aragonesa. Los Ayuntamientos andaluces precisan dotarse de un marco legal amplio que suponga la ampliación de sus competencias; una ley de régimen local andaluz que, tomando como sustento la Ley de Bases de Régimen Local del Estado dote a nuestros Ayuntamientos de ámbitos competenciales propios, de la capacidad necesaria para gestionar sus intereses, de autoorganizarse, atendiendo, para ello, a las especificidades de Andalucía. Todo esto es imposible si no existe una ley andaluza de régimen local.

La autonomía local, las relaciones de los Ayuntamientos que forman parte de una comarca, la comarcalización de Andalucía, así como las consultas populares locales o la Ley de Bienes de las Entidades Locales, son aspectos que deben ser contemplados imprescindiblemente en esta ley que los andalucistas estamos demandando. Pese a esto, y dado que estamos hablando del cumplimiento del Estatuto de Andalucía, desde el Grupo Parlamentario Andalucista vamos a impulsar, en la medida de nuestras posibilidades, la aprobación del presente proyecto de ley.

Quisiera terminar, señorías, mi intervención destacando tres aspectos del texto que nos presenta el Gobierno, dos negativos y uno positivo.

En el lado negativo, tenemos cómo el proyecto de ley de regulación de las consultas populares locales en Andalucía recoge en sus apartados, los puntos 10.3 y 10.4, un plazo de 40 días para, simplemente, tramitar la documentación, 30 días para enviarla al Gobierno del Estado y 10 días para remitirla al Ayuntamiento promotor de la consulta. Y otra de las cuestiones que intentaremos mejorar en la enmienda al articulado es la referida a los gastos de las consultas. El artículo 14.2 obliga al municipio a que corra con todos los gastos necesarios para el desarrollo del proceso, sin tener en cuenta la existencia de Ayuntamientos cuya capacidad presupuestaria puede cer-

cenar a sus vecinos la posibilidad de celebrar una consulta popular.

En la parte positiva, hemos de felicitar al Ejecutivo andaluz por los requisitos que el proyecto de ley establece para que los vecinos puedan solicitar una consulta popular. Los porcentajes para el número de firmas necesario que se establece son más bajos que en el resto de las Comunidades que tienen ya reguladas estas consultas, facilitándose, por tanto, en Andalucía la posibilidad de que los vecinos puedan ejercer el derecho que la Constitución y el Estatuto les reconoce.

Y termino, señorías, con una crítica en general al texto. Nos encontramos ante un texto que, a nuestro entender, es demasiado amplio, que contiene aspectos regulados ya por la legislación del Estado en materia de referéndum, y quizás hubiese sido mejor remitir a esta legislación estatal, haciendo la salvedad de las juntas electorales de zona y la Junta Electoral de Andalucía, aunque, como ya saben sus señorías, es opinión del Grupo Parlamentario Andalucista en que no importa abundar si al final conseguimos un texto más completo y fácil de interpretar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE

—Muchas gracias, señor Moreno Olmedo.

A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, el señor Valderas Sosa.

El señor VALDERAS SOSA

—Gracias, señor Presidente.

Señorías, paso a fijar la posición de mi Grupo político con respecto al proyecto de ley de regulación de las consultas populares locales de Andalucía que nos trae hoy en el debate plenario de esta sesión.

Quiero empezar coincidiendo con el portavoz del Grupo Andalucista y refiriéndome a la intervención de la señora Consejera cuando plantea que el texto, el proyecto, quiere venir a llenar un vacío legalmente existente en nuestra Comunidad Autónoma con respecto a los municipios andaluces y a las entidades locales o a la Administración local andaluza. Y no tengo más remedio que coincidir con el portavoz andalucista, como hemos puesto muchas veces de manifiesto por parte de Izquierda Unida en esta tribuna, en que sólo es posible llenar ese real, tocable diariamente, vacío que existe en la Administración local desde la presentación en esta Cámara, tal como recoge y da posibilidades el Estatuto de Autonomía de Andalucía en sus competencias y como han hecho algunas otras Comunidades Autónomas, de una ley de régimen local de Andalucía que de una vez por todas, en este terreno, en el terreno de la autonomía municipal, de más capacidad de poder, de más competencia, de más recursos, de más financiación, los Ayuntamientos dejaran solventado de una vez por todas el vacío legal existente que se reconoce para esta ley y que, por coherencia con cuestiones que

le son de igual o mayor importancia, tienen en otras partes del trabajo municipal que hay que desarrollar en cada pueblo o de la acción que debe y el papel que debe jugar la Administración local.

Pero, situado ese primer elemento de reflexión, que no es la primera vez que hacemos en esta Cámara, también queremos situarnos en saludar que, tras dieciocho años, dos décadas, esta ley, que es necesaria, se venga a situar para posibilitar un mayor nivel de participación de los ciudadanos en la vida democrática, otro de los ejes de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía: lograr cada día un mayor nivel de participación en los asuntos públicos y en las tareas de la democracia por parte del conjunto de los ciudadanos. Por lo tanto, nosotros nos congratulamos, con independencia de la primera reflexión y análisis crítico que hacemos sobre el vacío existente, de que esta ley se presente en la Cámara en esta legislatura, en este momento, y además que la solventemos antes de que termine esta legislatura, como luego me referiré.

Y nos congratulamos porque la presentación de este proyecto de ley no le queda muy alejada a Izquierda Unida de otro proyecto de ley que presentó en una referencia de consultas populares de referéndum, de ganar participación y democracia directa de los ciudadanos en las acciones de los intereses generales y públicos que fueran de gran contenido social y a los que hubiese que llamar a la participación, en los que en la etapa anterior, en el curso 1994-96 de este Parlamento, tuvimos el placer de presentar, aunque la Cámara no le dio el visto bueno. Creo recordar que en aquel momento ni Partido Socialista ni Partido Popular estaban muy de acuerdo con aquel proyecto que nosotros presentamos para el tema de consultas, referéndum y mayores actividades de participación.

Por lo tanto, la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos es un principio recogido ampliamente en los textos legislativos básicos de nuestro sistema democrático, de otros sistemas democráticos; la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía establecen con claridad nuestra capacidad política para impulsar y facilitar la participación de los andaluces en la vida política económica, cultural y social de sus municipios, y, por lo tanto, nosotros vamos a ser favorables a que este proyecto de ley vea la luz y, lógicamente, debatamos luego sobre sus contenidos, de los que algo Izquierda Unida quiere aportar para mejorar un proyecto de ley que —lo digo hoy en la Cámara— es uno de los proyectos de ley..., la mayoría en general así lo necesita, pero éste necesitaría que se llegase a un amplio acuerdo, a un amplio consenso entre todas las fuerzas políticas destacables.

Por lo tanto, nos gustaría que no ocurriese como en el proyecto de ley que se ha discutido anteriormente, en el que, cuando se habla de qué acepta el resto de Grupos políticos, hasta que hay que sentirse contento porque sólo una enmienda ha sido aceptada, al menos a este Grupo político.

Yo espero que en este proyecto de ley, que posiblemente no vaya a tener una gran amplitud de enmiendas,

lógicamente las enmiendas se vean, se consensúe, se esté dispuesto —y se lo digo al Grupo mayoritario— a transaccionar, a transaccionar para que tengamos el mejor proyecto sobre consultas populares, que permanezca vigente durante bastante tiempo y que ayude a una mayor participación democrática. Ése debe ser el objetivo fundamental, no elementos que pudieran suponer limitación, restricción o algunos planteamientos que nosotros —y luego me referiré— no vemos adecuadamente.

Porque los Ayuntamientos juegan, efectivamente, un papel determinante como organizadores del núcleo público de convivencia más próximo a los ciudadanos, y porque en ese núcleo de convivencia más próximo las decisiones políticas de especial trascendencia deben ser, en muchos casos, sometidas a referéndum consultivo. Que es cierto que en el caso de las Corporaciones locales se plantean como exclusivamente no vinculantes, pero que también es cierto que, cuando una gran mayoría de ciudadanos consultados orienta por dónde tiene que caminar un asunto o una política, difícilmente cualquier Gobierno podría darle la espalda a ese tipo de actuaciones, aunque, lógicamente, a nosotros nos gustaría que pudiera alcanzar, pero son elementos legales en los que habría que profundizar y discutir el que en algunos casos tuviera elementos de vinculación. Pero, ya digo, hay una vinculación importante, que es la decisión política de los ciudadanos expresada tras una consulta en las urnas.

Desde esta posición, lógicamente, favorecer la participación, favorecer la democracia más amplia es un objetivo siempre de la izquierda, y, por lo tanto, vemos con muy buenos ojos este proyecto de ley, igual que vimos la reforma de la Ley de Iniciativa Legislativa Popular o el proyecto de ley, que nosotros hemos tratado de reformarlo y mejorarlo en algunas ocasiones y seguiremos tratando de mejorarlo. O de impulsar una ley de participación ciudadana, o una ley sobre consultas y referéndum en la Comunidad Autónoma, o esta ley que hoy se nos trae aquí.

Por lo tanto, la apuesta por el cambio en Andalucía es también una apuesta por impulsar esa mayor participación democrática y una mayor implicación de la sociedad en los asuntos públicos. Ésa es una apuesta que refuerza la convivencia civil: alcanzar políticas sociales justas y redistributivas en el marco de una sociedad más participativa. Y esta ley nosotros queremos situarla y hacerla eficaz ahí: como un instrumento de control en manos de la acción ciudadana. Ése es para nosotros el valor que tiene y debe tener esta ley: un instrumento de control en manos de la acción ciudadana, que es, al mismo tiempo, dar posibilidad a los ciudadanos de impulso, de control de los poderes públicos, en este caso en la Administración local, más allá exclusivamente de la consulta que cada cuatro años se hace en las convocatorias electorales.

Y voy terminando.

Por ello nos parece bien este proyecto, que se une al derecho que en el marco local otros pueblos y otros territorios, que ya se han planteado aquí —yo no lo voy a plantear—, pues tienen, lo han tenido antes y han

gozado de esa posibilidad antes, y yo no sé hasta qué nivel de utilización se ha hecho de la misma. Lo que sí nosotros vamos a animar, cuando esta ley esté en marcha, es que en muchos casos en los municipios se haga uso de ella.

Pero quiero dejar tras ese aspecto de positivo a que la ley se debata en este Parlamento tres elementos de reflexión. Tres elementos de reflexión y una propuesta; una propuesta que les hago a todos los Grupos, y que le hago también al Consejo de Gobierno. Este proyecto de ley no se puede quedar en un brindis al sol en esta legislatura: este proyecto de ley tiene que tener la seguridad de que, antes de que esta legislatura termine, el proyecto de ley está aprobado para que los ciudadanos lo puedan gozar inmediatamente o utilizar como instrumento inmediatamente.

Nosotros tenemos —y hemos visto los ritmos y los procesos— una cierta duda, que a mí me gustaría que se me aclarase, porque podemos estar equivocados, que es que en el tiempo que nos quedan con tres Plenos que nos quedan por delante, con un trámite normal, posiblemente acabemos esta legislatura y resulta que el proyecto de ley se nos quede encima de la mesa y tengamos que retomarlo posteriormente. Por lo tanto, nosotros lo que plantearíamos es que, si el resto de los Grupos está dispuesto a que el trámite de urgencia se realice con este proyecto de ley, nosotros lo proponemos aquí en la Cámara, al Consejo de Gobierno. Queremos una ley para la participación, para más participación; brindamos la oportunidad de utilizar el trámite de urgencia, el de urgencia, porque nosotros, efectivamente, en otras dos reflexiones tenemos otros planteamientos que hacer. Un planteamiento que, efectivamente, sabemos que son elementos de carácter consultivo, pero habría que dotar de algunos elementos que en algunos casos vinculen un poco más al Gobierno, a los Gobiernos municipales, estas consultas. Entonces verlo más allá exclusivamente desde el plano político, y ahí queremos reflexionar con el conjunto de las fuerzas políticas. No queremos decir que sean vinculantes, sino queremos hablarlo con todos para que, en algunos casos, sobre algunos temas, haya vinculación política en una consulta, vinculación jurídica, más allá del plano político. Y creo que es posible; es posible si todos los Grupos políticos que están en esta Cámara, de acuerdo también con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, están de acuerdo.

Por lo tanto, no seamos restrictivos, vayamos a la ofensiva, porque significa ganar en un papel de participación en el marco de instrumento de los ciudadanos muy importante, y, por lo tanto, en el marco de la democracia, tremendamente importante.

Segundo aspecto sobre el que queremos reflexionar: el aspecto especialmente... Aquí se han dicho algunos artículos; yo voy a mencionar el 6, el 10 y el 14. Pero ¿en qué marco? En el marco de que no se ponga una limitación, que nosotros no compartimos, al menos en determinados tramos, para que desde la iniciativa ciudadana se pueda hacer la consulta, sino que podamos poner listones más bajos que permitan que las consultas sean más fáciles de ser impulsadas desde abajo por los propios

ciudadanos. Por lo tanto en el 6, en el 14, que se refieren a elementos, unos de gasto, otros de cuántos ciudadanos se necesitan recoger de firmas para impulsar una consulta, podamos ponerlos en unos parámetros con que sea posible y fácil que por parte de un determinado grupo de colectivos ciudadanos la impulsen con más fuerza que eso —si mal no recuerdo, 10% en los de menos de cinco y, al mismo tiempo que sube, pues, lógicamente, tal vez ese 10% en ciudades de cinco, pudiera ser fácil, pero cuando vamos creciendo en el tema de número de habitantes de una ciudad, posiblemente se nos quedan excesivamente amplios los porcentajes que hemos puesto—.

Por lo tanto, también ayudar a no limitar, sino a abrir, porque yo estoy convencido, después de quince años en la vida municipal, que tuve que hacer un referéndum, y además que lo cumplí, aunque no me vinculaba, y además que lo perdí en los planteamientos que tenía, un planteamiento diferente, pero al final la voluntad ciudadana se ha cumplido, sobre un tema que era esencial para aquella ciudad, para la mía en este caso, y no pasó absolutamente nada. Pero es más, esa experiencia particular, desde mi acción directa como gobernante de una ciudad en un momento determinado, pues se dio una vez en la vida de la ciudad en un tema que era de mucho interés. Por lo tanto, el limitar quizás no obedece a la responsabilidad con la que los ciudadanos se toman también el elemento de las consultas y de la participación amplia en democracia. Por eso yo ahí no lo dejaría.

Y, desde ese sentido, para terminar —y gracias, señor Presidente, por su benevolencia—, nuestras propuestas programáticas comparten como principio ese tema de una mayor participación directa de la población en la planificación, gestión y evaluación del trabajo y de la actividad de las diversas Administraciones; la descentralización de las decisiones también está ligada, en los casos importantes, a este tema de consulta, o la implicación de los ciudadanos a través de la consulta en asuntos de gran interés general en sus pueblos y en el marco de su competencia. Por lo tanto, animo a esos dos planteamientos y espero respuesta, especialmente por parte del Grupo mayoritario del Consejo de Gobierno. Si vamos a la urgencia o no vamos a la urgencia, no nos vayamos a estar haciendo un brindis al sol, porque dentro de varios días se reúnen los municipios con la FAMP, y entonces se le puede ofrecer que hay un proyecto de ley equis, no un proyecto de ley que cierra esta legislatura, que es lo que pide Izquierda Unida.

El señor PRESIDENTE

—Muchas gracias, señor Valderas.

Señorías, a continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Calvo.

El señor CALVO CASTAÑOS

—Señor Presidente. Señorías.

Paso a manifestar la posición del Grupo Parlamentario Popular en relación con el debate de totalidad del proyecto de ley de consultas populares locales.

Permítanme que empiece mi intervención haciendo una doble consideración de tipo político, y después me referiré a algunos de los aspectos fundamentales de un proyecto de ley al que nosotros no hemos presentado enmienda a la totalidad, con lo cual no hay una discrepancia de fondo, sino más bien algún tipo de elementos de reflexión que después expondré.

Desde luego, empiezo por decir que estamos en el final de la legislatura —es algo obvio—, y yo creo que la legislatura se cierra en el ámbito de lo que llamaríamos, de balance del Gobierno en la política municipal, evidentemente con notorios y graves incumplimientos. Nuestro Grupo lo ha dicho en varias ocasiones, a través del portavoz en esta materia, mi compañero, el Diputado José Luis Rodríguez, y yo no tengo más que, lógicamente, reiterar sus manifestaciones. Ésta ha sido la legislatura de la política antimunicipalista del Gobierno del señor Chaves y de la Consejera, la señora Hermosín. Vamos a finalizar la legislatura y, lamentablemente, nos hubiese gustado que en estos meses, por lo menos, se hubiera rectificado esa política, y de eso hemos asistido a otros debates y a otros temas que, sin, por supuesto, de alguna forma, en detrimento de ningún tipo, digamos, de la ineficacia o de la importancia, de la relevancia que pueda tener este sistema de consultas locales, nosotros querríamos que hubieran sido otros los temas que hubieran estado presente en la legislatura, por lo menos en estos últimos meses.

Se salda la legislatura, por tanto, señores Diputados, con el incumplimiento de que no se ha presentado ni se ha impulsado el pacto local andaluz; no se ha reformado la política discriminatoria, en ocasiones, y en otros casos poco clara, del Consejo de Gobierno en materia de cooperación financiera con los Ayuntamientos, y, desde luego, se incumple flagrantemente el compromiso electoral del programa del Partido Socialista de una ley del Fondo Andaluz de Cooperación Municipal. Por tanto, política antimunicipalista y que arrostra, en nuestra opinión, algo tan serio como son estos incumplimientos.

En segundo lugar, tengo que decir que esta ley —y voy a repetir alguno de los elementos del debate del señor Moreno y del señor Valderas, porque lo tenía anotado aquí y hemos coincidido; no nos hemos puesto, evidentemente, de acuerdo, pero es la posición de mi Grupo—... Tengo que decir que, evidentemente, esta ley, venir ahora deprisa y corriendo, cuando ni siquiera sabemos si nos va a dar tiempo... Porque, claro, el señor Valderas, ha hecho un propuesta interesante, pero, claro, yo, por las áreas y los temas que llevo también en mi Grupo, pues veo que también hay otras prisas por otras áreas; vienen por el Consejero, el señor Gutiérrez, en la ley de las cámaras de comercio. Y, por otro lado, probablemente alguno de sus señorías tendrá también alguna insistencia sobre la necesidad de, de alguna forma, facilitar la discusión de otros proyectos de ley.

Esto significa, en definitiva, que el Consejo de Gobierno ahora quiere hacer, en pocas semanas, lo que

no ha hecho en cuatro años, y esto nos parece, realmente, una falta de seriedad por parte del Consejo de Gobierno del PSOE y del PA.

Y tengo que decirlo, que nos parece que esta ley, que hubiera sido incluso, en determinados momentos de la coyuntura municipal de estos últimos años en Andalucía, hubiera sido bueno haberla tenido ya desarrollada, haber tenido el instrumento legal previsto con una ley, por lo tanto, de consultas populares, esta ley no se ha impulsado su aprobación por el Consejo de Gobierno, incluso en etapas de mayoría absoluta, y ahora llega aquí —ya veremos si termina el trámite parlamentario— con dieciocho años de retraso. Incluso, cuando ha habido otras Comunidades Autónomas —y lo han dicho aquí algunos de sus señorías también—, ha habido Comunidades como Cataluña, como Aragón —digo por citar estos dos ejemplos, una Comunidad del 151 y otra del 143— en las que sí ha habido una voluntad política de facilitar estos instrumentos legales para acercar las instituciones al ciudadano y para facilitar el derecho de participación ciudadana en los asuntos públicos.

Por lo tanto, nosotros decimos que, bueno, más vale tarde que nunca, y esperemos y confiemos que este proyecto de ley pueda tener una terminación parlamentaria, aunque, ya digo, hubiera sido mejor que se hubiera facilitado de una manera mucho más sostenida, más tranquila, y se hubieran planteado, les hubiera dado tiempo, por voluntad del Consejo de Gobierno y de la mayoría parlamentaria, otros temas.

Tengo que insistir también, es opinión reiterada del portavoz y del Grupo Parlamentario Popular —digo el portavoz que lleva más estos temas de política local—, que hubiese sido mejor —y hemos tenido ocasión también de presentar esta misma posición en el proyecto de ley de bienes y entidades locales— que se hubiese planteado algo que está en el Estatuto, y a que el Partido Socialista siempre, sistemáticamente, siempre, se ha venido negando, en otras legislaturas y en éstas. Me refiero a la competencia que nos da, que nos otorga el Estatuto de Autonomía en su artículo 13.3 cuando habla de que es competencia exclusiva lo que es la regulación del régimen local, o sea, todo lo que son los aspectos fundamentales del régimen local en Andalucía, sin perjuicio, por supuesto, dice también este artículo 13.3 del Estatuto, sin perjuicio de lo dispuesto por la Constitución en su artículo 149.1.18, que, como sabemos, son aspectos del procedimiento administrativo común, régimen estatutario de los funcionarios, determinadas legislaciones —la legislación de expropiación forzosa—...; es decir, determinados ámbitos legislativos que, evidentemente, tendrían que estar fuera de esta competencia exclusiva. Pero competencia exclusiva, en materias muy importantes: el tema de financiación —ahí cabría perfectamente esta ley de régimen local andaluz—, los temas de cooperación municipal... Dejar claro hasta qué punto, como la señora Consejera nos tiene aquí, y el señor Ortega —y perdóneme que lo repita, no sé si va a intervenir después, pero ya tendrá ocasión de defenderse y, evidentemente, replicarme—, nos tiene que dar a entender aquí que es una especie de..., algo así como de gracia que hace el

Consejo de Gobierno de cooperar con los Ayuntamientos; esto es una interpretación jurídica que, si yo tuviese tiempo ahora, me gustaría tener tiempo para rebatir, pero bueno, independientemente de que hay unas competencias en ese tema y una responsabilidad del Estado, también de la Junta de Andalucía, no es una cuestión graciosa ni, de alguna forma, discrecional el que, de alguna forma, la Junta de Andalucía nos obsequie a los Ayuntamientos andaluces en determinadas políticas de cooperación: es una responsabilidad también de la Junta de Andalucía en virtud del Estatuto. Pero, dejando a un lado esta cuestión, *[ininteligible]* que hubiera sido mejor, en esa ley andaluza de régimen local, haber planteado aspectos tales como este de las consultas populares locales, lo mismo que el tema de los bienes y entidades locales, lo que es la parte patrimonial..., en fin, todos otros aspectos que pueden configurar los elementos básicos de un Derecho local andaluz, por decirlo de alguna forma. En ese sentido, se sigue en la misma línea de la parcelación de materias, y en ese sentido nosotros mostramos también nuestra disconformidad y planteamos de nuevo que hubiese sido mucho más conveniente una ley de régimen local de Andalucía, porque tenemos competencia para ello en el Estatuto de Autonomía.

Y dichas estas dos consideraciones políticas, o de política general, quisiera entrar en algo tan fundamental como es recordar elementos básicos que sustentan este proyecto de ley, y, por tanto, como no hay una posición disconforme, puesto que no hemos presentado una enmienda de totalidad, sí hay un aspecto que nos preocupa o quisiera, de alguna forma, subrayar en este debate de un proyecto de ley en el que, ya digo, no hay unas discrepancias por lo que observo, y por parte también de lo que aquí voy oyendo y lo que yo mismo voy manifestando, entre los distintos Grupos parlamentarios.

Por supuesto que el Partido Popular también cree en la participación ciudadana. No solamente que es un derecho, en el artículo 23 de la Constitución, que reconoce con carácter de derecho fundamental —no es un derecho cualquiera: es un derecho fundamental—, el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes —lo que se llama la democracia representativa—, sino también a través de otras fórmulas de democracia directa o semidirecta, como pueden ser los referéndum, referendos o referenda, como según quién lo quiera expresar, y también a través de los sistemas de consulta; por lo tanto, las otras fórmulas que hay de democracia.

Nosotros, efectivamente, creemos que ésa es la mejor forma de compensar y de, de alguna forma, instrumentar diversas vías de participación. Si bien la Constitución realiza una opción clara por la democracia representativa en atención a las características complejas de nuestra sociedad, evidentemente, también se establecen otras vías de participación, y ahí están, pues, la iniciativa legislativa popular, la iniciativa legislativa de los Ayuntamientos, el derecho de petición, las distintas modalidades del referéndum, etcétera. Y este sistema de consultas populares, evidentemente, estaría dentro de estas otras vías de fomentar y de facilitar la participación.

Sería bueno —porque yo ya entro en temas más de técnica jurídica o de planteamientos jurídicos— que se dejase claro cuál es, en definitiva, lo que se llama el sustento de la habilitación competencial que tiene la Junta de Andalucía en este tema, no porque dudemos que la Junta de Andalucía tenga competencias sobre el tema, que no dudamos: lo tienen muy claro, lo han dicho también sus señorías en sus intervenciones y yo no voy a referirme mucho a ello, está claro en el artículo 15.2 del Estatuto de Autonomía, que, efectivamente, dice que corresponde a la Comunidad Autónoma el desarrollo del sistema regulador, desarrollo legislativo del sistema regulador de las consultas populares locales, de conformidad con lo que dispongan las leyes a que se refiere el apartado 3 del artículo 92, y después los números 1 y 32 del artículo 149.1 de la Constitución, correspondiendo al Estado la autorización de su convocatoria. Pero, claro, observamos, observamos —quizás puede ser algo a mejorar o a discutir—, que en la exposición de motivos del proyecto de ley al que nos estamos refiriendo hay una frase en la que se dice que, diríamos, esta competencia se ejerce de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Española en el apartado 3 del artículo 92; es decir, no en las leyes. Creo que es importante hacer ver que, según nuestro Estatuto, es en las leyes. Y las leyes ¿cuáles son, la del artículo 92.3? Pues no hay otra nada más que la ley de modalidades del referéndum, según dice el mismo texto constitucional.

Es verdad —y la señora Consejera lo ha dicho en su exposición, es verdad— que hay una remisión por la propia ley orgánica de referéndum —por simplificar la expresión tan larga—, hay una remisión o un reenvío, como dicen algunos expertos, en su disposición adicional a la Ley de Bases de Régimen Local; Ley de Bases de Régimen Local que no solamente refuerza este mecanismo de participación, sino, incluso, abre otra vía, en el aspecto de las iniciativas, de que no sólo corresponderá a los Ayuntamientos a través de acuerdo plenario por mayoría absoluta arbitrar el sistema de consulta ante un tema concreto de competencias relevantes de ámbito local, sino que también se le da posibilidad de ejercer la iniciativa —diríamos el derecho de propuesta, de petición— por parte de los vecinos para que se lleve a cabo una consulta popular. Y ahí vemos el artículo 18 de la Ley de Bases de Régimen Local, que, en el apartado 1, apartado f), dice como derecho y deber de los vecinos pedir la consulta popular en los términos previstos en la ley, en las leyes, por tanto, que así lo reúnen.

Por tanto, quizás convenía eso, un poco releerlo, a través de esta interpretación, que no es poner en duda, sino más bien afinar, diríamos, en lo que es el título competencial, y, de alguna forma, tenerlo eso en cuenta porque también en el dictamen del Consejo Consultivo hay —sí, hay, pero no exactamente en el sentido que digo— una referencia en cuanto a que sería importante tener en cuenta, en ese dictamen... Dice que se produce una excesiva remisión —se refiere a otras cosas— al ámbito electoral, a la LOREG y a la Ley Electoral de Andalucía, y, por el contrario, se olvida de la Ley Orgánica 2/80, que es de la que estamos hablando, de la ley de moda-

lidades del referéndum, ¿no?, habla en la página 16 del dictamen. Incluso habla de otros elementos de en cuanto a la aplicación de lo que llamaríamos una excesiva aplicación de la LOREG y no, por tanto, de remisión a esta ley.

Bueno, en segundo lugar, la segunda cosa que nos preocupa es el aspecto de la excesiva complejidad del trámite que ahí se prefigura en el proyecto de ley. La verdad es que comprendo que tiene que haber como una confluencia de dos vías, la vía del Ayuntamiento, que, lógicamente, es más corta y más simple, porque es..., bueno, el acuerdo de la mayoría absoluta del Pleno tal, plantear el tema y llevar, por tanto, el proceso, diríamos, de consulta, ¿no?; pero hay otra vía, la vía de la iniciativa de propuesta de los vecinos, que, efectivamente, aparte de lo que ahí se refiere —y creo que es positivo—, el que se facilite por el número de habitantes los porcentajes que hay sobre el censo de la población, pero quizás habría que buscar...

El señor PRESIDENTE

—Señor Calvo, su señoría debe ir terminando, por favor.

El señor CALVO CASTAÑOS

—Voy terminando, señor Presidente.

Quizás habría que buscar fórmulas para agilizar en lo posible. Estamos estudiando un poco ese tema, la verdad es que imagino que la Consejería, el equipo de la Consejería, que habrá trabajado sobre el proyecto, habrá estado esto viendo también con detenimiento, y, bueno, ahí creo que podemos contribuir quizás a mejorar.

Quizá también otro tema, que sería cuestión de afinarlo si es posible... Me refiero al artículo 2, cuando se refiere, sobre todo, de alguna forma, en su apartado tercero creo que es, cuando se refiere... No, en el segundo apartado, artículo 2, segundo apartado, cuando se habla de sobre qué materias, sobre qué temas puede realizarse la consulta. Se dice que sobre asuntos de la competencia propia municipal de carácter local, pero, claro, acto seguido, en el segundo apartado de ese mismo artículo, dispone que, cuando en un asunto concurra un interés supramunicipal prevalente, o cuando sea necesaria la aprobación o el informe vinculante de otras Administraciones públicas, la consulta habrá de versar exclusivamente sobre aquellos aspectos en los que tengan competencias la entidad local. Es decir, entiendo que aquí se refiere, dentro de lo complejo que es explicar esto, un texto legislativo, a aquellos temas que son más complejos y que, según dice el proyecto, sólo podrán ser objeto de consulta en la parte, diríamos, que corresponda al ámbito de competencias de las entidades locales. Habría que buscar cómo buscar..., no sé, si es posible, afinar un poco esto. Porque, claro, puede haber problemas en el sentido de que se supone —bueno, se supone; en el Ayuntamiento puede haber de todo tipo— que el

Ayuntamiento tiene asesoramiento y tiene voluntad política para no salirse, diríamos, del marco jurídico de los temas objeto de la consulta; pero puede haber determinados momentos en que, bueno, en determinadas iniciativas de los vecinos para proponer una consulta, pues no se tenga, bien por desconocimiento, bien por cualquier tipo de razón, conocimiento de que hay temas o que hay aspectos de esos temas complejos, diríamos, que no pueden ser objeto de iniciativas de la consulta; temas que quizás convendría, de alguna forma, si es posible, perfilarlos aún más.

Nos preocupa también el asunto..., pero ya, simplemente, por mencionarlo, el asunto de los excesivos gastos para el Ayuntamiento —lo ha expuesto antes el señor Moreno; nosotros lo teníamos también aquí anotado—, y habría que buscar fórmulas para que no se quede en un planteamiento, en el que, por una parte, diríamos, ofrecemos el marco jurídico, facilitaríamos aún más todavía la tramitación, pero, por otro lado, faltase lo principal, que es muchas veces los medios materiales y, por lo tanto, la financiación de lo que un Ayuntamiento..., del gasto que supondría para un Ayuntamiento —sobre todo un Ayuntamiento si tiene poco poder presupuestario— para apoyar el establecimiento o la celebración de una consulta.

Por lo tanto, desde el Grupo Parlamentario Popular, entendemos que es un proyecto de ley al que, si logramos darle la urgencia...

El señor PRESIDENTE

—Señor Calvo, su señoría tiene que terminar ya.

El señor CALVO CASTAÑOS

—Termino ya, señor Presidente.

Sin más decir que nos parece, por tanto, un proyecto en el que entendemos que es un acierto el que se plantee, aunque llegue tarde, este sistema de consultas populares, y creemos que es mejorable en aquellos aspectos..., al menos algunos de los que he podido citar dentro de la brevedad de esta intervención.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE

—Muchas gracias, señor Calvo.

A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Ortega.

El señor ORTEGA CRUZ

—Señor Presidente, muchas gracias. Señorías.

He estado escuchando con mucha atención no sólo, naturalmente, la presentación del proyecto por parte de la Consejera, sino a los distintos portavoces que me han

precedido en uso de la palabra, y yo he sacado una conclusión de principio en relación con su intervención. A los tres les ha gustado este proyecto de ley, les ha gustado mucho. Claro, los tres lo han visto con buenos ojos, los tres han dicho que se trata de un buen proyecto; alguno se ha atrevido a decir, porque no tenía nada que decir, «hombre, que llega tarde, que no ha llegado cuando yo quería, cuando quería mi Grupo», pero que se trata de un proyecto interesante. Todos ahora apuestan por la participación de acuerdo con el proyecto. En definitiva, si yo les doy a ustedes una somera lectura, muy sintetizada, de sus intervenciones, se sorprenderán de que los tres protestan porque no hay una ley de régimen local en la que se incluyan: los tres. Los tres ven el proyecto con buenos ojos, los tres reclaman un amplio consenso, y los tres, en definitiva, esperan que, efectivamente, se produzca una aproximación que haga posible que este proyecto de ley sea una realidad y que no sea un brindis al sol.

Le contesto ya, señor Valderas: urgencia, por supuesto. Pero es más, yo después de escuchar la intervención de ustedes, la pregunta que me hago es que por qué no hemos hecho este proyecto de ley por lectura única. Si es que, realmente, ustedes no tienen prácticamente nada que decir. Podríamos haberlo hecho por lectura única, no por el proyecto..., vamos, por el trámite de urgencia.

Señorías, con el envío de este proyecto de ley de consultas populares, el Gobierno andaluz cumple con dos compromisos importantes según lo ven este portavoz y, en definitiva, el Grupo Socialista que representa. De una parte, un compromiso genérico pero esencial en la concesión democrática del Estado de Derecho y, en concreto, en la repercusión de esa concesión democrática que se tiene por parte del Grupo Socialista en relación con los Ayuntamientos, que es, en definitiva, facilitar la participación de todos los andaluces en la vida política, económica, social y cultural de Andalucía, contemplado en el artículo 12.1 del Estatuto, y que, en definitiva, no es sino un trasunto de lo que se contempla en el artículo 9 de la Constitución Española. Y de otra parte, un segundo compromiso; un compromiso que no es genérico, que es específico, pero que también es importante y que es un compromiso de desarrollo legislativo, que competencialmente le atribuye nuestro Estatuto también a la Comunidad o la Junta, en este caso, en el artículo 15.2 del mismo, de conformidad con lo que dispone también la ley orgánica de referéndum número 2/80, de 18 de enero, etcétera, etcétera, que hace, en definitiva, un reflejo de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 92 de la Constitución.

Pero, dicho eso, aquí hay algunas cosas importantes que hay que subrayar, y que a mí, además, me ha sorprendido un poco que ustedes las pasen por alto; si no de forma clara y expresa, han pasado de puntillitas sobre las mismas. Son características de un proyecto de ley que, sin duda alguna, son importantes y que hay que referirse a ellas de forma laudatoria, pero les cuesta a ustedes trabajo reconocer cuándo una cosa se presenta y es muy buena; incluso cuando les gusta. Les cuesta mucho trabajo, y por eso han pasado de puntillitas sobre eso. Yo voy a tratar de recordarles algunas cuestiones

muy importantes que el Grupo Socialista observa en este proyecto de ley, y que yo estoy seguro que ustedes también lo han observado, fundamentalmente el señor Valderas y, en definitiva, el Grupo que representa de Izquierda Unida.

Éste es un proyecto de ley que, si uno lo lee y lo compara con otros que se han aprobado por otras Comunidades Autónomas, tiene sensibles diferencias. Una —que no es de tono menor—: este es un proyecto de ley que tiene una muy rigurosa sistematización temática y es de muy buena técnica legislativa. Es verdad, se ha dictado después y, por tanto, tiene el beneficio de lo que se ha dictado antes; pero también tiene la virtud de haber, lógicamente, mejorado lo que existe antes, con rigurosidad, con claridad, con sistematización. Pero, yendo al fondo de la cuestión, hay otras cosas mucho más importantes.

Éste es un proyecto de ley en el que, de alguna manera, está presente, desde mi punto de vista, el principio del respeto de la lealtad institucional y del principio de no intervención o de la mínima intervención en los asuntos locales por parte de la Comunidad Autónoma. Hay un absoluto respeto a la autonomía municipal, y lo hay en dos temas importantes, que ustedes han pasado sobre ellos, insisto, de puntillitas, pero que son muy importantes.

Uno, si ustedes observan, en este proyecto de ley hay un momento en la tramitación de esa consulta en la que, tras la aprobación correspondiente por mayoría simple —que no sé si es la absoluta, sino la simple para la iniciación del procedimiento por parte del Pleno municipal—, esa solicitud, tanto si ha comenzado por la propia Corporación municipal en Pleno como si ha sido a iniciativa de los vecinos, es necesario que esa solicitud se plantee por parte del Ayuntamiento hacia el Gobierno, que, según el artículo 92 —el Gobierno central, el Gobierno del Estado—, que, según el artículo 92 de la Constitución, es el que tiene reservada esa autorización. Y como en otros proyectos o en otras normas que regulan esta materia en otra Comunidad, esa solicitud, naturalmente, se hace a través del máximo representante del Estado en la Comunidad, que no es otro que el Presidente de la Comunidad.

Bien, pues, cuando se le solicita al Presidente de la Comunidad que tramite esa solicitud ante el Gobierno central, hay normas en otras Comunidades que dicen que esa solicitud se acompañará con un informe del Presidente en el que se manifestará de forma expresa si es compatible esa consulta popular con los intereses generales de la Comunidad correspondiente. Así se dice, por ejemplo, de forma expresa en el Reglamento que regula la consulta popular local en Cataluña, aquí que tanto se habla de Cataluña y que parece que se tiene como referencia... En Andalucía tenemos que legislar por nosotros mismos y no tener referencia, que parece que tenemos un complejo de inferioridad; aquí se puede manifestar que no es así. Aquí el informe del que se habla no se califica, porque se es perfectamente respetable con los Ayuntamientos, y no se quiere, de ninguna manera, hacer confrontar la opinión ni la decisión adoptada por el Pleno con la posible conveniencia o inconveniencia con los in-

tereses generales; se habla de una repercusión, de un informe. Pero es que hay otro tema, otro tema, que es importantísimo igualmente y que se encuentra en el artículo 11. Observen ustedes que, cuando aquí, en el proyecto de ley, se refiere al momento en el que se ha recibido la autorización por parte del Gobierno central, y el Presidente de la Comunidad, a través de la Consejería de Gobernación y Justicia, les envía a los Ayuntamientos correspondientes esa autorización, se dice a continuación, exactamente en el artículo 11: «El Alcalde convocará la consulta popular correspondiente». En otras Comunidades no se dice eso; en otras Comunidades lo que se hace es, una vez recibida esa autorización, y comunicada al Ayuntamiento, se dice que será el Consejo de Gobierno de esa Comunidad el que convocará. Con lo cual nos encontramos con una curiosa situación en esas Comunidades, y es, que tratándose de una consulta popular, que le pertenece a los Ayuntamientos, sin embargo son el Consejo de Gobierno y su Presidente de esa Comunidad los que convocan, con lo cual se guantea literalmente al Ayuntamiento correspondiente. En este proyecto no; en este proyecto, nuevamente, de la misma manera que se hace en el artículo correspondiente al informe de la Presidencia, también con motivo de la convocatoria se hace un ejercicio de respeto, de consideración y de mínima intervención en los asuntos locales; en definitiva, un cántico a la autonomía municipal. Y ustedes no lo reconocen. ¿En que no lo han leído? ¿Es que no se lo han estudiado? ¿O es que, realmente, ustedes, cuando se encuentran con un asunto de esta categoría, ustedes lo silencian y no tienen la gallardía o la elegancia de reconocerlo públicamente?

Pero es que además, es que además —y termino—, la tercera consideración, la tercera característica: el equilibrio, el equilibrio y la moderación con la que se trata aquí la exigencia de requisitos en relación con los vecinos para la solicitud de una iniciativa que debe terminar en la realización de una consulta; o sea, cuando los vecinos sean quienes solicitan del Ayuntamiento que se realice una consulta.

Pues bien, cuando se hace un estudio comparativo de las exigencias y requisitos que se plantean en este proyecto, junto con otras exigencias y requisitos que se plantean en otra Comunidad Autónoma, nos encontramos con que también aquí asistimos al equilibrio, a la moderación, al respeto y al canto de la autonomía municipal, porque es aquí donde se dice que, por ejemplo, en Ayuntamientos que no superen los 5.000 habitantes, bastará con el 10% de las solicitudes de los habitantes censados, o sea, con 500, con 500 firmas. Y en aquellos en que superen los 5.000 y no excedan de los 100.000 bastará con 1.000 más el 5%. O sea, que son cantidades absolutamente posibles, equilibradoras. Si ustedes se van a otras normativas que regulan por Derecho comparado esta materia, y en concreto la catalana o la aragonesa, se encontrarán ustedes con que las exigencias son mucho mayores. Conclusión: en Andalucía, con este proyecto, lo que se pretende es respetar todavía más la autonomía municipal y hacer posible el ejercicio de una democracia semidirecta, que es, en definitiva, lo que

constituyen y representan los referendos y, en definitiva, las consultas populares de carácter local. Incluso, si me apuran ustedes, se han tenido en cuenta todas, absolutamente todas y cada una de las sugerencias que el Consejo Consultivo ha elevado para, precisamente, mejorar la técnica legislativa. Incluso aquella que se refiere a la subsanación de los efectos administrativos que pudieran presentarse junto con las solicitudes de los vecinos, y para lo cual se les dan, naturalmente, diez días hábiles, como así está previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo y Régimen Común.

En definitiva, señorías, se trata de un texto plausible, no de un buen texto legal, se trata de un texto verdaderamente plausible; un texto que merece el apoyo de todos los Grupos; un texto respecto del que el señor Valderas ha reclamado la tramitación de urgencia —yo estoy de acuerdo con ella y, es más, lamento que, de acuerdo con sus intervenciones, no se produzca la lectura única—, y un texto, en definitiva, que esperamos igual que ustedes que sea aprobado dentro de esta legislatura.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE TERCERO

—Muchas gracias, señor Ortega.

Al no existir enmienda a la totalidad, damos por finalizado el debate sobre el proyecto de ley de regulación de las consultas populares locales en Andalucía y pasará a la Comisión correspondiente para su tramitación.

DEBATE GENERAL 5-99/DG-0031199, SOBRE POLÍTICA HIDRÁULICA Y DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A POBLACIONES

El señor VICEPRESIDENTE TERCERO

—Pasamos al segundo punto del orden del día, debate general 31199, sobre política hidráulica y de abastecimiento de agua a poblaciones. Tiene la palabra el señor Consejero de Obras Públicas y Transportes.

El señor CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

—Muchas gracias, señor Presidente. Buenas tardes, señorías.

Nuevamente se trae a este Parlamento un debate sobre política de aguas, profusos debates en otra época, probablemente pasadas, y en este momento yo creo que responde claramente a la sensibilidad de la población, que nuevamente da respuesta en la calle a los problemas que este factor, el factor agua, constituye permanentemente en Andalucía.

La singularidad territorial y climática de Andalucía hace que el agua se convierta, sin ninguna duda, en el principal factor de estrangulamiento territorial de la región. La es-

casez de los recursos, la mala distribución de los mismos, condicionan de manera rígida y de manera permanente, evitando las posibilidades de desarrollo en nuestra región, el bienestar social de la población, la correcta conservación del medio ambiente, y además el propio equilibrio demográfico de Andalucía.

Como expresa el Plan Director de Infraestructuras de Andalucía, el análisis de las infraestructuras y sus necesidades hídricas exige la consideración del agua en toda su complejidad: como recurso natural limitado, mucho más acentuado en Andalucía que en el resto de España; como elemento imprescindible para satisfacer necesidades básicas y vitales del hombre, también peor resuelto en nuestra región que en el conjunto nacional; como factor productivo de primer orden para los sectores principales de la economía, y como agente principal de la ordenación natural del territorio, sustentador y condicionante de una gran parte del patrimonio de recursos ambientales, que en Andalucía alcanza un valor excepcional. Hay que considerar también el problema del agua en Andalucía, radicalmente marcado por la escasez de las precipitaciones y por su irregularidad, tanto en el tiempo como en el espacio. En este sentido, si en el extremo oriental andaluz las condiciones pluviométricas son comparables a las zonas más áridas del norte de Libia o de Egipto, en el extremo vertiente occidental, muy próximo al golfo de Cádiz, se registran máximos pluviométricos superiores a Galicia.

Esta realidad climática ha condicionado históricamente cualquier política de aguas que se hiciese en nuestra región. El análisis del conjunto de rasgos básicos que caracterizan los recursos hídricos en Andalucía, y también el uso que se hace de los mismos, pone de manifiesto la persistencia de un diferencial hídrico en comparación con el Estado. Diferencial en sus recursos naturales que, desde luego, está muy alejado de ese 17% que supone nuestro territorio, situándose por debajo del 11%; diferencial también, y de manera mucho más acusada si se analizan los recursos per cápita, indicador que expresa claramente la presión demográfica y de forma indirecta la propia actividad económica. Destaca el hecho, en este sentido, de que a cada andaluz medio corresponde prácticamente la mitad de agua que a un español medio, tanto si se atiende a recursos naturales como a recursos disponibles.

Un último indicador es la relación media entre los embalses y su capacidad y el volumen que se puede regular en ellos, es decir, la demanda anual a la que pueden servir. Esta relación en Andalucía es superior a tres, mientras que la media española está en el 1'5.

Si nos referimos al uso del recurso agua, el abastecimiento urbano representa prácticamente, siendo algo mayor, igual que la media española un 15%. El único pequeño diferencial se registra debido a la demanda del sector turístico y a la población estacional correspondiente. Sin embargo, el regadío en nuestra región es, con mucho, la principal de las demandas —supone el 81'8% del gasto frente a un 79'5 en España—, si bien en Andalucía el regadío tiene unas características mucho más importantes: ocupa más territorio, un 8%; supone un 4%

del producto interior bruto de la región, el doble que la media nacional; la población agraria andaluza también prácticamente duplica la media nacional, llegando a un 15%, y, lo que es más importante, el porcentaje de la población dedicada al regadío, a trabajar en él, es casi el 70% mayor en Andalucía que en el resto de España.

En definitiva, señorías, un peso territorial y económico mucho mayor que en el resto del país, y todo ello refleja claramente que la escasez de recursos hídricos en nuestra región ha exigido un uso cada vez más eficiente del agua, que resulta significativamente mayor en el resto de España, aunque coinciden también en nuestro territorio situaciones bien diferentes, desde regadíos altamente tecnificados, con una productividad muy elevada, a otros absolutamente obsoletos.

Hay otra cuestión, otra dimensión, que probablemente se olvida históricamente en este debate, que es la dimensión ambiental del agua. Preservar y mejorar la calidad de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, exige establecer objetivos de calidad con el fin de regular y controlar los vertidos, la emisión de vertidos, limitar su carga contaminante, ejecutar redes de saneamiento, plantas depuradoras necesarias, etcétera. La limitación de esta carga contaminante debe ser especialmente rigurosa en nuestra región, porque los estiajes son muy fuertes y las posibilidades de dilución de estos vertidos mucho más limitadas que en el resto del país.

Se hace necesario también impedir la sobreexplotación de ríos y acuíferos, es decir, asegurar, en el primer caso, la circulación de unos caudales ambientales que garanticen la conservación de los ecosistemas fluviales, y en el segundo, garantizar, asimismo, la existencia de unas reservas hidrogeológicas que permitan las descargas necesarias para la conservación de distintos ecosistemas, algunos de altísimo valor, como son nuestros humedales.

Se hace también preciso, señorías, en este sentido, destacar la importancia de la política forestal. Esta breve introducción no tiene más objeto que poner de manifiesto la trascendencia que para Andalucía tienen las políticas de agua, y la necesidad, cada vez mayor, de que seamos los andaluces, que sufrimos y, por tanto, somos sensibles a esta situación, quienes defendamos con contundencia soluciones al mismo.

Andalucía necesita más que otra Comunidad una política de aguas ambiciosa, progresista y solidaria. Y este Parlamento, señorías, expresión de la voluntad de los ciudadanos, debe plantearse, en este debate general sobre política de agua, en toda su complejidad y tener una única voz que responda a los intereses de Andalucía. Para ello considero oportuno hacer un brevísimo recorrido histórico de lo que ha supuesto esa política de aguas.

Mire, el I Plan General de Obras Hidráulicas, se promueve en España en 1933, y su ejecución prácticamente se mantiene sin altibajos hasta 1975, año en que se detiene a raíz de la crisis económica. Es cierto que aquel plan era un plan de oferta, un plan básicamente de oferta de recursos y de almacenaje de los mismos, y poco a poco debería irse situando, a lo largo de los años setenta, en una política que reflejara las nuevas circunstancias, las nuevas sensibilidades que iban apareciendo también

con la entrada de la democracia. Basta considerar, a efecto de las inversiones realizadas, que en el período de 1940 a 1975 la capacidad de embalse en España creció de 1.800 hectómetros cúbicos a 21.000 hectómetros cúbicos. Es decir, durante ese período, de 1940 a 1975, creció a un ritmo de 560 hectómetros al año. Por el contrario, los diez años siguientes, de 1975 a 1984, la capacidad de embalse solamente llegó a 24.000 hectómetros: prácticamente el ritmo de crecimiento se situó en la mitad, en 300 hectómetros cúbicos al año.

Pero el período de mayor esfuerzo y constancia en política aguas se produce clarísimamente durante los Gobiernos de Felipe González. La capacidad de embalse público durante el decenio 1985-1995 aumentó de 24.000 a 32.500 hectómetros cúbicos, es decir, prácticamente triplicando anualmente los diez años anteriores, 830 hectómetros cúbicos al año, siendo, por tanto, el período histórico más prolijo en cuanto al aumento de capacidades y regulación de nuestros ríos.

Pero no se quedó la política de aguas en una simple política de construcción de embalses. En el año 1985 se aprueba la Ley de Aguas, una ley definitiva por tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, porque por primera vez en la historia se analiza el agua dentro de todo lo que es el ciclo integral, todos los recursos hídricos que lo componen, y además porque por primera vez dejan de ser propiedad privada las aguas subterráneas en este país.

En segundo lugar, señorías, porque se da participación a los usuarios, por primera vez también, en la Administración del agua a través de los órganos de participación de las confederaciones, y también de los consejos, del Consejo Nacional del Agua fundamentalmente.

Y en tercer lugar, porque se da un planteamiento de un proceso profundo y participativo de la planificación hidrológica; se abandona la política de simple oferta de recursos y se sustituye por otra, que en cada caso busca el mejor de los sistemas que garantice las necesidades de la población; que optimice, mediante la eficiencia, el uso del agua como factor productivo; que considere el recurso agua como un elemento esencial para la preservación del medio ambiente y del equilibrio territorial desde el punto de vista demográfico y social. No hay ya una política hidráulica, sino que a partir de ese momento existe una política de aguas.

Desde estas premisas, señorías, los Gobiernos socialistas, tanto de la Administración central como de la Junta de Andalucía, pusieron en marcha la definición, mediante el consenso como método, de una política de aguas solidaria y concertada con agentes sociales, instituciones y territorios implicados. Una política valiente y comprometida, que dio lugar a la elaboración del anteproyecto de ley del plan hidrológico nacional, con los objetivos de garantizar el abastecimiento al cien por cien de la población hasta en la peor de las circunstancias, disponer de un proyecto hidráulico global, que diera disponibilidad de recursos en cantidad y calidad similares a los países de nuestro entorno, posibilitar el equilibrio territorial y eliminar el problema de agua como freno al desarrollo económico, contar con sistemas de regulación

y defensa de cauces eficaces para enfrentarnos a las inundaciones, y mantener y mejorar la disponibilidad y calidad del recurso a fin de garantizar un equilibrio medioambiental, preservando las condiciones de conservación de nuestros ecosistemas.

Por su parte, señorías, la Junta de Andalucía definía también paralelamente una política de aguas específica, incardinada en esas líneas maestras, pero acomodándonos, aunque superándolos, a lo que eran las competencias transferidas en 1984.

Hemos ido mucho más allá de esas competencias. El Acuerdo Andaluz por el Agua, señorías, resultó de un riguroso trabajo de concertación con todos los agentes sociales y Administraciones públicas, y consecuencia de ellos las observaciones al Plan Hidrológico Nacional, la gestión del dominio público hidráulico, las políticas de recursos y principales actuaciones hidráulicas llevaron a concebir el plan de actuaciones coordinadas, que se aprobó también por el Consejo Andaluz del Agua. Diversos documentos han constituido lo que ha sido la historia de la planificación de la política de agua en Andalucía; las bases de la política hidráulica, el acuerdo andaluz, el programa coordinado de actuaciones o el Plan Director de Infraestructuras sobresalen sobre todos los demás.

Pero me gustaría, señorías, ceñirme a las transferencias que en materia de aguas tiene asumidas la Junta de Andalucía, y que se producen en el año 1984 mediante Real Decreto 1132. Estas transferencias, en cuanto a la Consejería de Obras Públicas y Transportes respecta, se refieren a una prestación de auxilio técnico y económico a los Ayuntamientos en sus competencias, fundamentalmente abastecimiento, saneamiento, así como el encauzamiento y defensa de márgenes dentro de las áreas urbanas. Aparte de la Consejería, se tienen, a través de Agricultura, políticas de regadíos mediante el mantenimiento de las redes secundarias.

Dentro del concepto genérico de abastecimiento, hemos ido mucho más allá de las actuaciones que el mismo podía suponer. Hemos llegado a captación de aguas tanto superficiales como subterráneas, a tomar medidas de garantías de la potabilización del consumo, a la construcción de depósitos y redes de conducción en alta, e incluso a la construcción de embalses en zonas donde no había otra posibilidad de abastecimiento.

Disponer de infraestructuras que garanticen el abastecimiento en cantidad y calidad a las poblaciones y factores productivos, incluso en situaciones de sequía extrema, ha sido, sin duda, el objetivo prioritario de la política de aguas andaluza. Para ello se empezó haciendo un diagnóstico de la situación.

En el año 1987 se hizo la primera planificación con la aprobación de los planes de infraestructuras, planes provinciales de infraestructuras sanitarias, que dieron respuesta a las necesidades básicas de un momento donde las infraestructuras de abastecimiento eran pésimas en toda la región. Esta primera planificación se vio ampliamente superada y ampliada con el Plan Director de Infraestructuras de Andalucía, tanto en su avance del año 1994 como en su aprobación definitiva del propio año 1999.

El plan director sirve, en este sentido, de cohesión interna a la región. Define, prioriza y cuantifica las inversiones necesarias, y, por tanto, conjuga los objetivos de eficacia económica, desarrollo socioeconómica, distribución equilibrada de las actuaciones en el territorio, con criterios de desarrollo sostenible.

Para atender correctamente a la demanda urbana, señorías, hemos utilizado dos líneas de trabajo: una, ejecución de infraestructuras de abastecimiento que garantizara a cada uno de los núcleos andaluces estar conectado a fuentes de recursos de suficiente garantía en cantidad y calidad; una segunda, la mejora de la gestión en estos municipios.

Para la ejecución de infraestructuras de abastecimiento, la Consejería de Obras Públicas y Transportes ha destinado a lo largo de estos años 100.000 millones de pesetas, y prácticamente la tercera parte desde 1995. Y no ha sido de manera regular, señorías; tengo que recordar que, cuando se reciben las transferencias en el año 1994, se invierten en política de abastecimiento 1.623 millones: en el año 1999, la política de abastecimiento ha multiplicado por diez aquellos recursos. Dos factores claros y fundamentales: existían en aquel momento la carencia de infraestructuras de abastecimiento, en los años ochenta, y también, posteriormente, la experiencia que supuso para la Junta de Andalucía la mayor sequía del siglo entre los años 1992 y 1995. Uno y otro nos llevaron a una concienciación de la necesidad de buscar fuentes alternativas de abastecimiento, incluso a municipios que ya tenían alguna fuente que garantizaba, en momentos de normalidad, el abastecimiento.

Con la llegada de lluvias del año 1995, la Junta, lejos de olvidar la situación que habíamos padecido, mantuvo los niveles de inversión en abastecimiento, siendo responsables, invirtiendo alrededor de ocho mil millones anuales, tanto directamente en los Ayuntamientos, o mediante convenios con los mismos, así como haciendo aportaciones correspondientes a los propios Ayuntamientos en los planes provinciales de obras y servicio de las Diputaciones. Por tanto, señorías, más de cien mil millones de inversión directa en auxilio económico a los Ayuntamientos.

La otra línea de actuación, les decía, es la mejora de gestión de los abastecimientos. El abastecimiento a la población cada vez supera el ámbito municipal, y cada vez lo supera desde el punto de vista territorial y también administrativo, bien porque el recurso que dé garantía al abastecimiento depende habitualmente de fuentes alejadas del municipio, bien porque esas fuentes tengan que suministrar a distintos municipios, o bien porque una gestión óptima del recurso aconseje la utilización conjunta de medios materiales, de medios humanos, y también de fuentes diversas de abastecimiento.

Por esta razón, desde que la Junta de Andalucía se hizo cargo del abastecimiento, se han promovido los sistemas supramunicipales de abastecimiento, para ofrecer servicios de calidad, servicios homogéneos en toda la población, aportar a economías de escala en la disponibilidad de recursos, tanto en la calidad de los servicios como en la minoración de los costes. Esta actividad ha

permitido que en los últimos años se haya pasado de 27 sistemas supramunicipales de abastecimiento en todo el territorio andaluz en el año 1984 a 44 sistemas actualmente. Hemos pasado de tener 2.300.000 habitantes atendidos mediante sistemas supramunicipales en aquel año 1984, que era el 52% de los andaluces, a tener en este momento casi seis millones de habitantes atendidos, es decir, un 85% de la población, pero aún queda labor por realizar.

En este sentido, señorías, desde 1996, y a pesar de haber coincidido con las lluvias más intensas de los últimos años, la Consejería puso en marcha la definición de un plan para disminuir la incidencia de las sequías sobre los abastecimientos urbanos, con dos elementos esenciales: uno, definiendo interconexiones entre los distintos sistemas de abastecimiento, para que dieran mayor equilibrio y mayor garantía a todos los abastecimientos, conseguir la mejora de su gestión y, por tanto, convertir esto en una red de solidaridad interna en Andalucía. A ello hemos destinado, a los estudios y proyectos, una inversión de 350 millones de pesetas en el último año. Un segundo, un proyecto de mejora y garantía de abastecimiento en los núcleos rurales, a fin de disminuir los efectos de la sequía sobre los abastecimientos de estos núcleos, que son los más débiles ante estas circunstancias climáticas. La base del abastecimiento de gran parte de los mismos suelen ser fuentes de suministro de gran sensibilidad a los episodios secos.

Para disminuir esta sensibilidad, señorías, es necesario mejorar la gestión, y sin ninguna duda también, incidir sobre el comportamiento de la demanda; demanda que en estos casos, en los pequeños núcleos, tiene, desde luego, una menor importancia en cuanto a los efectos sobre el abastecimiento.

La Junta de Andalucía ha ido mucho más lejos de sus competencias también, realizando un estudio, mediante convenio con el Instituto Tecnológico Geominero de España, un estudio de todas las aguas subterráneas de Andalucía, para detectar y conocer las características de nuestros acuíferos, para saber la cantidad de agua, la capacidad de explotación de los mismos, la calidad de los mismos, y, por tanto, la capacidad de prestación de servicios que pueden dar en momentos extremos de sequía. A fin de tener estos datos, hemos invertido, mediante ese convenio, 250 millones de pesetas desde el año 1995.

Por tanto, en resumen, señorías, la Junta tiene una política clara y definida frente al problema del abastecimiento en la región. La Junta es el principal agente inversor de la región, a pesar de que los Ayuntamientos son los que tienen la competencia del abastecimiento. La Junta lleva quince años prácticamente adoptando medidas efectivas, que hoy dan una garantía de cantidad y calidad en el suministro a la inmensa mayoría de los municipios andaluces; se han promovido sistemas supramunicipales que han hecho más eficaz la gestión, que han dado más calidad al recurso, que han hecho también que la población tenga más garantías en su abastecimiento; se han detectado día a día nuevas fuentes de suministro; se han planificado la mejora de los sistemas de abastecimiento y la interconexión entre los distintos sistemas, y se ha

cooperado, de manera especial, como no se ha hecho en ninguna otra Comunidad, con los Ayuntamientos mediante un auxilio técnico y económico permanente para mejorar sus infraestructuras, e incluso se ha llegado a incentivar, mediante convenios con las Diputaciones, el que los Ayuntamientos prioricen las inversiones hidráulicas.

Por otro lado, señorías, hemos desarrollado también actuaciones tendentes a concentrar los vertidos, a mejorar y modernizar la extensión de las redes locales, en colaboración con las Diputaciones en todos los núcleos menores de 20.000 habitantes. Especial atención hemos dedicado a saneamiento y depuración de aguas residuales, tanto litorales como continentales, de manera que ello nos va a permitir cumplir con éxito el primer horizonte —finales del año 2000— que contempla la directiva europea, y, por tanto, en este momento les puedo decir que llevamos construidas 93 estaciones depuradoras y más de 35 actuaciones complementarias en materia de depuración. De esta manera también la Consejería de Agricultura comienza a desarrollar el plan litoral de reutilización de aguas residuales para regadíos.

En definitiva, señorías, hemos desarrollado una política activa en materia de agua que supera con mucho las competencias reales que tenemos atribuidas, y que ha supuesto la transformación y modernización de nuestras infraestructuras hidráulicas con inversiones que superan los doscientos treinta mil millones de pesetas.

Hasta el año 1996, señorías, la colaboración entre las dos Administraciones, la central y la autonómica, se mostraba claramente eficaz, especialmente en situaciones tan graves como la sequía de los años 1994 y 1995. Las medidas de emergencia contra la sequía, el plan de la metasequía, que totalizaron más de trescientas actuaciones en prácticamente la totalidad de Andalucía y una inversión extraordinaria de más de ochenta mil millones de pesetas fueron un claro exponente de esta colaboración.

Por ello, yo creo que podemos sentirnos orgullosos, aunque no satisfechos; queda mucho por hacer aún. Sin embargo, señorías, tengo que decirles que desde el año 1996 se introdujo un vertiginoso e inoportuno giro, desde las líneas de trabajo dinámicas, progresistas y solidarias que desarrollaban el Gobierno anterior hacia posiciones estáticas en la inversión, indefinidas en la gestión y mercantilistas en la concepción del recurso; un giro que merece, desde luego, nuestra atención, y también nuestra preocupación y ocupación en su análisis.

La planificación de las cuencas, señorías, la llave de las compuertas de los embalses, la política de gestión y administración del dominio público hidráulico, las concesiones de caudales y las autorizaciones, la gestión de los recursos, tanto superficiales como subterráneos, son competencia exclusiva del Estado y, por lo tanto, responsabilidad del Gobierno de la nación, a quien corresponde ejercerlas, así como ejecutar todas las obras declaradas de interés general del Estado. Siendo éste el actual nivel competencial, la política de aguas del Gobierno de la nación, señorías, la que ha venido desarrollando durante estos últimos cuatro años, ha tenido cuatro variables sus-

tanciales desde mi punto de vista: la falta absoluta de planificación, la paralización de las inversiones, la dejación de la responsabilidad en la gestión y la falta de diálogo y transparencia. Y tras estas características se apunta, de manera cada vez más clara, una preocupante voluntad privatizadora.

Decía que una de las cuatro variables es la falta de planificación. La constitución del último Gobierno, del Gobierno del Partido Popular, señorías, dio entrada a la etapa más triste en políticas de aguas de todo el período histórico al que me he referido, desde la República hacia acá. El hito más importante de esa política de aguas ha sido la paralización del Plan Hidrológico Nacional; un plan cuyo anteproyecto fue dirigido en el año 1993 al Consejo Nacional del Agua, tras haber recogido más de mil observaciones y sugerencias, y que había supuesto el mayor esfuerzo de planificación hidráulica que se había realizado jamás en la historia de España.

Ha necesitado el Gobierno tres años y medio para el trámite formal de aprobación de los planes de las cuencas, ya redactados, y algunos de ellos, incluso, aprobados por el Consejo Nacional del Agua. Ha sabido, en definitiva, el Gobierno de la nación, destruir lo hecho hasta la fecha: guardar el Plan Hidrológico Nacional, sin haber construido ninguna planificación alternativa. Y lo que es menos explicable: se han desperdiciado unos años magníficos, con una climatología idónea, para haber trabajado con tranquilidad. Primero porque la climatología de estos años no ha generado ninguna situación de emergencia que requiriera el esfuerzo y la dedicación de la Administración hidráulica de nuestro país; segundo, porque no hay mejor momento para buscar el consenso y el acuerdo que cuando los embalses están llenos.

Señorías, pero el Gobierno de la nación, además, ha paralizado bruscamente la política de obras y de inversiones que se había emprendido en 1985 con el Gobierno socialista. Basta analizar las inversiones del Ministerio de Medio Ambiente recogidas en los presupuestos del Estado para los ejercicios 1997, 1998 y 1999. En 1997, el presupuesto para política de aguas cayó un 70% en España y su ejecución no superó el 60%. En Andalucía se ha bajado de 70.000 millones en 1996 a 21.000 millones en 1997, continuando esa línea de desinversión.

Pero como las cifras dan opción siempre a la controversia, señorías, el nivel de desinversión en la obra pública se ve con mayor claridad y no supone ninguna simplificación visualizando qué es lo que ha ocurrido realmente con nuestras infraestructuras hidráulicas.

Miren, en este período, en los últimos cuatro años, el aumento de capacidad de los embalses, desde 1996 en Andalucía, ha sido cero hectómetros cúbicos; las nuevas inversiones en construcción de embalses, es decir, la construcción de nuevos embalses, cero pesetas a lo largo de los cuatro años; los nuevos trasvases entre cuencas, cero metros lineales; el aumento de los recursos trasvasados a cuencas deficitarias, cero litros. Y lo grave, señorías, es que, detrás de muchos de estos ceros, se corresponden a inversiones que se han dejado de ejecutar y que estaban proyectadas, con proyectos hechos, programadas, declaradas de interés general del Estado

desde el año 1993 y que tienen nombres y apellidos, y que desde entonces duermen el sueño de los justos. No quiero hacer una relación exhaustiva de las mismas, pero sí les tengo que decir que el retraso de la ejecución del Plan Nacional de Saneamiento y Depuración, con obras declaradas de interés general del Estado en 1993 en el Campo de Dalías, en la Costa del Sol, en la Costa Tropical, en Ronda, en el Campo de Gibraltar, en el entorno de Doñana, todas ellas son competencias del Estado y paralizadas desde hace cuatro años, con reconocimiento expreso, además, de los altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente de que no van a cumplir la directiva europea en el primer horizonte, olvidando claramente la importancia que para nuestro sector turístico tiene el litoral y la importancia ambiental que para ciertas zonas especialmente sensibles de nuestra región tiene la depuración. Miren, y tenían mucho menos que invertir de lo que le corresponde en este plan a la propia Junta de Andalucía.

El anillo hídrico de Huelva y los ramales del río Tinto, la conexión de los sistemas Quiebrajano y Víboras: llevo cuatro años dirigiéndome a la Ministra para hablar e intentar cooperar, con dinero de los andaluces, en la ejecución de obras declaradas de interés general del Estado como solución a estos problemas. Respuestas: ninguna. Ni a la Junta, ni a los Alcaldes afectados, que, por cierto, hoy están encerrados en la Subdelegación de Gobierno de Jaén. No hay respuestas, no hay proyectos, no hay inversiones, no hay política hidráulica. Melonares, La Breña 2, Úbeda La Vieja, Alcolea, Cerro Blanco, Arenoso, Canjáyar, Nacimiento, Alto Almanzora, La Colada, etcétera, duermen el sueño de los justos.

En definitiva, señorías, en más de tres años y medio, el Gobierno del Partido Popular no ha comenzado más que una sola obra hidráulica, la presa de El Andévalo, de la que la Ministra ha puesto recientemente la primera piedra. Eso sí, la obra adjudicada por el Gobierno socialista en 1996: han tardado tres años en empezar una obra adjudicada.

Pero, además, no acaban presas prácticamente finalizadas hace ya tres años. Casasola, en Málaga, tiene paralizadas todas las obras de la Junta de Andalucía, de la conexión de Casasola con Pílon, porque son incapaces de cerrar la presa. Víboras en Jaén, en la misma situación. O hacen interminables otras obras como la presa de Rule.

Un frenazo al esfuerzo inversor, señorías, realizado por los Gobiernos socialistas a lo largo de una década, que, a modo de inventario-resumen, supuso la entrada en funcionamiento de 28 nuevos pantanos, tres de ellos aún en construcción; que ha puesto en funcionamiento más de treinta sistemas supramunicipales de abastecimiento, incrementando las infraestructuras de saneamiento, depuración y reutilización de aguas, especialmente en el litoral y en las grandes poblaciones; que ha permitido profundizar en el conocimiento y la utilización de las aguas subterráneas; que puso también, incluso, en marcha el primer trasvase importante dentro de nuestra región; un esfuerzo inversor continuado que ha supuesto, a lo largo de 1984 a 1995, aumentar la capacidad de embalse de Andalucía lo mismo que en el

resto de la historia: aumentar un cien por cien la capacidad de nuestros embalses.

Esperábamos al menos, señorías, que, al no invertir en embalses, hubieran destinado estos recursos a una política de ahorro, a mejorar las infraestructuras de transporte del agua, a modernizar nuestros regadíos, a recargar los acuíferos, a obtener recursos no convencionales. Hablaron mucho durante la sequía los señores del Partido Popular de las desaladoras, pero, miren, a estas alturas, ninguna dotación significativa para ninguna de estas políticas y, para más inri, la única desaladora que se construye en Andalucía en este momento la pagan entre Europea y la Junta de Andalucía, aunque la ha vendido el Partido Popular como suya.

Esperábamos, señorías, que la concentración de las políticas de agua en el nuevo Ministerio de Medio Ambiente al menos hubiera dotado de una mayor dimensión ambiental a esta política, con un programa de deslinde sobre el dominio público hidráulico, que estaba muy avanzado, con restauración, limpieza, consolidación, reforestación de márgenes y riberas y entorno de los embalses, con actuaciones sobre los humedales, o con otras actuaciones de carácter hidrológico-forestal y de conservación de los suelos.

Señorías, en política de aguas se han perdido cuatro años, y aunque durante los años lluviosos no me he cansado de repetir aquí, en esta Cámara, y fuera de ella, que no debía producir la lluvia nunca amnesia en los responsables de la política de agua de este país, ha sido necesario que llegue un nuevo año seco para que se evidencie con rotundidad que el problema no es la sequía. Los años secos sólo ponen de manifiesto las debilidades que aún subsisten en nuestro territorio para afrontar la dualidad hídrica que padecemos. Hay que hacer entender, señorías, que la única vía para abordar de manera definitiva nuestros déficit de agua pasa ineludiblemente por inversiones, tanto para mejorar la oferta como para racionalizar la demanda del recurso. Pero, señorías, se han abandonado totalmente las responsabilidades en la gestión del recurso. Alguien tendrá que explicar algún día cómo en un solo año se ha consumido en Andalucía el 40% de la capacidad de nuestros embalses, un hecho insólito en la historia de la gestión del agua en Andalucía.

La dejación de responsabilidades en la gestión se hace día a día palpable en el abandono de la vigilancia de los cauces fluviales, en la ausencia de previsión de la dotación de caudales, etcétera; una gestión claramente ineficaz, sin criterio alguno, salvo que fuera puro electoralismo por estar en un año con convocatorias.

Por último, señorías, contra la transparencia y la participación, en contra de las mismas, que caracterizaron a todo el período anterior, a todo el proceso de planificación del Plan Hidrológico Nacional, de los planes de cuencas, de la Ley de Aguas, etcétera, hemos vivido —y en esto se nos ofrece un paradigma claro— unos años de absoluto oscurantismo. El Gobierno ofrece el paradigma de su incapacidad de diálogo y la nula participación con una única obsesión: mercantilizar y privatizar un recurso escaso como el agua, que, sin duda, será la mejor política para que llegue la especulación.

La falta de diálogo ha encontrado su cenit en el debate sobre las transferencias de las cuencas. Andalucía es la única Comunidad Autónoma en la que aún no se han transferido las competencias sobre las cuencas intracomunitarias. Que, por cierto, todavía ni la Ministra reconoce que son intracomunitarias, a pesar de que ustedes lo llevaban en su programa electoral: el Sur, el Guadalete-Barbate, el Tinto, el Odiel y el Piedras.

En 1994 estaba cerrado el acuerdo de transferencias; yo mismo expliqué en una sesión parlamentaria que no era el momento de asumirlo, porque estaban totalmente vacíos los pantanos, porque era una situación de extrema gravedad en Andalucía y no era el momento para hacer una transferencia; sin embargo, el propio 12 de enero de 1996, antes del cambio de Gobierno, pedí nuevamente las transferencias, una vez que aparecieron las primeras lluvias.

Señorías, la petición de las transferencias no es una cuestión de voluntad política: es una cuestión de respeto a la ley, es una cuestión de que el Partido Popular y el Gobierno de la nación tienen que entender que o hacen las transferencias, o tendremos que llevarlo a los tribunales para que hagan las transferencias. Éste es un tema ya en que no cabe más debate ni más discusión. La Ministra no puede seguir escondida, el Gobierno no puede seguir escondido: hay que respetar las leyes, y sobre todo, señorías, leyes básicas como la Constitución y nuestro Estatuto de Autonomía.

Hemos mantenido una postura razonable en el Guadalquivir, yo creo que una posición más razonable imposible. Nadie duda de que el Guadalquivir es Andalucía. Es cierto que una pequeña parte territorial de la cuenca, un 8%, queda fuera de nuestra Comunidad, pero apenas un 1% de los recursos corresponde a esa parte. Nuestra propuesta personal, que le hice al Secretario de Aguas, fue un tiempo de cogestión, un tiempo de cogestión de esta cuenca, y, posteriormente, un traspaso, un traspaso de la gestión de la misma, que parecía una fórmula legal absolutamente y razonable, por otra parte.

Para concluir, señorías, la desidia, la falta de sensibilidad hacia este problema, las inversiones inexistentes, la mala gestión, el despilfarro, la voluntad de abrir caminos hacia la privatización, han erosionado, en los cuatro últimos años, una política de solidaridad y de esfuerzo inversor que estaba absolutamente encauzada. Hoy, Alcaldes de Jaén están encerrados por esa desidia, y en unos días agricultores, regantes, sindicatos de nuestra Comunidad, la cuenca del Guadalquivir al completo, se manifestarán por la falta de sensibilidad del Gobierno de la nación ante los intereses de los andaluces.

Señorías, se hace preciso un cambio drástico y urgente en la política de aguas del Gobierno de la nación. El impulso del Plan Hidrológico Nacional, la puesta en ejecución de los planes de cuencas, el respeto a las legítimas aspiraciones de Andalucía para gestionar sus aguas y una política activa en inversiones de regulación y de ahorro se hacen imprescindibles.

Señorías, el resultado de este debate debe ser un signo evidente de esa necesidad que Andalucía debe

exigir, y, como dije al principio, desde este Parlamento y a ser posible con una sola voz.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO

—Muchas gracias, señor Consejero.

Corresponde la intervención de los distintos Grupos parlamentarios de menor a mayor.

Grupo Parlamentario Andalucista. Señor Dell'Olmo, tiene su señoría la palabra.

El señor DELL'OLMO GARCÍA

—Señor Presidente. Señorías.

Estamos hoy ante uno de los debates más importantes de la legislatura. Éste no es un debate más, sino que es el debate del agua en Andalucía, el debate de un bien económico y ecológico que limita el desarrollo de los pueblos. Y desde el Grupo Parlamentario Andalucista entendemos que el debate debe centrarse en algo que es fundamental para Andalucía y no en una confrontación, un episodio más de la confrontación, como a la que día tras día estamos asistiendo en esta Cámara, en esta recta final de la quinta legislatura y cuando los tambores de guerra, de guerra *monclovita*, pues suenan sin cesar llamando al combate entre las dos grandes fuerzas políticas por encima de los intereses de la tierra.

Estamos ante un bien importantísimo para el desarrollo de Andalucía, como decía anteriormente. Si en la década de los sesenta y los setenta las guerras en el mundo fundamentalmente tenían como motivo las disputas de intereses económicos fundamentalmente centrados en los pozos petrolíferos, hoy día, a lo largo de los noventa, se ha demostrado cómo ese bien, que es el agua, también supone disputa entre los Estados, y, de hecho, si hablamos del conflicto israelí-países árabes, gran parte de los territorios ocupados se ha ido manteniendo como consecuencia de que eran importantes reservas de agua.

En consecuencia, el agua es un recurso natural con un importante valor estratégico para Andalucía. Las condiciones de este clima mediterráneo del que gozamos hacen que el ciclo de las lluvias sea tremendamente irregular, y tanto, en el tiempo, con esos períodos recurrentes de sequía interanual y fuertes oscilaciones estacionales a lo largo del año, pues marquen que una parte de este territorio tenga un claro gradiente de aridez, desde el oeste hacia el este, con notables diferencias en las disponibilidades entre zonas con capacidad de regulación —zonas montañosas— y zonas consumidoras, como son los litorales de Andalucía y las tierras bajas. Junto a esa función ecológica, a la que vamos a hacer reiterada alusión, su papel en relación con la calidad de vida de los andaluces es clara. En torno al 80% de los recursos utilizados se destina al regadío agrícola, con lo que la relevancia económica del agua se vincula directamente con el mantenimiento de un sector esencial para Andalucía, como es la agricultura. Es importante hacer notar

la compleja trama de relaciones económicas, ecológicas, sociales y culturales que se establecen en torno a la reutilización de los recursos hidráulicos; relaciones, por ejemplo, en las zonas de captación y en las zonas de consumo, y entre éstas y las zonas situadas aguas abajo, cuyos recursos se ven afectados tanto en calidad como en cantidad. Estas relaciones se producen a diversa escala: desde el territorio que se asienta sobre un acuífero o el curso de un río de corto recorrido hasta el ámbito amplio de sus cuencas y cuencas hidrográficas, o de las diferentes cuencas interrelacionadas, una vez que entran en juego las transferencias de recursos entre unas y otras.

Por todo ello, el sistema hidrológico o hidráulico requiere un cuidadoso análisis desde la óptica territorial y ecológica, ya que constituye un factor clave para la correcta articulación y cohesión de Andalucía, de una Andalucía que, en su conjunto, debe aspirar a articular los territorios. Y también en esa articulación con el conjunto de los territorios del Estado, puesto que las políticas de solidaridad son imprescindibles en materia de aguas.

La estructura de este sistema en Andalucía viene definida por la existencia de una gran cuenca hidrográfica, la cuenca del Guadalquivir, que en más de un 92% —como se ha dicho aquí por parte del Consejero— de la superficie se encuentra en la Comunidad y escasamente el 1% de los recursos hidráulicos no está en territorio andaluz. Y además, un reducido número de cuencas independientes entre sí, formadas por ríos que desaguan en el Mediterráneo y que se agrupan, a efectos de gestión, dentro de la cuenca Sur. Un caso similar es el de varias cuencas de la vertiente atlántica, como las del Tinto, el Odiel, el Guadalete y el Barbate, y, por último, algunas zonas de las provincias de Huelva, Córdoba y Jaén, junto con Almería, que forman parte de cuencas que mayoritariamente se encuentran fuera de Andalucía, como es el caso del Guadiana y el Segura.

Poner en relación el agua con los objetivos de desarrollo de Andalucía supone, pues, abordar dos aspectos principales e íntimamente relacionados. En primer lugar, la plena asunción de competencia sobre las cuencas de Andalucía.

Señorías, este debate sería simple y llanamente un brindis al sol si no abordamos, de entrada, lo fundamental, y es que Andalucía tiene que tener competencias sobre el agua; si no hay competencias sobre el agua, lo que digamos aquí en esta tarde no sirve absolutamente para nada. Andalucía requiere, Andalucía exige, que, en virtud de lo establecido en el artículo 13.12 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, las cuencas intracomunitarias sean transferidas. Pero eso es algo que debió hacerse ya. Llevamos ya muchos años de autonomía, llevamos ya..., cinco legislaturas tiene esta Cámara, como para que todavía no se haya producido el traspaso.

El Partido Andalucista está harto de oír en esta Cámara que los traspasos se van a producir en cualquier momento; que los acuerdos, que las negociaciones, están a punto de cerrarse. Yo recuerdo, cuando fui por primera vez Diputado en esta Cámara, en la tercera legislatura, cómo, al final de la misma, el entonces Consejero señor López Martos anunciaba en la Cámara que había cerrado ya

las negociaciones con Madrid y solamente existían unos flecos, en aras a las obras hidráulicas, que se comprometía el Ministerio a traspasar su cuantía a la Junta de Andalucía en un período de diez años. Pues bien, desde esos últimos meses del año 1993 hasta esta fecha, no se ha avanzado absolutamente nada. Y eso es responsabilidad de quienes han gobernado en Madrid, de quienes lo hicieron catorce años, pero también de los que llevan ya tres años y medio, que es tiempo suficiente para haber adoptado esa determinación, junto con otras, como es la ejecución de obras hidráulicas en Andalucía.

Sin competencias, este debate es un debate estéril. Sin competencias, Andalucía no puede planificar ni gestionar sus recursos hidráulicos; sin competencias en materia hidráulica, se está devaluando la autonomía de Andalucía, y eso es algo que no podemos tolerar los andalucistas.

Dentro de muy pocos días..., yo diría que habría que quitar incluso ese plazo, yo creo que estamos ya en campaña electoral. Y todos los Grupos políticos van a estar hablando de Andalucía, de la defensa de Andalucía, de la autonomía de Andalucía, que son más autonomistas que nadie, algunos, incluso, desde sus profundas raíces en el centralismo —y yo ya no diría en el centralismo, sino en una concepción jacobina de España—, hablan ya de que son andalucistas, y, sin embargo, no han tenido tiempo, en tres años y medio, en casi cuatro años, de poder culminar esas transferencias. No hay voluntad política, y eso significa, sencilla y llanamente, que no se cree en la autonomía. Ustedes no creen en la autonomía si no son capaces de cumplir lo que dicen el Estatuto de Autonomía de Andalucía y la propia Constitución Española.

Nosotros, desde el Grupo Parlamentario Andalucista, consideramos como urgencia, como prioridad, el que Andalucía tenga cuanto antes las confederaciones hidrográficas, las cuencas intracomunitarias, y, desde luego, no hacemos renuncia al río Guadalquivir. Existen mecanismos constitucionales para que se puedan producir la transferencia, la titularidad y la gestión de esa confederación. Entendemos que, en virtud del artículo 150.2 de la Constitución, y en consonancia con el 13.35, creo recordar, del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que hace referencia, precisamente, a esa facultad que puede tener el Estado de transferir a la Comunidad Autónoma, mediante ley orgánica, algunas de sus competencias, es perfectamente realizable ese traspaso. En consecuencia, desde el Grupo Parlamentario Andalucista, eso lo consideramos como una prioridad antes de adentrarnos en lo que es el debate sobre el agua en Andalucía.

Andalucía necesita la conformación de un sistema que considere integralmente, desde su ámbito de gestión, el agua, las cuencas, sus cuencas y sistemas de explotación, y permita abordar sobre ellos una planificación y gestión coordinada dirigida, como gran objetivo, a una disponibilidad adecuada de ese recurso agua, tanto en cantidad como en calidad, para el conjunto del territorio, la población y las actividades económicas. Ello ha de suponer, a juicio del Grupo Andalucista, que la gestión y las asignaciones de agua sean fijadas públicamente y de manera

transparente a través de esos mecanismos de planificación.

Asumidas las competencias que reclamamos para Andalucía, este proceso de distribución competencial y conformación de un sistema de demanda, inexcusable, debe abordar un debate en profundidad en la sociedad andaluza sobre qué modelo de gestión de aguas necesita nuestra Comunidad cara al futuro. Este debate debe ser, por tanto, continuación al que se inició con el Acuerdo Andalúz por el Agua, y cuyas conclusiones debieron debatirse en sede parlamentaria, y en el que se manifestaron las distintas sensibilidades y posicionamientos en relación al agua, que han de servir como orientación para definir las líneas maestras de la futura política hidráulica andaluza, política que, en cualquier caso, debe ser fruto del consenso, de la concertación, entre los diferentes agentes sociales y económicos implicados.

Desde este punto de vista, el gran reto global que Andalucía ha de plantearse para su futuro en relación con el agua ha de ser el atender los siguientes aspectos de su gestión:

Las funciones, en primer lugar, ecológicas, económicas y sociales que exigen que la gestión se plantee, necesariamente, desde la perspectiva de un uso racional y sostenible, al tratarse de un recurso escaso, al menos en términos relativos, y susceptible de deterioro. Los objetivos de ese uso racional y de conservación deben ser primordiales.

Hoy es comúnmente aceptada la idea de que las estrategias en relación con el agua han de dar prioridad a la gestión de las demandas. En efecto, no es pensable el mantener un crecimiento ilimitado, nuevas demandas de agua, antes al contrario, ha de pensarse en una más correcta distribución y utilización de los recursos disponibles. Es evidente que la escasez de agua es un concepto relativo, pero el crecimiento de decenas de miles de hectáreas de regadío en Andalucía, especialmente en la segunda mitad del siglo xx, y en mucha menor medida el incremento de las demandas urbanas e industriales, por el crecimiento de la población, y también los niveles de calidad de vida que hemos alcanzado, son claramente los responsables de la escasez del recurso en la actualidad. Un escenario de mayor incremento de las demandas, especialmente para el regadío, choca con las cada vez mayores dificultades para incrementar los recursos disponibles. Y, en este sentido, es necesario llegar a un consenso social, un consenso fundamentalmente con el sector agrícola, para que el agua se destine a cultivos rentables. En Andalucía hoy día tenemos el grave problema de la escasez de agua, y eso va ligado a que una gran parte de ella se utiliza en una serie de cultivos que son excedentarios, que luego reciben penalizaciones de la propia Unión Europea, y esto, evidentemente, tiene una gran carga social, pero que tendremos que abordarlo desde el diálogo con todos los implicados.

Las posibilidades de incrementar la regulación de nuestros ríos a través del embalse van siendo cada vez más limitadas, y han de afrontarse graves problemas de impacto sobre el medio ambiente y el territorio, a la vez que una buena parte de los acuíferos andaluces se en-

cuentra ya con problemas de sobreexplotación que comprometen su ciclo de renovación y de contaminación-salinización que se ve ya en muchas costas andaluzas.

En la actualidad, señorías, los conflictos territoriales en relación al agua hacen que cualquier propuesta de transferencia choque con los intereses de las cuencas donantes. Por tanto, es evidente que la gestión del agua como recurso público ha de considerarse también desde una perspectiva estatal, con criterios de uso racional y un reparto equitativo; esa llamada que hacíamos anteriormente a que exista una solidaridad entre recursos, presuntamente excedentarios —evidentemente, todo el mundo puede alegar que no le sobra agua, porque hay muchos usos a los que destinarla—, pero está claro que en España existen cuencas que pueden ejercer esa solidaridad con otros territorios, como pueden ser algunas provincias de Andalucía, y recientemente aquí aprobábamos la transferencia de 50 hectómetros cúbicos para la provincia de Almería.

Desde esta concesión, señorías, es necesario considerar, como un punto de partida, la evidente inadecuación actual entre los recursos y las demandas de Andalucía, que determinan un déficit estructural de agua en muchas zonas del territorio, especialmente en la cuenca del Guadalquivir y en la cuenca Sur. Dicho déficit explica el papel del agua como factor limitante o estrangulamiento para el crecimiento de determinados sectores productivos, y la superación de tal situación requiere, sin lugar a dudas, una política de distribución del agua desde este sistema que tenemos actualmente, tanto a nivel estatal como internamente en las cuencas andaluzas.

En cualquier caso, es evidente que la opción de futuro más importante debe centrarse necesariamente en la gestión y racionalización de las demandas. La mejora de las eficiencias de las infraestructuras de transporte y distribución, afectadas por grandes pérdidas, es otra de las prioridades que reclamamos desde esta tribuna.

Señorías, conocen cómo las pérdidas estimadas están en torno al 40% de media y que existen todavía, por desgracia, algunos regadíos en Andalucía donde esta cifra es mayor. En consecuencia, antes de planteamos la necesidad de nuevos pantanos es necesario ir al pantano más importante, al pantano del ahorro. Y el ahorro se consigue mejorando el mantenimiento de esas infraestructuras de regadíos, y también modificando las técnicas de regadío, los sistemas de regadíos, que se están siguiendo actualmente. Somos conscientes de que eso, en algunos sectores de nuestra agricultura, conlleva un esfuerzo que el agricultor no puede soportar; pero es el momento de derivar recursos para proceder a ayudas que permitan esa transformación en los sistemas de riego.

Y entendemos que otro de los criterios a utilizar y a introducir en esas políticas que tenemos que poner en práctica cara al cumplimiento de lo que es la directiva comunitaria en relación con el ciclo integral del agua, con esa depuración de aguas residuales, es la de priorizar la reutilización de esas aguas, una vez depuradas, una vez con ese tercer tratamiento, con ese tercer ciclo, para destinarla, en las costas andaluzas fundamentalmente,

a invernaderos, campos de golf y cultivos subtropicales, que son enormemente rentables y que ahora mismo son subsectores líderes de la economía andaluza.

Evidentemente, señoras y señores Diputados, el debate sobre el futuro del regadío andaluz desempeña un papel importante en este debate del agua. Lo decía anteriormente: el 80% de la misma se destina a ese uso. No obstante, y al margen de esas políticas de ahorro y de mejora de las infraestructuras, el Grupo Parlamentario Andalucista entiende que es necesario también realizar un cambio en los criterios de las políticas tarifarias en Andalucía. Entendemos que es necesario ir hacia un sistema de tarificación...

El señor VICEPRESIDENTE TERCERO

—Señor Dell'Olmo, le ruego vaya terminando su primera intervención.

El señor DELL'OLMO GARCÍA

—Señor Presidente, voy a ir concluyendo mi primera, y me parece que única, intervención, si no hay alguna apertura de turno por parte del señor Consejero.

En consecuencia, señor Presidente, entendemos que en ese cambio en la política tarifaria debe primar un ahorro, un ahorro que suponga que el agricultor vaya a pagar por aquella agua que consume y, en consecuencia, no sea un tanto alzado por superficie lo que ahora mismo, pues, puede permitir que algunos desaprensivos derrochen el agua.

Señorías, concluyo, atendiendo al requerimiento de la Presidencia, en el sentido de que el Grupo Parlamentario Andalucista entiende que lo primero es tener la titularidad del agua; en segundo lugar, la planificación, el que tengamos dotación suficiente a medio y largo plazo para poder ejecutar aquellas obras hidráulicas que permitan dotarnos de la cantidad de agua necesaria para atender al abastecimiento de agua a poblaciones, a la industria y a la agricultura, y eso, desde luego, no puede hacerse sin, en primer lugar, tener esas competencias, y sin que haya destinados recursos suficientes, mientras tanto, el Gobierno central que las detenta para invertir en Andalucía.

Tenemos una Ministra, la señora Tocino, que es la Ministra que ha obtenido el récord en puntuación en materia de pantanos en Andalucía: la señora Ministra no ha llegado ni siquiera a sacar un 0'5, no ha hecho un pantano, tiene un cero en política de pantanos en Andalucía. La señora Tocino, la señora del cero en pantanos en Andalucía, y eso, desde luego, es algo que está suponiendo un fuerte *handicap* a la hora del desarrollo económico de Andalucía y el abastecimiento a poblaciones. Abastecimiento en el que no hay que descartar la planificación de plantas desalinizadoras en las costas andaluzas para evitar, en los momentos de mayor impacto de la sequía, que tengamos que acudir a restricciones fuertes, con lo que supone en la merma de calidad de vida de los ciudadanos

y, de una manera directa, en la afectación a la industria turística, que es una de las que más puestos de trabajo está manteniendo en Andalucía.

Concluyo diciendo que hablar de política de aguas en Andalucía es hablar de autogobierno, es hablar de poder para Andalucía, y hay quienes niegan el poder a Andalucía, niegan la conquista del pueblo andaluz en su Estatuto de Autonomía y niegan lo que sea de primera necesidad para el andaluz del siglo XXI: el agua.

El señor VICEPRESIDENTE TERCERO

—Muchas gracias, señor Dell'Olmo.

Corresponde el turno al Grupo de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía. Su portavoz, señor López Calvo, tiene la palabra.

El señor LÓPEZ CALVO

—Muchas gracias.

Señorías, quien me ha precedido en el uso de la palabra en representación del Grupo Parlamentario Andalucista ha definido este debate general como el debate más importante de la presente legislatura. Yo, realmente, no sé si calificarlo así o no calificarlo, porque en varias ocasiones, desde esta tribuna, se ha hecho la misma apreciación sobre otro tipo de debates. Lo cierto es que no debe ser considerado muy mayoritariamente como el principal debate, o el debate más importante, de la legislatura, sobre todo por el Grupo proponente de este debate general, cuando sus portavoces están ausentes del debate; no debe ser el debate más importante de la legislatura cuando el Presidente del Gobierno de la Junta de Andalucía, el Presidente de la Junta de Andalucía, está ausente de este debate; no debe ser el debate más importante de la legislatura, cuando han dejado solo, solo, solo al Consejero de Obras Públicas, al Consejero de Obras Públicas. No mire para allá, que, como no sea que están invisibles los señores Consejeros y señoras Consejeras, lo cierto es que está usted, en este momento y en este debate, solo. Ni siquiera le ha acompañado el Consejero de Medio Ambiente, que algo tendrá que decir, por las relaciones que existen, por los condicionamientos que existen, para la política hidráulica desde la perspectiva medioambiental. Yo sé que el señor Manuel Gracia ya se sentó hace mucho tiempo en los sillones del Consejo de Gobierno, pero en estos momentos no se ha sentado.

Por lo tanto, quizás podía haber una primera reflexión: ¿Qué ha motivado que hoy día, en el inicio de este Pleno parlamentario, se inicie con un debate general del agua? ¿Por qué el Grupo Parlamentario Socialista decidió, en la Junta de Portavoces, que se realizara hoy el debate general del agua?, cuando la prueba, la prueba del algodón, significa que nadie de los que han defendido esta necesidad de debatir la política global del agua está presente en el debate. ¿Qué sea posible como una táctica legítima de calentar el ambiente, de darles cobertura institucional a legítimas movilizaciones de sectores afectados

que existen en Andalucía? Pues puede ser y es legítimo, pero sectores afectados de Andalucía que tienen intereses contrapuestos, como muy bien sabe el señor Consejero: los intereses contrapuestos de las poblaciones que, después de tanta iniciativa, de tantos años de Gobierno en Madrid y en Andalucía, no han logrado tener un abastecimiento suficiente de agua domiciliaria. Tantos años de propuestas, de iniciativas, de inversiones, y todavía no han tenido la oportunidad de tener un abastecimiento suficiente, pero también de calidad de aguas.

Yo creo que ése es el problema, como, naturalmente, también existen distintas perspectivas frente a la necesidad de un desarrollo socioeconómico por parte de sectores de la agricultura andaluza. No es lo mismo el gran propietario de tierras de regadío, de zonas de regadío, a la explotación familiar agraria: la necesidad de este recurso y la utilidad social de este recurso no es exactamente la misma.

Por lo tanto, para nosotros, siempre que se hable de agua, es importante; siempre que se tomen iniciativas para mejorar las condiciones de abastecimiento y de calidad de aguas, es importante; siempre que se tomen decisiones para aumentar y dar cumplimiento a la directiva europea sobre la depuración, saneamiento y reutilización del agua, es importante; siempre que se hable, que se debata, que se acuerde y que se tomen decisiones para modernizar nuestras redes, canalizaciones de transporte y distribución de agua, es importante. Pero, sobre todo, es importante que por parte del Gobierno andaluz, del señor Consejero, y del partido principal que sustenta al Gobierno andaluz, haya una reorientación de su política. Y ese reto, que nos ha planteado el señor Consejero desde esta tribuna, de la necesidad de un acuerdo por unanimidad en torno a medidas que generen una política hidráulica, que generen una nueva política en Andalucía en torno al agua, nosotros lo vamos a aceptar. Y le aceptamos, y le reconocemos y le felicitamos, porque han cambiado de opinión en torno a la necesidad de que haya transferencias de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir. Y es bueno. Y no porque unos u otros lo hayamos defendido antes: porque era necesario para Andalucía.

Y usted ha hecho aquí mención a su posición hace unos años, en un debate parecido al de hoy, con más tensión y con más interés, no solamente parlamentario, sino social, con alguna pancarta sacada desde la propia tribuna de los invitados, y usted afirmaba que la Consejería de Obras Públicas y Transportes ha alcanzado un principio de acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, llegándose a acordar el traspaso de competencias en los siguientes términos: El ámbito de competencias del traspaso serían las cuencas intracomunitarias, con algunas precisiones que figurarían en un acuerdo complementario; los medios humanos serían prácticamente todos los pertenecientes a la Confederación Hidrográfica del Sur y un mínimo a los que corresponden a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y Guadiana. Los medios materiales serían todos, los inmuebles, instalaciones, maquinarias, mobiliario, etcétera, que corresponden a las cuencas que

se traspasan. Queda pendiente una serie de cosas, y, sobre todo, ya, hace pocos días, la Consejera de Economía y Hacienda, el mismo Consejero, la misma Consejera de Economía y Hacienda, a obra nueva, ya que en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera se acordó formar un grupo de trabajo para analizar todas las cuestiones relativas a la obra nueva de aquellas cuencas que fueran objeto de transferencias. Y la efectividad de estos traspasos sería la de la cuenca del sur en la fecha en que fije el real decreto; las cuencas del Guadalete, Barbate, Tinto, Odiel y Piedras a la entrada en vigor del real decreto que modifique el ámbito de las actuales cuencas del Guadiana y del Guadalquivir. Por lo que se refiere a la cuenca del Guadalquivir, y por exceder al ámbito territorial de una sola Comunidad Autónoma, que ya conocen las previsiones constitucionales y estatutarias de la propia Ley de Aguas, se admite —admitía usted— en esta última la tramitación o transferencia de la tramitación de las autorizaciones en el dominio público hidráulico, ni siquiera de la cogestión de la gestión. Por lo tanto, para nosotros es un paso fundamental, y, por lo tanto, puede contar con nuestro sí, sin reservas de ningún tipo, a la transferencia de las cuencas hidrográficas de Andalucía, incluyendo, y especialmente, la del Guadalquivir. Por tanto, un primer punto de acuerdo entre su señoría, el Gobierno de Andalucía, el Grupo que lo sustenta, y el Grupo de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía.

Pero yo creo que podemos llegar, en ese reto que nos ha lanzado, a muchos más acuerdos. Principal acuerdo: que si en estos momentos culmina esa reforma de la Ley de Aguas, que, en términos generales, la consideramos positiva, y así la votamos en su día en el Congreso de los Diputados, en línea de la privatización, no de la gestión, sino de la privatización del propio recurso agua, poder elevar, desde Andalucía, por el carácter estratégico, estructural y de manera especial que tiene para nosotros el agua, desde recursos de inconstitucionalidad, como hemos ya realizado desde el Parlamento de Andalucía, conjuntamente el Grupo que le sustenta su Gobierno como el Grupo de Izquierda Unida, con respecto a los Presupuestos Generales del Estado o a otras leyes. Por lo tanto, desde aquí, igual que usted ha ofrecido unos retos, nosotros le ofrecemos el reto de que vayamos a lograr y a definir un recurso de inconstitucionalidad desde el Parlamento de Andalucía, porque nos afecta directamente a nosotros, con la reforma de la Ley de Aguas que está haciendo el Gobierno del señor Aznar, sustentado por su partido, el Partido Popular, y por las derechas nacionalistas del Estado español, para que esa privatización del recurso estratégico para Andalucía no siga adelante. Pero, naturalmente, también es necesario —y ya parece que se ha abierto camino— que se defina y se apruebe el Plan Nacional de Regadíos. Nos hace falta el Plan Nacional de Regadíos porque, al final, sobre él tendremos que desarrollar nuestro Plan Andaluz de Regadíos, que está el anteproyecto presentado pero que no se puede desarrollar. Si ya ha habido un acuerdo por parte de la mayoría de las Comunidades Autónomas, vamos a ver en qué nos afecta y cómo podemos presentar

también nuestros recursos y nuestras necesidades, pero que es importante.

Y en tercer lugar, por lo que corresponde al Gobierno del Estado, el Plan Hidrológico Nacional, que le recuerdo que no fue tramitado, finalmente, por el Ministro señor Borrell, porque era necesario, o por lo menos se llegó al acuerdo porque se creía que era necesario, el Plan Nacional de Regadíos, y que ni han logrado tramitar el Plan Nacional de Regadíos los señores del partido Popular, ni han logrado tramitar el Plan Hidrológico Nacional. Y eso no está en su haber: está en el haber del Partido Popular y del señor Aznar. Pero desde el Parlamento de Andalucía, desde las instituciones andaluzas, creo que tendríamos que buscar fórmulas conjuntas de consenso, por lo menos mayoritariamente por parte de las izquierdas, para poder presionar, para poder reivindicar al Gobierno de Madrid y al Estado que se desarrollen esas leyes, que son básicas para nosotros desarrollar tres leyes que sí le corresponden y son competencia de usted, y que yo también, nos brindamos en nombre de..., o yo en nombre de Izquierda Unida, nos brindamos para desarrollar en Andalucía; una ley de aguas de Andalucía que planifique, que legisle y que coordine todos los aspectos legales que hacen referencia en torno al desarrollo de la política hidráulica: desde el abastecimiento, el saneamiento, todos los problemas de tarifa, todos los problemas en relación con la reutilización, los problemas en torno a los usos, a las demandas por parte de los distintos sectores económicos, sectores productivos, de Andalucía.

Nos ofrecemos para apoyar, para desarrollar, un plan hidrológico de Andalucía; plan hidrológico que es un plan, desde nuestra perspectiva, que tiene que estar basado en una política de gestión de la demanda y no de gestión de la oferta. Ya este debate lo hemos tenido en otras ocasiones y para sus señorías la diferencia estaba en el acento, no estaba en que fueran dos políticas alternativas. Yo creo que la participación, el desarrollo de los ámbitos académicos de investigación a nivel nacional e internacional, están demostrando que es necesario acentuar y pivotar toda la política hidráulica sobre la gestión de la demanda y no sobre la gestión de la oferta. Y por último, naturalmente, contarán con nuestro apoyo, contarán con nuestro esfuerzo, para lograr el Plan Andaluz de Regadíos, que meramente está hecho en un anteproyecto.

Pero, sobre todo, y donde nosotros queremos tomar el reto que nos ha lanzado para el consenso, para la búsqueda del acuerdo, es en las medidas que usted mismo ha señalado como que eran prioritarias desde el primer momento que usted fue nombrado Consejero de Obras Públicas, todas las medidas que van en relación, y actuaciones, en relación con la ecología ambiental. Estamos hablando de las obras, de las inversiones hidrológico-forestales y agro-forestales para la conservación de nuestros suelos, fundamentales para la actividad económica, para la ordenación del territorio, pero también fundamentales para la conservación en cantidad y en calidad del recurso agua, todas las actuaciones tendentes a la mejora de los regadíos: conservación, reposición, mejora de las infraestructuras hidráulicas, ahorro por eficiencia de los

sistemas de transportes, distribución y aplicación de riegos.

En tercer lugar, la defensa contra las avenidas y las inundaciones. Esto que en 1994, como ustedes saben —le estoy haciendo referencia a las propuestas que hice ya en 1994, desde su Consejería—, o no se han tenido que desarrollar igual que las anteriores, porque estamos volviendo a hablar hoy... Hoy usted, aquí mismo, desde la tribuna, ha hecho estos planteamientos de la necesidad de mayores inversiones, de coordinación entre las distintas Administraciones —Administración central, autonómica y local—, pero lo cierto es que cualquier acción, inversión y actividad en torno a la defensa contra las avenidas y las inundaciones, o han sido muy deficitarias, o no se han hecho, porque en los últimos años hemos vivido múltiples situaciones graves, por parte de amplios sectores de nuestro territorio, y que han afectado en bastantes ocasiones a una amplia parte de la población andaluza. Y no en los años de gran pluviometría, como fueron los años 1997 y 1998, sino hace pocos días hemos visto cómo las últimas lluvias han inundado y han paralizado parte de nuestras ciudades y han afectado a los sectores productivos.

Cuarto. También estamos dispuestos y queremos consensuar, y le vamos a apoyar, todo lo que haga referencia a las actuaciones, a las inversiones de abastecimiento y saneamiento, para garantizar, como hemos dicho, los niveles mínimos de dotación a la población, para garantizar que esos niveles mínimos de dotación tienen condiciones de potabilidad y calidad suficientes, para garantizar el cumplimiento de la directiva europea en relación con el saneamiento; directiva europea que usted asegura que vamos a cumplir en el año 2000 y que en el año 1994 usted aseguró, desde esta tribuna, que se iba a tener cumplida en este año.

El señor PRESIDENTE

—Señor López Calvo, su señoría debe ir terminando.

El señor LÓPEZ CALVO

—Voy terminando.

Por lo tanto... Pero usted se ha adelantado. Si a nosotros nos parece muy bien que se haga en el año 2000 y se cumpla la directiva; lo que pasa es que, si hace una serie de años, desde el año 1994, nos aseguró que en este año nos íbamos a adelantar y tenía con seguridad el cumplimiento de la primera fase de la directiva europea, nos parece que, unos años después, cinco años después, el compromiso es retrasarlo un año más, que esperemos que sea solamente un año. Y le he dicho que la vamos a apoyar y vamos a trabajar para que así sea; lo que pasa es que los compromisos de hace cinco años, al día de la fecha, todavía no se han cumplido.

Todo el tema en relación con la protección de aguas, de la contaminación de nitratos, de la sobreexplotación de los acuíferos de las aguas subterráneas. Creo que

ahí es donde menos hincapié ha hecho, menos hincapié ha hecho, y, por lo tanto, para nosotros es muy importante.

Como ve —por razones de tiempo debo terminar—, hay una amplia gama de actuaciones y de políticas concretas en que desde el Grupo de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía va a encontrar el apoyo, el aliento, frente al Gobierno de Madrid, frente a las políticas hidráulicas de la derecha en el Estado español, frente a las políticas privatizadoras de un recurso esencial como es el agua, y también un apoyo para desarrollar, desde Andalucía y en cooperación con el resto de las Administraciones, una política que gestione la demanda, que posibilite mejorar en la práctica concretamente, y logremos que en el futuro más inmediato posible tengamos la legislación porque tengamos las transferencias conseguidas, para que en Andalucía los debates sobre el agua no tengan que ser interesantes solamente, a través de los medios, o porque sea por motivos mediáticos, por motivos legítimos pero partidarios, sino porque los avances que se vayan consiguiendo estén dando respuesta a la demanda de la ciudadanía y solamente nos queden flecos para solucionar, y no hagan falta más debates generales, sino debates muy puntuales porque hemos conseguido el objetivo que se merece nuestra tierra, que se merece nuestro pueblo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE

—Muchas gracias, señor López Calvo.

A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Ramos Aznar.

El señor RAMOS AZNAR

—Gracias, señor Presidente. Señorías.

Señor Consejero, por alusiones claras a la falta de voluntad que según usted tiene el Gobierno del Partido Popular, yo, por favor, le pediría que en el segundo turno de su intervención subiese usted a esta tribuna y, en principio, me explicase cuál es, si es que existe, la diferencia de sensibilidad de su Grupo político en materia de aporte de recursos hídricos extra que necesita Andalucía y cuál es la sensibilidad de su Grupo político en relación a la transferencia de competencias en favor y en beneficio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Me gustaría que me lo explicase, pero, además, que me lo explicase usted aportando datos reales de la evolución de esa sensibilidad, que, desde luego, es difícil de explicar, señor Consejero. Es difícil de explicar porque, si usted acusa a la Ministra de Medio Ambiente —y yo no vengo aquí a defender a la Ministra de Medio Ambiente porque me da la impresión de que se defiende perfectamente—, si usted le dice a la Ministra de Medio Ambiente que lleva tres años escondida en cuestión o en materia de política hidráulica, me pone usted la respuesta —y también le pido que me la dé, en esta tribuna—,

me la pone usted, desde luego, que no tengo más remedio que decírsela. Si la Ministra de Medio Ambiente lleva tres años escondida, dónde ha estado escondido su partido, el Gobierno de Andalucía y el Gobierno central, durante veinte años en relación con la política hidráulica y en función de la exigencia actual de aporte de recursos hídricos vía transferencia de otras cuencas o cuencas internas, y también, de la asunción de competencias en materia de política hidráulica, pero para mañana a las nueve de la mañana, señor Consejero. Porque ése es el talante que tiene usted hablando de política hidráulica.

Yo me he permitido antes de este debate, pues, efectivamente, releer su intervención del año 1994, y miren ustedes por dónde, de lo que usted ha dicho aquí no se dice exactamente nada en el año 1994. En el año 1994 seguía existiendo en el mismo problema de construcción de embalses o de regulación de los cauces en Andalucía, seguía existiendo el mismo problema en este momento en relación a las aportaciones extra de caudales de otras cuencas intra o extra comunitarias en favor de Andalucía, y en el año 1994, señor Consejero, usted no había conseguido ni una sola competencia en materia hidráulica. Claro, la explicación es fácil, señor Consejero: el cambio no es un cambio de política; es un cambio de política, pero de política sectaria del Partido Socialista. Y por una razón: por la razón de que da la casualidad, da la casualidad, de que cualitativamente ha cambiado que en 1994 ustedes hacían coincidir el Gobierno de España con el Gobierno de Andalucía, y, desgraciadamente para ustedes —y afortunadamente para los españoles—, en el año 1999, fecha de este debate, da la casualidad de que el Gobierno de Andalucía no se identifica partidistamente con el Gobierno de España. Y ésa es la conclusión. Porque la situación, señor Consejero, en esos dos temas al menos, aunque vamos a abordar más temas, es sensiblemente la misma que en el año 1994. Y hablo del contenido de su intervención, que no del tono de su intervención, que, por supuesto, respeto, me parece correcto, y usted, dentro del trabajo que le encargan, pues hace lo que tiene que hacer, que es decir, bueno, como estamos en la política de confrontación contra el Gobierno, que en este caso no es el nuestro, pues leña al mono. Pero, la verdad, dicho sea de paso, lo ha hecho usted en un tono que me parece correcto.

Miren ustedes, señorías, yo creo que lo importante en este debate, sin duda, es enmarcar los elementos que configuran la política hidráulica en Andalucía. Y esos elementos, no me importa reconocerlo, señor Consejero, los suscribo al cien por cien y están en el Plan Director de Infraestructuras de Andalucía, y me parece que hacen una descripción correcta de exactamente el enmarque que tiene que tener la política hidráulica en Andalucía. Y me parece que usted ha citado alguno de los casos: que, efectivamente, el agua es un bien escaso y esa situación de escasez es más grave en Andalucía que en el resto del territorio español; que el agua, sin duda de ningún tipo, constituye una necesidad vital, tanto a nivel individual como colectivo; que el agua es un factor irremplazable para determinados sectores estratégicos de la economía andaluza, como es el caso de la agri-

cultura o es el caso del turismo; que, sin duda, el agua es un elemento esencial en la vertebración y en la cohesión social, y, por supuesto —y no menos importante, aunque lo diga al final—, que el agua representa una garantía de preservación del hábitat y del patrimonio natural de Andalucía.

Dicho esto, que yo suscribo al cien por cien —que suscribo, repito, al cien por cien, y mi Grupo lo suscribe al cien por cien—, es evidente que lo que Andalucía necesita, en materia de política hidráulica es garantizar esa necesidad vital, garantizar con su existencia la dotación necesaria para que esos sectores estratégicos no se estrangulen, previendo no solamente los momentos actuales, sino también las demandas futuras, y, por supuesto, garantizar la calidad ambiental de lo que, sin duda, es un rico patrimonio, que es el patrimonio natural y ambiental de Andalucía.

Y, por tanto, yo no voy a entrar en la reiteración de los datos conocidos por todos sobre datos, cantidades, magnitudes de las carencias de recursos hídricos de Andalucía, o, por supuesto, los desequilibrios que, curiosamente, se dan en Andalucía en lo que es el reparto y la existencia, en el inventario, por decirlo de alguna manera, de los recursos hídricos. Yo creo que de lo que tenemos que hablar aquí, esta tarde o esta noche, es de la actual utilización de los recursos hídricos, de la gestión que de los mismos se hace en el ejercicio cada institución de sus respectivas competencias, de los aportes de nuevos recursos que hacen falta para Andalucía, de las infraestructuras en materia hidráulica que necesita Andalucía, y, por supuesto, también de dos cuestiones que creo que son importantes: de la gestión del agua en Andalucía y —algo que me parece importe, algo que me parece importante— de la coordinación entre las Administraciones en lo que tiene que ser la definición de la política hidráulica y lo que tiene que ser también un elemento político de primer orden, que es la priorización de esas actuaciones hidráulicas en Andalucía.

Y eso, señorías, a juicio de este modesto portavoz, es lo que tenemos que hacer y, sin duda, es lo que yo pretendo hacer, y además pretendo hacerlo residenciando las competencias en cada terreno según correspondan. Y, de entrada, le anuncio que sin rehuir competencias, desde el Partido Popular de Andalucía, que puedan residenciarse única y exclusivamente en el ámbito de las instituciones que puedan estar gobernadas por el Partido Popular de Andalucía, ni muchísimo menos. No pretendemos rehuir esas responsabilidades y queremos asumir esas responsabilidades, pero, evidentemente, todos tienen que dar cuenta de sus competencias.

Y la primera pregunta es plantear: ¿y cuáles son las competencias —si es que las tiene—, cuáles son las competencias de la propia Junta de Andalucía en materia de política hidráulica? Pues yo creo que está claro y creo que, a pesar del interés en que han estado incidiendo el Gobierno de Andalucía y el Partido Socialista de Andalucía en ocultar lo que son competencias que se residencian en el Gobierno andaluz, lo cierto es que esas competencias están claras, y que, por supuesto, esas competencias van más allá de la interpretación interesada que aquí se

ha hecho, y en otros debates anteriores se ha hecho, de que son competencias en materia de auxilio o socorro a estas o a aquellas instituciones.

Miren, no me vale. No me vale porque el decreto de 1984 no habla de auxilio, no habla de auxilio: habla de que la Junta de Andalucía tiene competencias en materia de abastecimiento, en materia de saneamiento y en materia de defensa y encauzamiento de los cauces andaluces en sus tramos urbanos; eso es lo que dice el decreto de transferencias de 1984, eso es lo que dice. Y lo que dice usted, señor Vallejo —porque sabía que lo iba a poner en duda—, lo que dice usted lo leo literalmente, y lo extraigo del *Diario de Sesiones*, reciente además, de 25 de noviembre de 1998, en materia de abastecimiento. Usted define las competencias de la Junta de Andalucía como las obras necesarias para la captación del agua o la abducción del agua, bien sean superficiales o subterráneas, hasta medidas que garanticen la correcta potabilización para su consumo, pasando por los depósitos y las redes de conducción en alta que acerquen el agua obtenida desde los puntos de obtención a la entrada de distribución municipal; eso es lo que dice usted. Es decir, que usted reconoce que el abastecimiento corresponde a la Junta de Andalucía.

Y, naturalmente, en función de ese primer apartado de sus competencias —y voy intentando correr—, lo que hace falta, por supuesto, es que hagamos un análisis de los logros de las cosas bien hechas, de las carencias... Pero no solamente de las que usted residencia en el Gobierno de España, en este momento no en manos del Partido Socialista, sino de todas, y también, señor Vallejo, empezando por de las que usted es máximo responsable.

Y, mire, la realidad es que, en materia de abastecimiento... Hoy ha dado una cifra distinta, ha dado cien mil millones; en esa comparecencia, en noviembre, dio usted 91.000 millones de pesetas. Es lo mismo: si dividimos 91.000 millones de pesetas —aunque también he oído que el esfuerzo no ha sido regular, pero para que los ciudadanos sepan el esfuerzo que ha hecho la Junta de Andalucía en el desarrollo de sus competencias—, pues sale la friolera de 91.000 millones de pesetas en quince años, en materia de abastecimiento. ¿Sabe usted a cuánto equivale, de esfuerzo anual, en materia de abastecimiento? Pues a 6.000 millones de pesetas anuales.

Claro, con esa cantidad de inversión, señor Vallejo, que a usted le puede parecer enorme —y no sé cómo le puede parecer enorme y luego crítica, por insuficientes, las que dice que provienen del Ministerio de Medio Ambiente; no lo puedo entender, porque se las voy a dar a continuación—, claro, todo el logro de usted, señor Consejero, es decir que se ha pasado de 27 sistemas de abastecimiento en el territorio andaluz, que había en 1984, a 44 —es decir, 17 más— o, lo que es lo mismo, se ha pasado de una población atendida de 2.300.000 andaluces en 1984 a 5.800.000 en 1999. O lo que es lo mismo: a atender al 52% de la demanda.

Bueno, pues si eso es para tirar cohetes —perdón, el 83%—, si eso es para tirar cohetes, después de quince años de la asunción de plenas competencias en materia de abastecimiento, pues, realmente, usted y yo —y se

lo digo en el mejor tono— tenemos muy poco de que hablar y que discutir, porque usted pondera de una forma grandilocuente que el esfuerzo en quince años sea traducido en que hoy hay un 83% de población andaluza atendida en el abastecimiento.

Pues, mire usted, a mí particularmente, en quince años, me parece insuficiente, me parece insuficiente. Y después de quince años, yo no debería recordarle a usted, señor Consejero, que hay que seguir promoviendo nuevos abastecimientos —deberían estar promovidos—, hay que disminuir la incidencia de la sequía sobre los abastecimientos urbanos —que no está prevista—, está por ver todavía el famoso programa que usted anunció en 1998 —por supuesto, y, por cierto, financiado con fondos europeos—, el programa de lucha contra la sequía —que yo todavía no lo he visto—, está por ver también una demanda y una promesa de usted, que es la interconexión entre cuencas que permitan amortiguar las carencias en época de sequía, y, lo que es más grave, señor Consejero, porque eso lo que ya no deja entrever, sino plantea con la máxima certeza, es que usted hace las cosas en plan chapuza. Y permíname por la expresión, porque creo que va a ser la más alta que le voy a hacer en esta intervención. Chapuza, sin ningún elemento de planificación previo.

¿Cómo puede usted decir que tiene prometido, ante esta Cámara, un plan general de abastecimiento? ¿Para cuándo va a traer usted el plan general de abastecimiento? ¿Para cuando, después de quince años, o dentro de diez, ya no estemos en el 83 y ya esté en el cien por cien? Traiga usted en ese momento mejor una memoria de los abastecimientos y nos enteraremos realmente. Pero si esto es el elemento de planificación, pues, mire, que Dios nos coja confesados.

Y le digo esto porque usted ha planteado en su intervención que el Gobierno central no tenía elementos de planificación de ningún tipo. Para muestra, un botón: en el plan de saneamiento nacional, usted asumía un compromiso de hacer un plan andaluz de abastecimiento...

El señor PRESIDENTE

—Señor Ramos Aznar, su señoría debe ir terminando.

El señor RAMOS AZNAR

—Voy terminando, señor Presidente.

... y hasta la vista, ninguno.

Mire, voy muy rápidamente. En materia de saneamiento, usted ha invertido, en la media de estos quince años, 6.180 millones de pesetas. Actualmente, usted, en el ejercicio de sus competencias, está en disposición de garantizar el 52'4% de la población andaluza. Si esto es para tirar cohetes y esto es una cifra que se puede contraponer hasta el punto de criticar, por su delgadez, las inversiones que provienen del Gobierno de España

en contraposición a estas cifras, pues, realmente, me parece que tampoco hay mucho que discutir.

También en este aspecto concreto usted ha vuelto a incumplir un elemento de planificación, que es el plan de saneamiento de Andalucía, que debe contemplar, pues, evidentemente, los sistemas de depuración de Andalucía. Usted ha incumplido —y voy corriendo y sobre la marcha—, también dentro de un ejercicio que es de su competencia, y que ésta ya debe causar rubor, desde el punto de vista de lo que es la eficacia presupuestaria y de inversión, también una competencia suya, que es la defensa y encauzamiento.

¿Sabe usted cuándo ha invertido en quince años en defensa y encauzamiento de los márgenes de ríos en sus tramos urbanos? Pues la friolera de 16.000 millones de pesetas, lo que equivale a 1.000 millones de pesetas anuales.

Por cierto, también incumple el plan de prevención de avenidas e inundaciones de los tramos urbanos, que tampoco está aquí. Incumple usted también el plan de reutilización de aguas residuales... No, se lo digo yo, porque usted después sube aquí y se infla de decirnos lo que nosotros no hacemos. Además, usted, de una forma un poco desahogada, dice que nosotros tenemos falta de planificación. Hombre, si nosotros tenemos falta de planificación, desde luego, usted tiene un suspenso y un cate, desde luego, enorme.

Mire usted, y, fundamentalmente, usted, en su intervención... Y termino, señor Presidente, aunque espero luego poder tener tiempo, porque estoy convencido de que usted va a subir nuevamente a la tribuna y abrirá turno, de poder seguir planteando yo creo que temas importantes de este debate, porque no quiero rehuir ninguna de las que ha hecho en relación a lo que parece ser una dejación de funciones por parte del Ministerio de Medio Ambiente en relación a Andalucía, mire usted, la realidad es que ustedes no están, desgraciadamente se lo digo... Y, además, en las propuestas de resolución, va, precisamente, algo que también ha citado el señor Calvo, que es ese pacto que hace falta en Andalucía para coordinar las políticas de infraestructuras de Andalucía y del Gobierno central. Pero realmente me parece que es plantear iniciativas en positivo que ustedes no quieren recoger, señor Vallejo. Y ustedes no quieren recoger porque ustedes han demostrado, en quince años en Andalucía —en quince años en Andalucía—, mediante un silencio cómplice y, diría más, y cobarde, que ustedes no estaban por la reivindicación de políticas activas e importantes en materia de obras hidráulicas para Andalucía, sino que a lo que ustedes estaban, simple y llanamente, era al dictado de lo que les dijera Madrid, y, por tanto, ustedes ahora, cualitativamente, cuando no coincide el Gobierno de Madrid con éste, ahora entran en una vertiente que es la vertiente de la confrontación por la confrontación.

Y yo le voy a decir una cosa: no lleva usted razón —por no decirse de otra manera— cuando dice que hemos acentuado o se han hecho desaparecer las inversiones en Andalucía: ni muchísimo menos. En tres años, el Ministerio de Medio Ambiente ha invertido más

que usted ha invertido en política hidráulica en quince años: más. Doscientos mil millones en tres años, señor Vallejo. Pero, además, le digo más.

Mire, yo no pretendo ya... Mire usted, me conformo hasta con que nos preparen manifestaciones, que lo utilicen políticamente... Mire usted, lo que no me parece correcto ni apropiado... No nos ayuden, no nos ayuden, pero tampoco nos obstaculicen. Y sabe usted que hay determinadas obras e infraestructuras de una importancia vital para Andalucía, como es, por ejemplo, La Breña 2 en Córdoba, donde, realmente, es impresentable, señor Consejero, la actitud que está teniendo el Gobierno socialista; es impresentable políticamente. Y es impresentable políticamente —y tienen que saberlo los ciudadanos—, porque, aparte de que ustedes dejaron obras de infraestructuras que no tenían un solo papel y que ha habido que hacer los procedimientos reglados —después se lo digo en mi intervención; le puedo dar una copia—, y donde hemos tenido que hacer los procedimientos reglados, los expedientes que permitan la licitación-adjudicación y empezar esas obras, lo más grave, señor Consejero, es que ustedes han puesto piedrecitas, algunas de gran tamaño, como es el caso de La Breña, donde, de forma sectaria, partidista y que dice muy poco en función de que están para defender los intereses generales de Andalucía, sino que están defendiendo los intereses electorales del Partido Socialista, no han dudado incluso, señor Consejero —y eso es muy grave—...

El señor PRESIDENTE

—Señor Ramos, su señoría tiene que terminar ya.

El señor RAMOS AZNAR

—Termino en treinta segundos, señor Presidente.

... no han dudado, señor Consejero, en, incluso, obstaculizar un trámite que saben ustedes que condiciona el que se pueda licitar esa presa que es fundamental para Andalucía. Y lo han hecho, además, cuando ustedes mismos, el propio Delegado Provincial de Córdoba de la Consejería de Medio Ambiente, el propio Director del Parque de Hornachuelos, han colaborado conjuntamente con la Administración central en la redacción del proyecto de medidas compensatorias para La Breña 2; pero, como da la casualidad de que hay un compromiso firme y serio no solamente de abordar La Breña 2, sino de abordar La Breña 2, de abordar Melonares, abordar Arenoso ya de inmediato, señor Consejero, ustedes no han dudado en plantear defectos de forma, porque lo que pretenden, no en función de los intereses generales de Andalucía, sino en función de los intereses —yo creo que en este caso ilegítimos— del Partido Socialista, es que estas obras, que son determinantes para el futuro y lo que, al parecer, demandan todos los Grupos en función de la política de agua en Andalucía, no sea una realidad el inicio de las obras antes de las elecciones municipales.

Por eso le digo, señor Consejero, que no pretendo ni

siquiera que nos ayude, no pretendo ni siquiera que se coordine con el Ministerio de Medio Ambiente en Madrid; lo único que le pido, por el interés de Andalucía y de los andaluces, es que, al menos, no ponga obstáculos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE

—Gracias, señor Ramos Aznar.

A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Álvarez de la Chica.

El señor ÁLVAREZ DE LA CHICA

—Muchas gracias, señor Presidente.

Efectivamente, hablamos hoy en esta Cámara de un asunto de capital importancia para Andalucía; así lo ha dejado bien claro alguno de los portavoces que han intervenido. Y así quiero empezar remarcando, porque el desarrollo económico de sectores vitales, como son el abastecimiento a poblaciones, la agricultura, el turismo, la industria o el mantenimiento del patrimonio medioambiental, tienen su futuro comprometido a la disponibilidad de agua.

Son más que numerosos los debates sobre los aspectos parciales del agua que se han desarrollado en esta Cámara en la presente legislatura; pero quizás lo que le confiere un especial carácter a este debate es, o debiera ser, su globalidad sobre la política hidráulica y sus efectos en Andalucía. Y parece justo y necesario que, en un debate de estas características, hablemos de quiénes intervienen en la política del agua, de qué competencias les amparan, y para hablar del presente, que es lo que preocupa a los andaluces, y del futuro tengamos la perspectiva de qué se ha hecho en la historia más reciente en relación con las competencias que se han ejecutado desde el Gobierno de la Junta de Andalucía y de las que se han ejecutado desde el Gobierno de la nación.

Desde el año 1984, en que se reciben las competencias en materia de política hidráulica, y a pesar del interés que el portavoz del Partido Popular —yo le recomiendo que vaya al Tribunal Constitucional y plantee un conflicto de competencias, porque creo que es algo tan claro para la gestión del recurso agua en Andalucía, está tan claro en el decreto de transferencias—, abre tres frentes de compromiso del Gobierno de la Junta de Andalucía, que son la colaboración con las Corporaciones locales para las infraestructuras de abastecimiento, el desarrollo también de un marco de colaboración para el saneamiento y depuración en los municipios, y las actuaciones para la defensa y encauzamiento de los ríos a su paso por las poblaciones.

Las actuaciones en política hidráulica que se han desarrollado en Andalucía en el marco de esas competencias, han tenido, desde nuestro punto de vista, dos ejes fundamentales: la política de cooperación con los municipios para el desarrollo también de sus propias compe-

tencias y la gestión del recurso agua y del dominio público hidráulico.

En lo que se refiere a abastecimiento a poblaciones, recoge desde la captación del agua en superficie o subterránea, la potabilización, los depósitos y las redes de conducción en alta, hasta su conexión con las redes de distribución municipal, una vez realizado el necesario estudio de diagnóstico, que se cerró en torno al año 1987, y que posteriormente se ha visto ampliado y culminado en la redacción del Plan Director de Infraestructuras de Andalucía.

Se ha dicho aquí esta tarde, por el propio Consejo de Gobierno, que, en aquel momento, 27 entidades supramunicipales gestionaban el agua. Hoy, no sólo la población afectada es el doble, sino que, además, se ha podido disponer para cada habitante de un incremento del 33% de disponibilidad de agua en los servicios domiciliarios. Y esto ha sido posible porque se ha mantenido, desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, un compromiso inversor del que hoy, fundamentalmente, no sólo son beneficiarios los ciudadanos, sino que son conscientes, y así lo reconocen, las propias Corporaciones locales.

Se han invertido para este ámbito en torno a cien mil millones de pesetas. Pero no sólo se trata de disponer de más y mejor agua, sino de gestionar mejor la que tenemos y de hacer del uso racional y del ahorro un compromiso eficaz de las Administraciones y de los propios ciudadanos. Por eso nos parece oportuno destacar los buenos resultados del convenio que en su día la propia Consejería de Obras Públicas firmó con las Diputaciones andaluzas para incentivar a los Ayuntamientos a la mejora de las redes que evitaran las pérdidas de agua.

Pero Andalucía también es una tierra de sequía que obliga a establecer previsiones que garanticen la incorporación de nuevos recursos hídricos y la propia interconexión de los sistemas de abastecimiento. Por eso, para establecer esta planificación adecuada, es necesario el avance en el trabajo normativo que permita, cuanto antes, una ley de abastecimiento, saneamiento y depuración que está elaborando el Gobierno.

El saneamiento y depuración de aguas constituye otro de los elementos esenciales en la acción política competencia de la Junta de Andalucía. Las actuaciones, durante los años de competencia desde el año 1984, han ido dirigidas a corregir las actuaciones de mayor impacto en el medio ambiente, sobre todo en las capitales y grandes núcleos de población andaluces, con especial incidencia en la franja litoral y en las zonas protegidas de los parques naturales andaluces, donde un 53% de la población depura ya sus aguas y el 75% de la población andaluza lo hará en el momento en que entren en funcionamiento las depuradoras que actualmente están en construcción.

Por lo tanto, Andalucía está cumpliendo eficazmente con los compromisos de la directiva comunitaria 91/271 y con lo que estableció el Decreto 11/95. Pero las inversiones para afrontar estas carencias que tiene Andalucía se cifran en 270.000 millones de pesetas, por

lo que es imprescindible movilizar los recursos económicos disponibles de las Administraciones, y en particular del Estado, a través del Ministerio de Medio Ambiente, en el marco del convenio suscrito en el año 1995 entre la propia Junta de Andalucía —Consejería de Obras Públicas— y el entonces Ministerio de Obras Públicas.

El Gobierno de la Junta de Andalucía ha realizado en este ámbito un esfuerzo inversor sin precedentes: 95.000 millones de pesetas. En el otro ámbito de las competencias transferidas, la defensa y encauzamiento urbanos, aparte de las distintas actuaciones realizadas, es preciso, a nuestro juicio, destacar el desarrollo del Decreto 59/98, de 10 de marzo, por el que se formula el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones, que va a permitir establecer la planificación y prioridades de colaboración y coordinación con el resto de las Administraciones implicadas. Las inversiones en estas actuaciones —y ya se ha dicho aquí esta tarde— están en torno a dieciocho mil millones de pesetas.

En resumen, desde el Ejecutivo, y desde que se asumen las transferencias, se ha venido desarrollando una política comprometida con el agua en cada uno de los ámbitos de competencia. Se han plasmado inversiones millonarias en una planificación adecuada a las necesidades de Andalucía, y hoy el balance de actuación, a nuestro juicio, es altamente positivo. El compromiso con los andaluces en materia hidráulica no ofrece contestación alguna en cuanto a los resultados y a las actuaciones que hoy pueden pintarse en el mapa andaluz.

En definitiva, los socialistas hemos llevado a la práctica nuestras ideas sobre lo que pensamos que debe hacerse en política hidráulica, porque consideramos que el agua es un recurso público y que los problemas que su uso ocasiona hay que abordarlos desde la solidaridad y la participación democrática. Así lo hemos hecho en Andalucía y durante el período en el que los socialistas gobernábamos en el Gobierno de España.

La Ley de Aguas del año 1985 no sólo permitió establecer la titularidad pública de las aguas superficiales y subterráneas, sino que establecía, por primera vez en la historia de España, el criterio de calidad y consideraba al agua como un elemento de ciclo completo, estableciendo claramente la gestión integrada de cada una de las cuencas. Y esto es así porque las decisiones en materia de agua obedecían a una planificación hidrológica; porque se realizó un espectacular esfuerzo inversor que transformó la realidad hidráulica, entre otras la de Andalucía; porque en el período socialista se duplicó la capacidad de agua embalsada en la cuenca del Guadalquivir; porque se ha pasado de 473 hectómetros cúbicos a 1.245 en las cuencas del Guadalete y Barbate. Y frente a esta posición, el Gobierno del Partido Popular ha relegado el papel de la Administración en la gestión del agua, ha paralizado las inversiones públicas. En cuatro años de Gobierno del Partido Popular, éstos son sus logros para Andalucía:

Constituir una empresa pública para creación de infraestructuras que no ha conseguido aún licitar una sola obra. El Consejo de Ministros ha tardado tres años en aprobarla, quedando, además, una vez más, a la cola

en Andalucía. No se ha puesto aún un solo metro cúbico de agua regulada mediante nuevas actuaciones en la legislatura del Partido Popular en Andalucía. Las poblaciones están ante la misma situación de vulnerabilidad ante la sequía desde que el PP llegó a gobernar en Madrid. Se aprueba un proyecto de ley que permite a particulares utilizar un bien propiedad de todos y que no tiene precio, permitiendo especular con el mismo sin considerar sus efectos sobre el medio ambiente, las necesidades de la población, la industria y el turismo —la reforma de la Ley de Aguas—. Y en el año más seco del siglo, la Confederación del Guadalquivir autoriza unos desembalses para riego con una dotación por hectárea que es la mayor de los últimos veinte años.

Ahí está la contestación de los colectivos ecologistas, y simultáneamente se pedía, en aquellas fechas, a los consorcios de abastecimiento y a las grandes poblaciones, como Sevilla, Córdoba, Granada y Jaén, que presentaran, en un plazo de 20 días, un plan para el uso de tomas complementarias para el abastecimiento ciudadano.

Ustedes se han ido a una privatización progresiva de la gestión del agua, la creación de sociedades mixtas, y han ido vaciando las funciones de las confederaciones hidrográficas en favor de las sociedades estatales de agua, así para la realización de cualquier tipo de infraestructura y la gestión de los recursos hídricos asociados a las mismas. Esta privatización encubierta está potenciada y reforzada por la propia reforma, aprobada por el Gobierno popular, de la Ley de Aguas. Reforma que ustedes mejor que nadie saben que ha sido contestada con dureza no sólo desde el propio Partido Socialista, sino desde los sindicatos, las asociaciones de regantes y un buen número de expertos.

La política hidráulica del Partido Popular, esencial para el desarrollo de Andalucía, se caracteriza por una ausencia creciente de la iniciativa pública: sólo se están ejecutando actualmente obras ya iniciadas. El presupuesto es de 60.000 millones menos que el del año 1996, y no sólo no se han iniciado nuevas actuaciones, sino que han ralentizado las obras que estaban en marcha. Por eso tienen ustedes un gran mérito: poner a todos los sectores de Andalucía en contra de la política hidráulica del Gobierno del Partido Popular —asociaciones agrarias, sindicatos, confederaciones de regantes, Diputaciones—. Absoluta ausencia de prioridades ambientales en la gestión del dominio público hidráulico. A pesar de haber asignado la política de aguas al Ministerio de Medio Ambiente, las contradicciones en las que ha incurrido la Ministra y sus actuaciones le han valido ya la apertura de varios expedientes por parte de la Unión Europea y el descrédito en los sectores comprometidos con el Medio Ambiente.

El Gobierno ha pretendido ocultar estos elementos básicos de su visión de la política del agua con anuncios, declaraciones de intenciones y actos normativos carentes de compromisos concretos, como ha sido la aprobación de los planes hidrológicos de cuencas, que luego dice que son puramente informativos y el propio Ministerio de Medio Ambiente no está de acuerdo en desarrollarlos. O el decreto-ley sobre obras hidráulicas declaradas de interés general, que, sorprendentemente, y entre otros, de-

clara en Andalucía obras de carácter general que ya viene ejecutando la propia Junta de Andalucía; véase, por ejemplo, la evacuación de los pluviales de El Ejido y la defensa y recarga de los acuíferos de El Poniente almeriense. Se pone de manifiesto, con la inminente aprobación de la reforma y el libro blanco del agua, que la política del Gobierno popular es absolutamente carente de norte.

Los socialistas defendemos la consideración del agua como bien público, la consideración del agua y del medio hídrico como recursos ambientales estratégicos, una correcta articulación de competencias entre los distintos niveles de las Administraciones públicas, pero sobre todo entre la central y la autonómica. Defendemos la planificación hidrológica como instrumento clave en la Ley de Aguas para garantizar los intereses generales. Después de haber resultado un proceso muy dilatado en el tiempo, entendemos que deben revisarse los planes hidrológicos de cuencas para que su aplicación efectiva se inicie con la máxima coherencia.

Se deben corregir, y pretendemos, la sobreexplotación, el deterioro y el daño a los acuíferos. Para los socialistas, la iniciativa privada no tiene capacidad para resolver los problemas del agua, como el Partido Popular cree. El único camino para la solidaridad es la inversión pública. La iniciativa privada puede ser un complemento de la inversión pública para incrementar la capacidad de mejora de la red de infraestructuras y su gestión, también su mantenimiento, y en el supuesto de una concesión administrativa para construcción y/o gestión de obras y servicios, deben ser una prioridad aquellas ofertas que, garantizando el binomio precio-calidad, garanticen el correcto seguimiento y tutela de las Administraciones públicas.

El señor Aznar, el Presidente del Gobierno, dijo en su debate de investidura que en un plazo breve haría lo que no había hecho el Gobierno socialista en trece años en cuanto al plan hidrológico. Y bien es cierto que lo hizo: cargárselo. En el año 1997 dijo que estaba despejando el camino para el plan hidrológico; todavía no ha encontrado la luz al final del túnel. Al final de una de las legislaturas más largas de la democracia, no se va a cumplir este compromiso de presentar este plan, que representa para Andalucía la prosperidad, el desarrollo y el compromiso de futuro que la disponibilidad de agua tiene a esta tierra condicionada.

No es un incumplimiento más del Gobierno central con Andalucía, es preciso saber qué papel juega Andalucía en el modelo económico, social y territorial para el Gobierno de la nación. El agua es para Andalucía un factor limitante para su despegue. ¿Cómo se van a solucionar los problemas hídricos? ¿Se van a hacer presas? ¿Cuándo? ¿Se van a hacer trasvases? ¿Cuándo? ¿Se va a mejorar la gestión? ¿Cuándo? Andalucía no puede esperar más —por eso van a tener ustedes en la calle la contestación del conjunto de la sociedad andaluza— ni soportar más el bloqueo que en materia de aguas tiene el Partido Popular.

La planificación, administración y regulación de las cuencas hidrográficas situadas en Andalucía las tiene el Gobierno central, y es a quien corresponde plantear las

soluciones estructurales al problema del agua. Ustedes se autoproclamaron el partido del agua: después de tres años y medio, a ustedes solo les queda un calificativo: no dan ustedes un palo al agua.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE

—Muchas gracias, señor Álvarez de la Chica. Señor Consejero, su señoría tiene la palabra.

El señor CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE

—Sí, muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señorías.

Con la máxima brevedad.

Se ha planteado el tema competencial como un elemento clave del debate. Miren, ni contradicciones ni rectificaciones, y eso que rectificar no es malo en sí mismo —muchas veces se rectifica y se acierta—, pero yo llevo cinco años en el Gobierno y he mantenido la misma postura: pedimos la titularidad de las cuencas intracomunitarias y pedimos la gestión de la cuenca del Guadalquivir, con un paso previo, que es la cogestión durante un tiempo, que incluso en el borrador de decreto de transferencia de las cuencas intracomunitarias se planteó como primer paso de la concesión que se nos traspasaran todas las autorizaciones en la cuenca, al igual que se ha hecho con Cataluña, y en ese caso era el primer paso que dábamos en la cogestión. Por lo tanto, mantenemos la misma postura: la cogestión podrá ser en un sentido, con autorizaciones, con concesiones, con mayor participación en los órganos de Gobierno..., es una cuestión a negociar. Pero la postura, señor López Calvo, siempre ha sido lo mismo.

Plantea su señoría también, al igual que otros portavoces, lo que ha ocurrido en estos catorce años, y sobre todo el Grupo Popular. Hombre, yo creo que a lo largo de los últimos catorce años lo primero que ha ocurrido es que se han desarrollado los Estatutos de Autonomía de las distintas Comunidades, y ha habido tiempo para todo: ha habido momento en que se han transferido competencias educativas, otras sanitarias, y llegó un momento, en el año 1991, en que comenzaron las transferencias de agua a las Comunidades Autónomas de nuestro rango competencial. En 1993, por ejemplo, se transfirieron al País Vasco, en 1992 se hizo con Cataluña, y en 1994, efectivamente, teníamos, y se expuso en este Parlamento en los últimos meses del anterior Consejero y en los primeros de mi presencia en el Gobierno, en qué condiciones estaba situada la negociación. Por lo tanto, ha seguido el ritmo normal de cualquier transferencia, hasta, efectivamente, que, una vez que tuvimos cerrado el acuerdo, por la situación de precariedad absoluta de recursos que había, decidí, responsablemente, como miembro de este Gobierno, aplazar la transferencia hasta que hubiera agua en los embalses, pasaran los

momentos más críticos de la sequía y, por tanto, no creáramos problemas adicionales a los que ya existían en Andalucía, con 3.000.000 de ciudadanos con problemas de abastecimiento. Ésa fue una decisión, y en el mes de enero del año 1996, una vez que había llovido durante ese otoño y que, por tanto, se habían recuperado los embalses, nuevamente abrimos la negociación: se cerró un acuerdo con un borrador de decreto, se cerró un acuerdo con un convenio para desarrollar las obras de interés general del Estado y las que no lo fueran, y pasó a la abogacía del Estado toda esa documentación. Documentación que el Gobierno popular se ha encontrado sobre su mesa en el año 1996, en el mes de mayo, después de las elecciones. Y a partir de ese momento se paralizó todo: cerrado el decreto de transferencias, cerrado el convenio para las obras de interés general del Estado, cerradas las transferencias para nuevas inversiones. A partir de la llegada al Gobierno del Partido Popular se paralizó absolutamente todo.

Mire, yo hacía una propuesta de acuerdo de una sola voz de este Parlamento, y su señoría, señor López Calvo, me ha respondido diciendo: «de acuerdo con lo que usted ha planteado», y ha dicho una serie de cuestiones. Yo le devuelvo la pelota. Mire, estoy de acuerdo en todo lo que usted ha dicho; solamente exceptúo aquello que sea excluyente o dogmático. En lo que sea excluyente o dogmático no estoy de acuerdo con su señoría.

Mire, yo estoy de acuerdo en que se plantee un recurso de inconstitucionalidad, si hay claros visos o indicios de que hay inconstitucionalidad, evidentemente. No porque yo piense ideológicamente distinto al Gobierno de la nación, eso son las opciones democráticas; ahora, si ese pensamiento distinto supone que hay indicios de incumplimiento de la Constitución, me apunto el primero al recurso de inconstitucionalidad, y voy de la mano con su señoría y con todos los que consideren que existe esa necesidad de intervención de la Comunidad.

Desarrollar una ley de aguas. Le puedo decir que hay un borrador ya y, por la altura que está la legislatura, no se ha traído o no se ha impulsado para su desarrollo procedimental a través del Consejo Consultivo. Está redactado y, por lo tanto, en los próximos meses de la nueva legislatura, se podrá, si así lo estima el nuevo Gobierno que salga configurado después de las elecciones, se podrá debatir en este Parlamento.

Plan Hidrológico de Andalucía. Mire, si hay un plan hidrológico en cada cuenca y tenemos la aspiración de que haya un plan hidrológico nacional que haga coincidir los planes de las cuencas, mire usted, podemos hacer uno de Andalucía, pero a mí me parece, desde mi punto de vista, que es una cuestión innecesaria: el plan hidrológico nacional ya en sí debe tener previsto eso. Hay un plan de abastecimiento de interconexión de sistemas de abastecimientos que sí sería bueno, dentro de nuestras competencias, que lo desarrolláramos; por tanto, estaría de acuerdo. Ahora, usted aquí se desliza suavemente y dice: «Pero sobre la gestión de la demanda solamente». ¿Por qué solamente? De acuerdo, que pivote sobre la gestión de la demanda, de acuerdo, ¿pero por qué no también sobre la oferta, señoría? ¿Por qué,

por qué ese dogmatismo? ¿Por qué esa situación de exclusión?

Mire usted, si no se hubieran hecho muchos de los pantanos que hoy hay hechos... Yo sé que usted va por ahí, para que no se hagan más pantano. Yo en eso no estoy de acuerdo con su señoría: que se hagan aquellos que sea posible hacer sin tener problemas ambientales. Ésa es la exposición. Si no se hubieran hecho muchos de los que hoy están hechos, Sevilla se seguiría inundando, igual que muchas ciudades andaluzas; no nos equivoquemos, señorías. ¿Que se han cometido algunas barbaridades en otros años? De acuerdo, es cierto. ¿Que no podemos repetirlas? De acuerdo. Pero que se excluya la construcción de embalses, ¿por qué? Eso necesitará un sustento intelectual que, hasta que no lo tenga, desde luego, no vamos a poder estar de acuerdo.

El plan de defensa contra avenidas e inundaciones ya está en este momento en exposición pública y, por lo tanto, en muy pocos meses, dentro de dos meses, estará totalmente aprobado.

Y paso al Partido Popular, al partido del agua. El partido del agua, decía el señor Arenas, que iban a ser los que iban a resolver todos los problemas de agua de este país en el momento en que gobernarán. Yo me alegro, señoría, señor Ramos Aznar, de que ya ni usted defienda a la Ministerio Tocino; ya sería decir: «Mire, yo no voy a defenderla ya». Yo lo sé, que es que ya es imposible. Mire usted, ni usted ni nadie puede defenderla. Mire usted, es la política más ciega, más nefasta, más ineficaz, la política de agua, que se ha desarrollado a lo largo de la historia de los últimos cincuenta años. Por lo tanto, comprendo que su señoría salga diciendo que no va a defender a la Ministra; hace su señoría muy bien.

Podemos trasladar este debate a tema de abastecimientos; ahora, solamente le digo que quién hay desatendido en Andalucía en temas de abastecimiento. Dígame un solo municipio. Porque usted hace la siguiente interpretación: como hemos pasado de 23 sistemas a 44, ustedes han desarrollado..., queda un 15% de la población desatendida. Falso. Queda un 15% de la población que no está dentro de sistemas supramunicipales. Entre otras cosas porque la mayoría nunca lo va a estar, porque es imposible, porque son pequeños municipios en áreas rurales, distanciados entre sí y con fuentes de abastecimiento que son un pozo de su municipio. ¿Para qué vamos a crear un sistema? Eso es absolutamente falto de rentabilidad, falto de eficacia, no tiene ningún sentido, encarceraríamos el agua, y, además, sería una afrenta permanente para muchos municipios.

En Andalucía quedarán por constituir aproximadamente cuatro sistemas como mucho, en este momento, y con eso se cerrará totalmente. El resto de los municipios tendrá un abastecimiento municipal estrictamente, bien porque tienen un nacimiento de agua o porque tienen peculiaridades especiales que hacen que no sea necesario. Pero dígame un municipio que no esté en este momento atendido, uno solo, que tenga un problema de infraestructura para abastecimiento.

Siempre hay que hacer cosas para mejorar la situación, hay redes que se van quedando viejas, hay depósitos

que se hacen insuficientes, hay estaciones de tratamiento de agua potable que hay que mejorar, etcétera; pero dígame un sitio donde el problema de abastecimiento sea que no hay depósitos, que no hay redes o que no hay una ETAP. El gran problema es que, si no hay agua, si no hay agua en el norte de Córdoba, es porque no se ha hecho La Colada, y, por lo tanto, no hay agua, no hay recursos para coger. Si no hay agua en El Andévalo es porque está sin hacer la presa de El Andévalo, y no hay agua, no hay recursos. Si no hay agua en la zona de Riotinto es porque no se había hecho el Jarrama; ahora se puede abastecer. Si no hay agua en cualquiera de las zonas de Andalucía que ha sufrido en el último año problemas es porque faltan recursos, no infraestructura. Por lo tanto, no es una cuestión de invertir más o menos en abastecimiento.

Se han hecho 100.000 millones de inversión. A usted le puede parecer poco, a mí mucho, a otro señor... Pero no se trata de eso: se trata de saber si están debidamente asistidos los Ayuntamientos por el abastecimiento, y yo le digo que están debidamente asistidos. Es más, es más, nuestras competencias, tanto por arriba —estamos haciendo una presa para darle agua a Grazalema, una presa, un pantano. Eso será competencia del Estado, digo yo. Estamos haciéndola nosotros—, nuestras actuaciones, como por abajo, estamos ayudando a los Ayuntamientos a arreglar sus redes. Y dice la Ley de Régimen Local que la distribución domiciliar de agua potable es competencia exclusiva municipal; le estamos ayudando también. Cuando lo meten en los planes provinciales, la aportación municipal la paga la Consejería de Obras Públicas. Luego, por arriba y por abajo, aumentamos nuestra capacidad de intervención pasándonos claramente de nuestras competencias.

Pero, mire, ése no es el debate de hoy. El debate de hoy no es si hay problemas de abastecimiento en algún pequeño pueblo de Andalucía; el debate de hoy es que, mire usted, hay Alcaldes encerrados en Jaén, hay una manifestación de una serie de gente... Que yo no sé si dirá usted que lo han manipulado políticamente, Asaja, Federación de Regantes..., no lo sé. Si usted tiene el atrevimiento de decir que el Partido Socialista está manipulando a algunas organizaciones, allá usted con su credibilidad. Lo digo porque uno tiene que mantener la credibilidad, y, por lo tanto, ciertas afirmaciones no se las puede permitir uno. Cuando se ha conseguido que en poco tiempo los ecologistas estén enfrente de la política de agua, de la Ley de Aguas, los regantes se pongan en manifestación, los Alcaldes se encierran, señorías, está habiendo una gravísima crisis en la política de aguas de este país.

Y usted no ha respondido a nada de lo que yo he dicho, usted no ha dado respuesta a la falta de inversiones, se inventa una cifra de 200.000 millones... ¿Dónde? ¿En qué embalse? Hay que visitarlos, hay que verlos. ¿En qué obras? Ustedes en lo único que han gastado dinero es porque en el Plan Metasequía se gastaron por obras de emergencia 70.000 millones más que tuvieron que pagar en el año 1996, y se acabó, y se acabó: han ralentizado todas las inversiones y no han comenzado ab-

solutamente nada nuevo, han hecho una malísima gestión del agua.

Usted no ha contestado a una explicación que hay que dar, una explicación clara a los andaluces: cómo en un año se despilfarra la mitad de capacidad de embalse de nuestros pantanos en Andalucía. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Porque, mire usted, en los catorce años últimos, la capacidad de embalse ha aumentado un cien por cien, y el suelo regable un 7%. Hemos pasado de 800.000 hectáreas a 860.000, y la capacidad de embalse se ha duplicado. Luego, no es por nuevos riegos. Si se ha gastado más agua que en toda la historia en un año es porque ha habido despilfarro, o bien porque ha habido electoralismo, porque era un año electoral y había que dar todo lo que se pidiera, aunque fuera para tirar el agua que se ha desaprovechado claramente.

Yo no voy a entrar mucho más allá en el tema de la planificación; yo no sé ustedes de qué planificación habla. No solamente no hacen, sino que destruyen la que había. Y, desde luego, nosotros todas las actuaciones hidráulicas que hemos hecho en abastecimiento, primero fueron a través de los planes provinciales de medidas sanitarias, después a través del avance del Plan Director de Infraestructuras, ahora con el Plan Director de Infraestructuras, y está en redacción el plan de abastecimiento. Luego siempre hemos tenido un plan; ustedes sí es verdad que en eso ni tocan bola.

Concluyo, señorías.

Yo, de verdad, lamento que haga usted referencia a chapuzas cuando, la verdad, en este caso, y más con el informe de La Breña, le puedo decir que han metido la pata claramente, la Confederación, en la presentación de documentación a la Unión Europea al justificar con el mismo destino la obra de Melonares con La Breña, y por eso le han devuelto los proyectos, porque han dicho que los dos eran para abastecer Sevilla... Sí, hombre, sí, vamos a no engañar a la población: se han equivocado, han hecho una chapuza, y en las medidas de compensación han hecho otra chapuza.

Mire usted, yo he hecho un plan de medidas de compensación para una obra posiblemente con diez mil veces más impacto ambiental, la autovía Jerez-Los Barrios, pero se ha hecho un buen trabajo y nos han felicitado hasta en la Unión Europea, y han dicho: «éste es el modelo que hay que hacer».

La Confederación ha hecho una chapuza y le han dicho: «mire usted, entre otras cosas, diga usted quiénes son los propietarios de los suelos donde se va a actuar y si están de acuerdo, porque, si no, no sirve para nada lo que usted ha presentado». Y diga usted si esto respeta mínimamente el Plan de Ordenación de Recursos Naturales, digan algo, hagan un plan creíble, para que la sociedad más sensible con el medio ambiente también, le dé credibilidad a lo que se hace en obras hidráulicas.

Yo no sé si su señoría cree que estábamos al dictado de Madrid; yo sí le puedo decir que ustedes no pueden estar al dictado de Madrid porque no pueden ya ni defender a Madrid en Andalucía: se han quedado absolutamente solos. Y acusarnos en este tema de la confrontación por la confrontación es tanto como decir que Asaja,

que los regantes, que los sindicatos, que todos los que van a manifestarse en Madrid, lo único que buscan es la confrontación. Tampoco tienen ninguna razón; la única razón la tiene, evidentemente, el Gobierno del Partido Popular, que nos está dejando en el tema del agua, como en otros muchos temas, a la zaga, a la zaga del resto del país. Y en este caso, desde luego, en un tema de la máxima sensibilidad que afecta no solamente al bolsillo de los andaluces, sino a la calidad de vida de todos y cada uno de los ciudadanos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE

—Muchas gracias, señor Consejero de Obras Públicas.

Señorías, voy a conceder un turno de réplica a los distintos Grupos parlamentarios por un tiempo máximo por Grupo de diez minutos, que, además, les comunico a sus señorías que seré inflexible en la aplicación de ese tiempo.

Señor Dell'Olmo, su señoría tiene la palabra.

El señor DELL'OLMO GARCÍA

—Señor Presidente. Señorías.

Me da la impresión de que este debate va a ser, lamentablemente, un debate estéril. Y va a ser un debate estéril porque, por mucho que nos empeñemos, la realidad es dura: Madrid sigue teniendo las competencias sobre el agua en Andalucía. Y en consecuencia, señor Hernández Mancha, en consecuencia, eso es lo que nos preocupa, eso es lo que nos preocupa. Y nos preocupa porque no existe política hidrográfica en Andalucía, no existe política de aguas en Andalucía, y eso es lo que trae como consecuencia el que hoy salgamos aquí con la cabeza caliente y los pies fríos. Díganme cuál es la política de la señora Tocino en Andalucía. Parece ser que ustedes han llegado al extremo de que, incluso en política de aguas, aplican «a Andalucía, ni agua, a Andalucía, ni agua». Ésa es la política de la señora Tocino en el territorio de Andalucía.

Desde luego, nosotros entendemos que esto no puede permanecer más tiempo así. Las competencias son absolutamente necesarias si es que queremos ser dueños de nuestros destinos en Andalucía, si es que queremos planificar la economía de Andalucía y si es que los Grupos parlamentarios de esta Cámara entienden que aquí es donde se tiene que decidir qué se hace con el agua en Andalucía, la poca o la mucha que tengamos, por desgracia siempre poca.

En consecuencia, nosotros entendemos que es necesario que eso se produzca cuanto antes y que haya un punto y aparte en relación con lo que ha sido la política de las confederaciones hidrográficas en Andalucía. Lo hemos dicho en multitud de ocasiones: son entes que actúan como una especie de virreinato al margen

del contexto social en el que se desenvuelven, hasta el extremo de que hemos asistido, en los inviernos anteriores, a cómo, desde una confederación hidrográfica y ante una subida importante de los pantanos hace dos años, pues se abren las compuertas sin avisar a nadie y agua va, y se producen inundaciones en algunas ciudades de Andalucía, como fue el caso de Jerez, y nadie da ni una sola explicación. Esto es una muestra de que se actúa a espaldas de la Administración andaluza, se actúa a espaldas de los ciudadanos, con unos criterios que obedecen simple y llanamente a la actuación del virrey a la orden de su señor. En consecuencia, nosotros entendemos que eso es una de las cuestiones a corregir cuanto antes.

Y contemplar el ciclo integral del agua, señorías, el ciclo integral del agua, que tendremos que contemplarlo en su integridad cuando podamos hacerlo en función de las competencias. Pero, desde luego, en ese ciclo integral, la fase de la reutilización es algo prioritario, porque hay que insistir en la idea a la que hacía referencia en mi primera intervención de que el ahorro es el mejor pantano que puede tener Andalucía. Y a lo largo del debate se ha introducido una cuestión que excede de las competencias de este Parlamento, pero en la que es necesario que los Grupos parlamentarios dejemos clara nuestra posición.

El Grupo Parlamentario Andalucista se pronuncia clara y abiertamente en contra de la privatización del agua. El agua es un bien público, es un recurso que tiene que estar en función de las necesidades sociales, del interés general. En consecuencia, políticas progresistas son aquellas que apuestan por seguir en esa concepción del agua como bien público, y no, desde luego, que se llegue a la privatización, a todo convertirlo en negocio, no sé si para que después los gestores privados de esa agua puedan meterse en el bolsillo cantidades análogas a las del teléfono, a esos 45.000 millones de pesetas. Desde luego, eso, desde el Grupo Parlamentario Andalucista, entendemos que es vulnerar el espíritu de la Constitución y vulnerar la más elemental justicia para con quienes necesitan de ese bien a la hora de mantener sus explotaciones, de mantener su ritmo de vida.

Señorías, se ha hecho relación a la necesidad de una planificación de los recursos en Andalucía, a una ley de aguas y a un plan hidrográfico en Andalucía. Nosotros entendemos que es necesario que, en la medida en que vayamos dotándonos de esos traspasos y de las competencias del río Guadalquivir, que ha suscitado —y hay que reconocerlo— el cambio de posición de algún Grupo parlamentario de la Cámara, que planteaba en un principio la dificultad en el traspaso, incluso la gestión, y que ya en una iniciativa del mes de septiembre, pues, ha metido no solamente la necesidad de ese traspaso, sino que incluso la propia titularidad de la Confederación del Guadalquivir, pues vayamos poco a poco caminando para que tengamos una legislación que permita asumir esas competencias. En ese sentido, saludamos la iniciativa del Consejero, en el sentido de que Andalucía pueda tener una ley de aguas en la próxima legislatura, y nosotros entendemos que, además de eso, también deberíamos

dotarnos de otros instrumentos legislativos para que también tengamos una nueva Administración hidrográfica, y en este sentido recuerdo a la Cámara que ya el Grupo Parlamentario Andalucista planteó una proposición de ley en la tercera legislatura, creo recordar que fue en el verano, en junio del año 1991, en la que defendíamos la necesidad de esa Administración hidrográfica de nueva planta que, insisto, acabe con lo que es una Administración obsoleta como es la actual: las confederaciones hidrográficas.

No voy a agotar ni siquiera el tiempo concedido por la Presidencia, porque, señorías, al final todo se resume en una cosa: transferencia, poder de Andalucía a la hora de planificar en qué usa el agua. Ése es el quid de la cuestión, eso es lo que hoy lleva a frustrar ese debate y eso es lo que quienes dicen que defienden los intereses de Andalucía, quienes dicen que aman mucho a Andalucía, que eran el partido del agua y que ahora tienen las responsabilidades en Madrid de haber podido enmendar la plana a los que en su momento no hicieron ese traspaso de competencias, se mantienen hostilmente en contra de los intereses de Andalucía. Y, por cierto, la siguen considerando en esas primeras propuestas de resolución que ya se han registrado, y que son públicas en consecuencia, la siguen considerando como una región. Léanse bien los papeles y regáñenle al que ha planteado que Andalucía es una región y no se conoce ni siquiera el artículo primero del Estatuto de Autonomía de Andalucía; así, desde luego, no se puede decir en serio que ustedes defienden los intereses de Andalucía.

Yo creo que el conjunto de la Cámara sí que puede dar hoy una lección si es capaz de llegar a ese principio de acuerdo, en el sentido de que lo primero son las competencias y, a partir de ahí, comenzar a hablar.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE

—Muchas gracias, señor Dell'Olmo.

A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes Convocatoria por Andalucía, señor López Calvo.

El señor LÓPEZ CALVO

—Gracias, señor Presidente. Señoras Diputadas. Señores Diputados. Señor Consejero.

Está bien que yo le reconozca y, además, me congratule porque el Gobierno andaluz y el Partido Socialista Obrero Español han cambiado de posición en torno a la necesidad de transferir la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir; no significa que quiera que ustedes cambien nuevamente a posiciones anteriores. Por lo tanto, la misma postura, no sé si personal —yo no entro en las posturas, podríamos decir, personales que cada uno de nosotros podemos tener en relación a distintos temas—, pero la postura del Gobierno andaluz y la postura del Partido Socialista Obrero Español han girado y, desde nuestra

perspectiva, han girado positivamente, y nosotros, como teníamos esa postura, nos hemos acercado y hemos llegado a un acuerdo: al acuerdo de que es necesario en estos momentos, de aquí al futuro, que las competencias hidráulicas estén residenciadas en el poder andaluz, estén residenciadas en las instituciones andaluzas. Por lo tanto, tendremos que poner ahora los mecanismos de presión social, de presión institucional, para que ese acuerdo político, social, que existe, sea una realidad lo más pronto posible. ¿Qué yo puedo criticarle que pudiéramos haber avanzado si, en vez de dejar el decreto en el cajón del olvido para ver si se mejoraban ciertas cosas o a ver si llovía, en estos momentos no estaríamos lamentándonos de que tres años de Gobierno del señor Aznar hayan impedido tener esas confederaciones? Son... Agua pasada no mueve molinos. Lo cierto es que en estos momentos tenemos un punto de acuerdo muy importante, que son las transferencias, la solicitud, la necesidad de que Andalucía, de que las instituciones andaluzas, tengan la competencia plena sobre el Guadalquivir. Y no le voy a sacar lo que decíamos antes o decían su partido y el señor Consejero, pero sí le voy a sacar lo que dice hoy su partido político en la primera resolución que nos presentan.

A la primera resolución que presenta el Partido Socialista Obrero Español en este debate general, vamos a votar favorablemente, y no se nos caen ni los anillos ni ninguna prenda, porque estamos de acuerdo con esto, como no votábamos favorablemente, o su partido y su Gobierno no votaba favorablemente hace cinco o seis años, cuando se negaban a que hubiera la transferencia del Guadalquivir. Por lo tanto, una postura que hemos acercado y que creo que sobre eso, sobre lo concreto, ahora tenemos que dar un paso más: los instrumentos concretos para reivindicar y para lograr, institucional y políticamente, que esas transferencias, en el menos plazo posible, estén en manos de las instituciones andaluzas.

En segundo lugar, los recursos de inconstitucionalidad. Naturalmente no podemos hacer ningún canto del cisne: «vamos a hacer un recurso de inconstitucionalidad»; ahora, yo le pregunto: como conocemos ya por dónde van las reformas del Partido Popular y de la derecha de este país en torno a la Ley de Aguas, que es privatizar, no la gestión, sino privatizar el recurso, tenemos un Estatuto, aparte de una Constitución, tenemos un Estatuto que tiene carácter constitucional, porque es ley orgánica, y que en su articulado, en el artículo 12, en el artículo 13, en los artículos 14 y 15, habla de las competencias. Y hay una serie de elementos, que yo no le voy a insistir en ellos, pero que están aquí, sobre los cuales tendremos que estudiar la posibilidad de hacer ese recurso de inconstitucionalidad. Y si lo podemos hacer... Ustedes lo pueden hacer perfectamente como Gobierno, y nosotros los apoyaríamos, pero si lo pueden hacer como Parlamento, como hemos hecho ya varios de ellos frente a los Presupuestos Generales del Estado, mejor que mejor. Por lo tanto, otro punto de acuerdo sobre cuestiones que son estructurales y son de fondo.

En tercer lugar, Ley de Aguas, Plan Hidrológico, tanto a nivel nacional, Plan Nacional de Regadíos, Plan An-

daluz de Regadíos... Pero yo le quisiera decirle una cuestión: igual que usted sabe que el Plan Hidrológico Nacional no es la simple suma de los planes de cuencas, porque entonces no haría falta ningún debate, sino, sencillamente, cogiendo todos los planes de cuencas, sumándolos, ¿eh?, el Parlamento no tendría ya que decir nada, porque los planes de cuencas no los aprueba el Congreso de los Diputados, que es la institución soberana..., bueno, la institución de la soberanía nacional y soberana del pueblo español; por lo tanto, no es eso. Pues lo mismo: cuando nosotros planteamos y distinguimos Ley de Aguas y Plan Hidrológico de Andalucía, no estamos diciendo que sea eso; estamos planteando, primero, que es un plan transversal, es decir, que tiene que contemplar las infraestructuras —estaremos con unas de acuerdo, con otras en desacuerdos, pero el Plan Director de Infraestructuras es lo que hace referencia a la política hidráulica—; pero también estaremos hablando de gestión. ¿Qué modelo de gestión? Como se gestiona en los distintos sectores y en los distintos usos. Y estaremos hablando también de política ambiental. Por lo tanto, desde esa concepción, desde esa percepción o desde ese modelo, es desde el que nosotros hemos planteado que es necesario un plan hidrológico andaluz. ¿Que en estos momentos no está madura la situación? Los planes concretos iremos viéndolos e iremos analizando, e iremos, como usted muy bien conoce, planteando nuestras alegaciones no solamente como parlamentarios, sino como movimiento político y social, cuando usted ha sacado planes a información pública y nosotros hemos participado, hemos presentado nuestras alegaciones, en muchos casos no hemos tenido respuesta, y en otros casos hemos percibido que ha habido respuesta y algunas de ellas se han aceptado.

En tercer lugar —y, señor portavoz del Partido Popular, ya puede *juir*—, embalses. Yo creo que, ahí, un sambenito a Izquierda Unida-Los Verdes Convocatoria por Andalucía; un sambenito que no se corresponde con la realidad. Y le voy a poner algún ejemplo, y no se corresponde con la realidad.

En primer lugar, nosotros no nos oponemos a todas las obras de regulación que haya habido, que pueda haber o que vayan a existir en el futuro: no es cierto. Primero, en estos momentos hay una obra de regulación importante para Andalucía, porque es importante para miles de andaluces y andaluzas, como es el embalse de La Colada en el norte de la provincia de Córdoba en la Confederación Hidrográfica del Guadiana, y nosotros no solamente no nos hemos opuesto, sino que les hemos buscado alternativas a las afecciones medioambientales que todos hemos conocido que tenía ese embalse, porque creemos que es fundamental para el abastecimiento urbano del valle de Los Pedroches, que, al mismo tiempo, libera a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de la prestación de un servicio desde Puente Nuevo, desde sierra Boyera, hacia..., elevando aguas para abastecimiento a la zona de Los Pedroches. Lo digo como ejemplo de que no ha existido. Pero sí existe una cuestión, y usted ya ha puesto aquí encima de la mesa algunas de las preguntas, y yo le voy a hacer dos preguntas.

En primer lugar, ¿es cierto que en una serie de obras hidráulicas que se vienen publicitando, se vienen ensalzando y se vienen utilizando como arma arrojadiza entre ambas Administraciones —eso es una calificación mía, no pido que usted la acepte o la asuma—, no es cierto que tenga que intervenir la Unión Europea por dos motivos, porque se le ha solicitado financiación o porque afecta a una parte del territorio que está calificado por la Unión Europea como protegido, que en una reunión mantenida por la Comisión Europea de Medio Ambiente y el Ministerio de Asuntos Exteriores han puesto dificultad a la tramitación? ¿No es cierto cuando usted le ha respondido que el señor Aznar o, es decir, la señora Ministra de Medio Ambiente, ha hecho mal sus deberes y le ha presentado unas propuestas y unos estudios a la Unión Europea que no se correspondían con la realidad? Por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo con la filosofía que usted ha manifestado aquí desde la tribuna: ninguna obra de regulación puede poner en cuestión los criterios básicos, legales, actualmente legales, de la normativa medioambiental o de la normativa de ordenación del territorio.

¿Es cierto que con la normativa actual, con la normativa actual, es decir, al nivel andaluz, con la ley de espacios, la Ley de Inventario de Espacios Protegidos, con la Ley de Protección Ambiental, tienen que cumplir unas condiciones determinadas, tanto de obras hidráulicas como carreteras, como una fábrica, etcétera, etcétera? ¿No es cierto eso? Y, si no las cumplen, ¿no es posible que desde la Administración autonómica, desde los poderes públicos, se den autorizaciones alegales o ilegales? ¿Es cierto que hay que cumplir las directivas europeas, la directiva Hábitat, que incluye la red ecológica Natura 2000, la directiva que hace referencia a las zonas de especial protección de las aves? ¿Es de obligado cumplimiento o no es de obligado cumplimiento eso? ¿Y que esas normativas?...

El señor PRESIDENTE

—Señor López Calvo, le queda a su señoría un minuto.

El señor LÓPEZ CALVO

—Voy terminando.

¿Y que esa normativa debe aplicarse también a las obras hidráulicas? ¿O es que las obras hidráulicas están aparte y por encima de las leyes que ha aprobado este Parlamento, a propuesta de su Gobierno y a propuesta de su Grupo, o que ha aprobado el Congreso de los Diputados? Nosotros lo que estamos diciendo es: «cumpla esa ley». Y nosotros tenemos un vector que para nosotros es muy importante, que es el desarrollo sostenible en la conservación de la naturaleza; pero, si se cumple la ley, nosotros tendremos nuestras críticas, pero no nos vamos a oponer o no vamos a hacer de eso cuestión de guerra. Pero, ahora, lo que no vamos a consentir es que se incumpla la ley. Y si la ley imposibilita eso, tienen en sus manos los mecanismos para hacerlo, y lo ha hecho el

Estado español. Lo hizo la Comunidad de Navarra, cambiando una ley para que, de manera retroactiva, pudiera permitir, con modificaciones, uno de los grandes embalses, de las grandes obras hidráulicas, que más han afectado a la naturaleza, pero también al interés social, a la percepción social de un grupo importante de la ciudadanía navarra y española, que era Itoiz. Ustedes pueden, cambien la Ley de Espacios Naturales, quítenles la protección a la sierra Norte de Sevilla, al parque de Hornachuelos; es su competencia, y tienen mayoría en este Pleno para hacerlo. Pero no nos pidan que comulguemos con ruedas de molino, no nos pidan que aceptemos que, por encima de la ley, está el interés de un tipo de obras o de un tipo de interés privado por motivos de presión social o de presión monetaria.

El señor PRESIDENTE

—Señor López Calvo, debe su señoría terminar ya.

El señor LÓPEZ CALVO

—Termino.

Por lo tanto, para nosotros, aparte de asumir y aceptar alguna serie de cosas, también nos ha preocupado que, de algunas de las propuestas y las actuaciones concretas, que no hace falta llevar a la planificación legal y planificación de obras de carácter futuro que le hemos propuesto y que estamos de acuerdo, actuaciones concretas en torno a la hidrología forestal, actuaciones en las riberas, en nuestros ríos, en nuestras cuencas, actuaciones en la modernización de regadíos, en modernización de infraestructuras... Yo creo que eso, que también era un compromiso de usted desde el año 1994, creo que debemos hacer un esfuerzo para que, de manera urgente, podamos ir poniendo las piedrecitas que nos señalen en el camino y que nos permitan estar en mejores condiciones cuando en el futuro tengamos las competencias plenas, tengamos la legislación adecuada y tengamos también los fondos necesarios para invertir.

Gracias.

El señor PRESIDENTE

—Gracias, señor López Calvo.

A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Ramos Aznar.

El señor RAMOS AZNAR

—Gracias, señor Presidente. Señorías.

Empiezo por hacer una intención, que es que voy a cumplir rigurosamente el plazo de los diez minutos, y, por tanto, voy a ir repasando algunas cuestiones a las que ha aludido el señor Consejero, que creo que son importantes de cara a enriquecer este debate, y naturalmente también,

pues, a plantear otras que entiendo que son igualmente importantes.

Mire, empezando por alusiones concretas, señor Consejero, me vuelvo a justificar. Yo no he dicho que es que yo no defienda a la Ministra; si hace falta la defiendo. El problema es que no hace falta, no hace falta defenderla. Yo creo que, con su posicionamiento y su actitud, la Ministra se defiende sola magníficamente.

Señor Vallejo, usted y el representante, el portavoz, señor De la Chica, del Partido Socialista, han hablado del dispendio y el despilfarro del agua que se ha producido en lo que usted denomina un año electoral en Andalucía. Mire usted, hay que ser serios, y hay que ser serios y lo primero que hace falta reconocer es lo siguiente: en todas y cada una de las juntas de ese embalse de todas las cuencas hidrográficas de Andalucía están representantes de la Administración autónoma andaluza. Aquí tienen ustedes todas las actas donde se han autorizado en todas las cuencas todos los desembalses, y todas han tenido el visto bueno de los representantes del Gobierno andaluz, exactamente en todas. Por tanto, no sé si ha habido o no habido despilfarro; lo que está claro es que si lo ha habido será un problema de asumir las responsabilidades entre todos, aunque yo, sinceramente, no creo que haya habido.

Decía el señor Consejero que Andalucía es la única región de España donde no ha habido transferencias de cuencas intracomunitarias. Eso no es cierto, señor Vallejo. Le digo más: no hay ni una sola Comunidad Autónoma en ninguna parte de España que tenga transferidas las cuencas intercomunitarias, ni una sola, ni una sola.

Decía el señor Vallejo que hay un clamor popular y la gente, las personas, los ciudadanos, se nos manifiestan. Yo no voy a hablar de manipulación por su parte; sí voy a hablar de desinformación interesada por su parte. Y decía usted, refiriéndose a una futura reciente manifestación que va a haber en Madrid, decía usted que hasta Asaja va a estar en la manifestación. Bueno, es que en este país puede ir cualquiera, sea de Asaja o no sea de Asaja, sea de aquí y de allí, puede ir a donde le apetezca. Por tanto, no nos ponga usted en el activo a nosotros a esa organización, que es tan independiente que va a ir a plantearle reivindicaciones al Gobierno central dentro de unos días. Si usted la sitúa en nuestro territorio, en nuestro terreno, como si fuera una especie de patrimonio del Partido Popular, pues, evidentemente, no iban a ir a manifestarse contra el Gobierno del Partido Popular. Lo que sí hay ahí, señor Consejero, lo que sí hay ahí, es una desinformación interesada por parte de ustedes. Porque, fundamentalmente, cuando habla usted de parte de esos manifestantes que van a ir, hay algunos concretos cuya demanda fundamentalmente es La Breña 2, concretamente la comunidad de regantes del Guadalquivir. Y lo que hay que decirles, que, además, se lo preguntaron ayer en una reunión que tuvieron con ustedes —espero que eso lo ratifique usted—, es que por qué ustedes se dedican a poner chinitas en el procedimiento o el expediente para que el Gobierno de España, que sí tiene la voluntad clara de licitar La Breña, incluso en el mes de noviembre o en el mes de diciembre, repito,

para que quede constancia en las actas, al final no se puede hacer porque ustedes se dedican a poner obstáculos.

Y lo más grave, señor Consejero, es que estamos hablando de algo importante. Estamos hablando de algo importante, de un procedimiento que, desde luego, no tiene desperdicio. Que se hable ahora de la falta de planificación y el desinterés del Gobierno central, en este caso, con La Breña-Melonares, mire usted, no es de recibo, no es de recibo.

Mire, en los trámites de la presa La Breña 2, la redacción, el encargo de la redacción del proyecto, en mayo de 1994. Mire usted, el segundo trámite, de diez trámites, los ha hecho todos, sin excepción, el Gobierno del Partido Popular, desde el envío del expediente a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental hasta la presentación a la Junta de Andalucía del proyecto de medidas compensatorias, pasando por la declaración de impacto ambiental, publicación de la declaración de impacto ambiental, apertura-contestación de una queja ante la Unión Europea... Exactamente todo. Ustedes, en el cajón, no dejaron nada de La Breña, única y exclusivamente el encargo del proyecto. Pero es que eso no es lo grave: es que no solamente no dejaron papeles, sino que se dedican a poner piedrecitas, y además piedrecitas de determinado tamaño, que impiden el poder licitar esa obra.

Y, mire usted, señor Vallejo, el problema no es de la queja de la Unión Europea —ese tema está desbloqueado en el tema de La Breña—: es el proyecto de medidas compensatorias que depende de la Junta de Andalucía. No, que depende de la Junta de Andalucía. ¿Y sabe usted quién ha hecho ese proyecto de medidas compensatorias? Pues lo ha hecho, evidentemente, el Gobierno central. Pero, para hacer ese proyecto de medidas compensatorias el Gobierno central, ¿sabe usted a quién recurrió? Pues le voy a dar hasta los nombres. Concretamente, a don Andrés Herrera Gavilán, que es el Delegado en Córdoba de la Consejería, que es el mismo que ahora presenta las objeciones, y, concretamente, al entonces Director Conservador del Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos, don José Valdivieso, pasando por el jefe del servicio de la Delegación Provincial en Córdoba, don Rafael Arenas. Con estos señores, y en coordinación con los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente, se hizo la redacción del plan que ahora ustedes rechazan, señor Vallejo. Y esto no es de recibo; esto es, simple y llanamente, intentar torpedear algo anteponiendo los intereses partidistas del Partido Socialista a los intereses generales de Andalucía. Y de igual manera hicieron ustedes o están intentando hacer con Melonares.

Yo también le anuncio una posibilidad, porque se puede perfectamente licitar La Breña 2 con independencia de que se haya podido desbloquear el proyecto de medidas compensatorias que ustedes tienen bloqueado. Porque una cosa es licitar y no se podrán adjudicar las obras o no se podrán empezar las obras hasta que ustedes desbloqueen el proyecto de medidas compensatorias. A lo mejor es lo que hay que hacer para evitar esa desinformación que yo le decía que ustedes inte-

resadamente están produciendo en determinados sectores de la sociedad. A lo mejor lo vamos hacer, a lo mejor lo vamos a hacer.

Hablaba usted de inversiones. Y yo le decía algo en que me puedo ratificar, y si quiere usted se las doy también, que es que no sabe por dónde están los 200.000 millones. Pues, mire usted, yo le doy el detalle de todas y cada una de las inversiones de los 200.000 millones del Ministerio de Medio Ambiente en el transcurso de 1996-99, a la vez que le adelanto que, para el 2000, lo que dice usted que no son inversiones significativas por parte del Gobierno central van a ser, directamente por parte de la Consejería desde el Ministerio de Medio Ambiente, 44.188 millones más 71.798 millones a cargo de las sociedades estatales, si es que ustedes nos permiten, al no poner esas trabas, que, efectivamente, podamos llegar a esa inversión.

Mire, he escuchado también determinadas alusiones en relación a que estamos en un ejercicio de privatización del agua. Lo que ha hecho este Gobierno en aras a la agilización de los procedimientos y a buscar una mayor eficiencia, de igual manera que usted hace en su Consejería, por poner un ejemplo, con GIASA, es crear tres empresas públicas estatales, que son empresas públicas estatales. Por tanto, no se puede andar intentando dar un mensaje de privatización, cuando, realmente, la gestión de esas infraestructuras importantes en Andalucía va a estar encomendada a tres empresas estatales...

El señor PRESIDENTE

—Señor Ramos, le queda un minuto.

El señor RAMOS AZNAR

—Me queda un minuto, sí señor.

Sería, lo mismo, señor Vallejo, que si yo le dijera que usted se está dedicando a privatizar las infraestructuras viarias de carreteras en Andalucía porque se las encomienda a una empresa que es pública de la Junta de Andalucía. Es decir, hay que ser más consistentes, señorías, en esos discursos.

En definitiva, señor Vallejo, no podemos aceptar el hecho de que haya habido una parálisis. Hombre, yo le puedo decir que, mire usted, la presa de Andévalo está en construcción, la de El Portillo, la de Rule, Casasola, Jarrama, Víboras —y ahora me refiero a Víboras también—, Valdemojón, Gilibaila, Francisco Abellán... Y hablando de la de Víboras, señor Consejero, ahí hay otra chinita, otra chinita.

El otro día, en Jaén, no le pareció importante la representación de la persona que iba en nombre de la Administración central, que no es ni más ni menos que el director de la empresa pública de aguas del Guadalquivir, que es el que va a acometer esas obras, y, por tanto, ahí está el tema.

El compromiso es muy fácil: si ustedes ponen el 15%, la Administración central pone el 85 y se hacen las interconexiones. Y también decirle que esa obra no se de-

claró de interés general en el año 1995; esa obra se declaró de interés general en 1998, señor Consejero.

En definitiva, yo creo que lo importante de este discurso —y termino, señor Presidente— y de este debate es incidir en lo importante. Incidir en lo importante en el sentido de hacerles un llamamiento, que además se traduce en las iniciativas que presenta el Partido Popular como propuestas de resolución, para apostar, pero apostar en positivo, por las políticas hidráulicas que necesita Andalucía, incluidas las transferencias que tanto a algunos apetece y que más parece ahora la apropiación de un botín, cuando, realmente, en quince años de ejercicio en el Gobierno aquí en Madrid no se consiguió ni una sola. Pero, por favor, y, en todo caso, pedirles que colabore y no se enfrenten, sumen y no resten, y, por supuesto, si no quieren colaborar, por lo menos no entorpezcan.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE

—Gracias, señor Ramos Aznar.

Tiene la palabra a continuación el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Álvarez de la Chica.

El señor ÁLVAREZ DE LA CHICA

—Muchas gracias, señor Presidente.

La verdad es que, señor Ramos, yo les pediría a ustedes... Decía usted que había desinformación e interés del Gobierno en que no hay información. Ustedes, que están desarrollando ahora un sentido extraordinario de la información a los ciudadanos en nuestros ámbitos de competencias desde el Gobierno de la nación y desde su propio partido, yo les pido a ustedes que expliquen públicamente, exactamente, dónde están los 200.000 millones de pesetas que usted se jacta de decir en los medios de comunicación que se han invertido en obras hidráulicas. Ponga usted en un mapa dónde están las obras y la etiqueta de los millones, y que lo vean los ciudadanos, porque me da a mí la impresión de que esos 200.000 millones es un ejercicio trillero de lo que puede ser el sistema alemán, que no se sabe ni dónde está el dinero, ni dónde están las inversiones, ni las partidas presupuestarias; en definitiva, lo que les importa a los ciudadanos, que no hay obra nueva y que ustedes, y que ustedes, no han hecho en tres años y medio absolutamente nada por que haya más agua disponible en Andalucía.

Y dice usted que en el año..., decía usted que en el año 1994 había los mismos problemas. Hombre, no, no podrá usted decir que, desde que se asumen las competencias en la Junta de Andalucía hasta el año 1994, las cosas no han cambiado y no se han mejorado los sistemas de abastecimiento ciudadano. Pero es que, además, usted tiene un discurso con el tema de los papeles que la verdad es que es de una inconsistencia política... Que no hay papeles, que no se encontraron papeles en los cajones con el embalse de La Breña.

Mire usted, señor Ramos, cuando ustedes llegaron al Gobierno, a los pocos meses, el Presidente del Gobierno y el Ministro de Fomento inauguraban tramos de autovía que digo yo que había dejado los papeles pagados, licitados todos los procedimientos administrativos otro Gobierno anterior, y supongo yo que su Gobierno no llamaba a nadie del Gobierno anterior para decirle: «cómo esto lo hicieron todo ustedes, venga usted a inaugurar conmigo». Mire usted, es que hay que tener seriedad en cuanto a lo que es la gestión y la responsabilidad política.

Y ahora resulta que hace usted una relación de embalses, Melonares... ¿Por qué no ha dicho usted de lo que había papeles? ¿O es que en eso han hecho trampa? En los que se pueden hacer, en éstos no es capaz usted de decir hasta dónde los dejó el Gobierno socialista cuando gobernaba; en cambio, se coge usted al embalse de La Breña para decir que lo único que se hizo fue el encargo del proyecto.

Mire usted, también les pueden decir a los ciudadanos andaluces dónde han hecho ustedes alguna depuradora. ¿Dónde? Dónde hay un litro de agua depurada que haya puesto en funcionamiento el Partido Popular en Andalucía.

Mire usted, hacía mención en su primera intervención a que había leído usted con detenimiento el debate general de política hidráulica del año 1994. Yo me he leído los cincuenta folios del debate. Supongo que recordará usted —si no le puedo yo ahorrar el trabajo— que en ese debate intervenía, en representación de su Grupo —casualidad—, el que hoy ostenta una importante responsabilidad en el Ministerio de Medio Ambiente, el Secretario de Estado, señor Muriel. Fíjese usted lo que decía su compañero, hoy en el Gobierno de Madrid —lo digo por si usted se saltó esas páginas—: «Ustedes, durante cuatro años, llevan mareando la perdiz con la transferencia de la Confederación Hidrográfica del Sur, pero no la de obra nueva». Cuatro años mareando la perdiz. ¿Cómo está la perdiz ya de mareada, señor Ramos, desde que está el señor Muriel?

Decía: «Sería fundamental empezar a organizar lo que tiene que ser la Administración hidráulica andaluza, y para eso poner fecha a los procesos de transferencias de la gestión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y la mayor presencia en la del Guadiana, los procesos de transferencia de titularidad de la Confederación Hidrográfica del Sur, del Guadiana 2 y del Guadalete-Barbate». ¿Qué diferencia hay entre eso que decía el señor Muriel y las propuestas de resolución que han registrado Izquierda Unida, el Partido Andalucista y el Partido Socialista, señor Ramos? Yo se lo voy a fotocopiar para que usted se lo mande mañana y no tenga que darse el trabajo, no se preocupe.

Y decía —fíjese usted—: «Tienen una oportunidad hoy de obtener un amplio acuerdo de esta Cámara para obtener una aceleración de esas transferencias, con competencias plenas, con recursos económicos, por supuesto para obra nueva. Claro que sí, la vamos a hacer entre todos, la vamos a reivindicar, la vamos a exigir de Madrid. Vamos a poner en marcha todas las opciones, no sólo

los acuerdos de este Parlamento. Vamos a hacer movilizaciones ciudadanas». Qué curioso, señor Ramos, movilizaciones ciudadanas. ¿A quién iban ustedes a llamar para llevarlos a Madrid? Un poquito de honradez con la historia.

«Le ofrezco al Grupo Socialista que presente un punto, un amplio acuerdo social de todas las fuerzas sociales y políticas para exigir al Gobierno central la transferencia de las competencias de las confederaciones hidrográficas. Vamos a votarlo y vamos a hacer una campaña de movilizaciones». Hoy tiene la oportunidad de votarlo, hoy tiene usted la oportunidad, y su Grupo, de andar el camino.

Por eso, hace usted un flaco favor cuando habla usted de los papeles, que no hay papeles... Mire usted, es que eso es de una inconsistencia, de una ingravidez política. «Y junto a ello pedimos que, de alguna forma, quede claro lo que yo he dicho a lo largo del debate: que la transferencia de la gestión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sus competencias y los recursos de la Confederación Hidrográfica del Sur y los correspondientes al sistema hidrológico del Guadiana 2 y Guadalete-Barbate los vamos a apoyar». Pues si es que lo tienen ustedes a huevo, más fácil imposible.

Ha hecho, señor portavoz de Izquierda Unida, señor López Calvo, algunas referencias también al calentamiento de la enmienda. Mire usted, hoy en Andalucía lo que se está produciendo, lo que se está produciendo, es que este Parlamento está reflejando exactamente la realidad social de preocupación. Este debate es un debate de máxima actualidad, que no se puede obtener ese amparo, desde el punto de vista del estatuto del Parlamento, pero que sí está en la preocupación cotidiana de los ciudadanos, y estará la semana que viene, y la siguiente, y la otra. Pero si es que, si no fuera por las limitaciones materiales y porque mucha gente tiene, afortunadamente, obligaciones y necesidades de las que vivir, lo que se va a producir el viernes en Andalucía debería producirse todos los días, todos los días.

Por lo tanto, si usted quiere apreciar la variable que quiera, la casualidad o la causalidad, yo me quedo con la segunda. Sí señor, porque este Parlamento está reflejando una necesidad social que está en la calle, y que afecta a todos los colectivos, y la armonía entre lo que pasa fuera y pasa dentro es algo que refleja salud de este Parlamento.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE

—Gracias, señor Álvarez de la Chica.

Señorías, finalizado el debate, se va a suspender, como es preceptivo, la sesión durante una hora; en los primeros 15 minutos los Grupos parlamentarios podrán transaccionar o formular nuevas propuestas de resolución y tal, y como establece la resolución, y se reanudará el Pleno a las diez y cuarto de la noche. Se votará a continuación de la reanudación.

[Receso.]

El señor PRESIDENTE

—Señorías, ocupen sus escaños, por favor.

Se reanuda la sesión, y tiene la palabra, en primer lugar, el portavoz del Grupo Parlamentario Andalucista, señor Dell'Olmo, para presentar las propuestas de resolución de su Grupo parlamentario. Informarles —perdone, señor Dell'Olmo— antes de que todas las propuestas de resolución formuladas por todos los Grupos parlamentarios han sido calificadas favorablemente por la Mesa de la Cámara.

Señor Dell'Olmo, su señoría tiene la palabra para presentar sus propuestas de resolución.

El señor DELL'OLMO GARCÍA

—Gracias, señor Presidente. Con mucha brevedad

Y dado que el sistema actual permite a los Diputados conocer las propuestas de resolución de todos los Grupos parlamentarios, decir que, en consonancia con la intervención que hemos tenido anteriormente, el Grupo Parlamentario Andalucista ha presentado un total de 16 enmiendas, en las que pretende priorizar las necesidades del agua en Andalucía, que pasan, en primer lugar, por tener las competencias —de ahí que haya un bloque en el que se demanden las mismas—, y, después, pues una serie de iniciativas tendentes a mejorar el plan de regadíos, la necesidad de unas políticas de desaladoras en las costas andaluzas, y la necesidad también de políticas tarifarias y de utilización del agua que permitan el ahorro.

Advertir, simplemente, que hay una corrección de errores, y corrección también, como faculta la resolución del Presidente del Parlamento, en el sentido de que se suprima del primer bloque de propuestas presentado el último párrafo, que está después del punto 8 —luego ése se suprime—, y, en el primer punto, la expresión «producción» por «disponibilidad de agua para garantizar las demandas actuales y futuras».

El señor PRESIDENTE

—Gracias, señor Dell'Olmo.

A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes Convocatoria por Andalucía, señor López Calvo.

El señor LÓPEZ CALVO

—Gracias, señor Presidente.

También muy resumidamente, para plantear que nuestras resoluciones, nuestras propuestas de resoluciones, vienen guiadas por que todas las iniciativas que se han ido agrupando, o se han agrupado en este debate general, tengan un reflejo en nuestra resolución, junto con una reivindicación radical sobre la necesidad de que Andalucía, de que la Junta de Andalucía, de que nuestra Co-

munidad Autónoma, tenga competencias plenas en política hidráulica. Que haya un desarrollo legislativo propio que dé respuesta a los problemas y a las demandas que tienen los ciudadanos y ciudadanas de nuestra tierra, y, por último, un bloque de medidas concretas que, mientras vienen las transferencias plenas, mientras, desde el Parlamento de Andalucía, legislamos la nueva normativa en relación con la Ley de Aguas, la planificación hidrológica andaluza, el Plan Andaluz de Regadíos, es necesario intervenir en nuestras cuencas, defendiendo nuestro recurso básico, que es el agua, con políticas hidrológico-forestales, con intervenciones para impedir las inundaciones, y plantear la defensa de la calidad del agua, impidiendo la continuación de la contaminación por nitratos, que es uno de los máximos y más graves problemas que tiene ahora mismo Andalucía.

Y comunicarle a la Cámara que, fundamentalmente, vamos a votar en esta línea la mayoría de las iniciativas, casi la totalidad de las iniciativas del Grupo Parlamentario Socialista, vamos a votar muchas de las iniciativas, en esta línea, del Grupo Andalucista, y algunas de las iniciativas que presenta —algunas de las iniciativas que presenta— el Partido Popular. Algunas nada más.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE

—Muchas gracias, señor López Calvo.

Tiene la palabra el señor Ramos Aznar, portavoz del Grupo Popular, para presentar las propuestas de resolución de su Grupo.

El señor RAMOS AZNAR

—Sí, gracias, señor Presidente.

Con toda brevedad, mi Grupo presenta 22 propuestas de resolución, que, evidentemente, van en consonancia con el contenido de nuestra intervención en este debate sobre política hidráulica, y que, destaco, dividimos en tres grandes bloques: uno primero, que, en definitiva, no es sino la definición del marco en el que se mueven las necesidades de Andalucía en materia de política hidráulica; uno segundo, que, evidentemente, se residencia en las competencias propias de la Comunidad Autónoma andaluza y que, en definitiva, en líneas generales, va a garantizar el abastecimiento, el saneamiento y depuración de todo el territorio de Andalucía. Naturalmente también reclamar y exigir la dotación de elementos de planificación, que tienen que ser inherentes a ese desarrollo de la política hidráulica, competencia de la Junta de Andalucía, en cuanto a los planes sectoriales de saneamiento, depuración, reutilización, ahorro... Y un tercer apartado, dentro de este mismo bloque, que, evidentemente, lo que propone es el espíritu que ha guiado la intervención y el posicionamiento del Grupo Parlamentario Popular en cuanto a lo que tiene que ser una política de coordinación con la Administración central del Estado a efectos de solucionar los déficit históricos y crónicos de la política

hidráulica con Andalucía. Y, naturalmente, un tercer bloque, donde, a su vez, vamos a pedir también determinadas actuaciones, que nos parecen de carácter prioritario, en cuanto a la exigencia y demanda al Gobierno central de actuaciones concretas y específicas también en beneficio de la política hidráulica de Andalucía, y, naturalmente, que se residencian en el ámbito de la Administración central.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE

—Muchas gracias, señor Ramos Aznar.

Y a continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Álvarez de la Chica.

El señor ÁLVAREZ DE LA CHICA

—Muchas gracias, señor Presidente.

Con brevedad, porque entiende este portavoz que los Diputados y Diputadas han tenido la oportunidad suficiente de conocer, desde que fueron presentadas —y no han sido modificadas, por tanto— las propuestas de resolución que presenta el Grupo Socialista. Por lo tanto, en consonancia con los elementos claves que hemos venido defendiendo a lo largo del debate, entendemos que el elemento clave es la capacidad real de que Andalucía pueda tener la competencia y la gestión en lo que se refiere a todas las cuencas hidrográficas, tanto las intracomunitarias como la del Guadalquivir; pero que, mientras esto se hace efectivo, tanto el Consejo de Gobierno desarrolle y continúe avanzando en las competencias que fueron asignadas desde el año 1994 a la Comunidad Autónoma, y que también el Gobierno de la nación, instado por el Consejo de Gobierno, haga efectivos sus compromisos, las necesidades que los andaluces tienen en materia de aguas, mientras sea absoluta responsabilidad la planificación, la gestión de las cuencas hidrográficas. En resumen, ésas son las nueve propuestas de resolución que sometemos al Pleno de la Cámara para su consideración.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE

—Muchas gracias, señor Álvarez de la Chica.

Señorías, finalizado el turno de presentación de propuestas de resolución, vamos a iniciar la votación de las propuestas formuladas por los distintos Grupos parlamentarios —ruego a sus señorías que...—, comenzando, en primer lugar, por las propuestas del Grupo Parlamentario Andalucista.

Señora Caballero.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí, para separar las propuestas de resolución en tres grupos: uno que agrupe la 1, 2, 6, 11, 12, 13, 14 y 16; eso es un bloque. Otro bloque, 4, 7, 8, 9, 10 y 15, y el resto en otro bloque.

El señor PRESIDENTE

—Señorías, tengo en mi poder, porque me lo ha facilitado el Grupo Parlamentario Popular, cómo quieren realizar las votaciones, y, por lo tanto, a la petición del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida —no sé si del Grupo Socialista veo alguna—, voy a proceder a lo que ha solicitado la señora Caballero y en el Grupo Popular las intersecciones.

Votamos en primer lugar las propuestas números 1, 2, 6 y 11. Repito: números 1, 2, 6 y 11, del Grupo Parlamentario Andalucista.

Se inicia la votación.

El resultado de la votación es el siguiente: han sido aprobadas, al haber obtenido 50 votos a favor, ningún voto en contra, 37 abstenciones.

Señorías, votamos a continuación las propuestas 4, 7, 8 y 9. Repito: 4, 7, 8 y 9, del Grupo Parlamentario Andalucista.

Se inicia la votación.

El resultado de la votación es el siguiente: han sido aprobadas, al haber obtenido 58 votos a favor, ningún voto en contra, 30 abstenciones.

Señorías, votamos a continuación la propuesta número 3 del Grupo Parlamentario Andalucista.

Se inicia la votación.

El resultado de la votación es el siguiente: ha sido aprobada, al haber obtenido 49 votos a favor, 7 votos en contra, 30 abstenciones.

Votamos a continuación, señorías, la propuesta número 10 del Grupo Parlamentario Andalucista.

Se inicia la votación.

El resultado de la votación es el siguiente: ha sido aprobada, al haber obtenido 58 votos a favor, 30 votos en contra, ninguna abstención.

Señorías, votamos a continuación la propuesta número 16 del Grupo Parlamentario Andalucista.

Se inicia la votación.

El resultado de la votación es el siguiente: ha sido aprobada, al haber obtenido 50 votos a favor, 30 votos en contra, 8 abstenciones.

Señorías, votamos a continuación la propuesta número 15 de Grupo Parlamentario Andalucista.

Se inicia la votación.

El resultado de la votación es el siguiente: ha sido aprobada, al haber obtenido 88 votos a favor, ningún voto en contra, ninguna abstención.

Señorías, votamos las propuestas números 12, 13 y 14 del Grupo Parlamentario Andalucista.

Se inicia la votación.

El resultado de la votación es el siguiente: han sido

aprobadas, al haber obtenido 80 votos a favor, ningún voto en contra, 8 abstenciones.

Y queda, finalmente, por votar la propuesta de resolución número 5, del Grupo Parlamentario Andalucista.

Se inicia la votación.

El resultado de la votación es el siguiente: ha sido aprobada, al haber obtenido 51 votos a favor, 7 votos en contra, 30 abstenciones.

Señorías, vamos a pasar a continuación a votar las propuestas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía.

Señor Gracia, su señoría...

El señor GRACIA NAVARRO

—Gracias, señor Presidente.

Para solicitar que se voten separadamente los apartados 5, 13, 21 y 23.

El señor PRESIDENTE

—Muchas gracias, señor Gracia.

Votamos, en primer lugar, los puntos 13 y 23 de la propuesta del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.

Se inicia la votación.

El resultado de la votación es el siguiente: han sido rechazados, al haber obtenido 10 votos a favor, 76 votos en contra, una abstención.

Votamos a continuación, señorías, los puntos 5 y 21 del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.

Se inicia la votación.

El resultado de la votación es el siguiente: han sido rechazados, al haber obtenido 36 votos a favor, 51 votos en contra, ninguna abstención.

Señorías, votamos a continuación los puntos 1, 3 y 14 del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.

Se inicia la votación.

El resultado de la votación es el siguiente: han sido aprobados, al haber obtenido 58 votos a favor, 29 votos en contra, ninguna abstención.

Señorías, votamos a continuación los puntos 2, 7, 11, 17 y 19. Repito: 2, 7, 11, 17 y 19.

Se inicia la votación.

El resultado de la votación es el siguiente: han sido aprobados, al haber obtenido 58 votos a favor, ningún voto en contra, 29 abstenciones.

Señorías, votamos a continuación el resto de los puntos de la propuesta de resolución de Izquierda Unida.

Se inicia la votación.

El resultado de la votación es el siguiente: han sido aprobados, al haber obtenido 88 votos a favor, ningún voto en contra, ninguna abstención.

Señorías, pasamos a continuación a votar las propuestas del Grupo Parlamentario Popular.

Señora Caballero.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Sí, señor Presidente.

Para separar también en tres bloques: uno que sea el punto primero completo, 2.9, 2.11, 2.12, 3.2, 3.4 y 3.5.

El señor PRESIDENTE

—Un momento. El uno, 2.9, 2.11, 2.12, 3.2, 3.4 y 3.5.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Y en otro bloque, 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10 y 3.6. Y el resto aparte.

El señor GRACIA NAVARRO

—Sí, señor Presidente.

Para solicitar votación separada del apartado 1 completo.

El señor PRESIDENTE

—Señorías, votamos a continuación el punto número 1. Se inicia la votación.

El resultado de la votación es el siguiente: ha sido aprobado, al haber obtenido 76 votos a favor, 8 votos en contra, una abstención.

Señorías, votamos a continuación los puntos 2.9, 2.11, 2.12, 3.2, 3.4 y 3.5.

Se inicia la votación.

El resultado de la votación es el siguiente: han sido rechazados, al haber obtenido 29 votos a favor, 59 votos en contra, ninguna abstención.

Señorías, votamos a continuación los puntos 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10 y 3.6.

Se inicia la votación.

El resultado de la votación es el siguiente: han sido rechazados, al haber obtenido 36 votos a favor, 50 votos en contra, una abstención.

Señorías, votamos el resto de las propuestas del Grupo Parlamentario Popular.

Se inicia la votación.

El resultado de la votación es el siguiente: han sido rechazadas, al haber obtenido 31 votos a favor, 50 votos en contra, 7 abstenciones.

Señorías, pasamos a continuación a votar las propuestas de resolución formuladas por el Grupo Parlamentario Socialista.

Señora Caballero.

La señora CABALLERO CUBILLO

—Para separar el punto 3.

El señor PRESIDENTE

—Muchas gracias, señora Caballero.

Votamos, en primer lugar, el punto número 3.

Se inicia la votación.

El resultado de la votación es el siguiente: ha sido aprobado, al haber obtenido 79 votos a favor, ningún voto en contra, 8 abstenciones.

Señorías, votamos a continuación el punto número 1.

Se inicia la votación.

El resultado de la votación es el siguiente: ha sido aprobado, al haber obtenido 58 votos a favor, 29 votos en contra, ninguna abstención.

Señorías, votamos a continuación los puntos 2, 5 y 9.

Se inicia la votación.

El resultado de la votación es el siguiente: han sido

aprobados, al haber obtenido 88 votos a favor, ningún voto en contra, ninguna abstención.

Señorías, votamos a continuación los puntos 4, 6, 7 y 8.

Se inicia la votación.

El resultado de la votación es el siguiente: han sido aprobados, al haber obtenido 58 votos a favor, ningún voto en contra, 29 abstenciones.

Señorías, finalizados el debate y votación, vamos a suspender la sesión hasta mañana a las diez, comunicándoles, como es habitual, que comenzará con las interpelaciones, seguirán las preguntas orales, y a continuación las mociones. Tiene la Mesa intención de debatir, en cualquier caso, la primera y, si es posible, la segunda moción.

Se suspende la sesión hasta mañana a las diez.

HOJA DE SUSCRIPCIÓN

Nombre

Domicilio

Teléfono Ciudad

Distrito Postal D.N.I./N.I.F.

Deseo suscribirme al: ☐ Diario de Sesiones del Parlamento de Andalucía (Plenos y Comisiones)
☐ Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía
☐ Diario de Sesiones (Plenos y Comisiones) y
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

de acuerdo con las condiciones estipuladas, a partir del día de
..... de 19 hasta el 31 de diciembre de 19

Con fecha de de 19 les envío por giro
postal ☐ talón nominativo ☐ la cantidad de pesetas.

..... a de de

Precios:

Firmado

Suscripción anual año 1996

- ☐ DSPA: 8.000 ptas. IVA incluido
- ☐ BOPA: 8.000 ptas. IVA incluido
- ☐ DSPA (Plenos y Comisiones) y BOPA: 14.000 ptas. IVA incluido
- ☐ Precio por ejemplar (cada fascículo): 300ptas. IVA incluido

Pedidos:

Servicio de Gestión Económica del Parlamento de Andalucía.
Andueza, s/n. Teléfonos: 954 59 21 00
Forma de Pago: Giro postal o talón nominativo conformado a nombre del Parlamento de Andalucía.

CONDICIONES GENERALES

1. La suscripción es anual, por años naturales. Si la solicitud de alta se realizase comenzado el año natural, las suscripciones podrán hacerse por el trimestre o semestre que reste.
2. El envío de los ejemplares se efectuará cuando el interesado haya cumplimentado debidamente la hoja de suscripción y haya abonado el importe total.
3. El plazo de suscripción finalizará el 31 de diciembre de cada año.
4. El interesado que no renueve la suscripción será dado de baja hasta tanto no cumplimente la nueva suscripción y abone el importe correspondiente.

PUBLICACIONES DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

**CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA
ANDALUCÍA
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO DE
ANDALUCÍA**

PVP: 1.500 ptas.

**LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DE LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
ASPECTOS JURÍDICOS Y PERSPECTIVAS
POLÍTICAS**

Parlamento Vasco
Parlamento de Cataluña
Parlamento de Galicia
Parlamento de Andalucía

PVP: 3.700 ptas

**REGLAMENTO DEL PARLAMENTO DE
ANDALUCÍA**

PVP: 650 ptas.

ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA ANDALUCÍA

PVP: 500 ptas.

LAS CORTES EN SEVILLA EN 1823
(Edición facsímil)
Estudio preliminar a cargo de Rafael Sánchez Mantero

PVP: 1.500 ptas.

**JORNADAS DE DEBATE SOBRE REFORMA DE
LOS REGLAMENTOS PARLAMENTARIOS**

PVP: 1.500 ptas.

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA
Agustín Ruiz Robledo

PVP: 2.000 ptas.

PARLAMENTO Y SOCIEDAD EN ANDALUCÍA
Juan Cano Bueso (Ed.)

PVP: 2.000 ptas.

ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA ANDALUCÍA
(Edición a cargo de
Manuel Terol Becerra y José María Morales Arroyo)

PVP: 1.000 ptas.

ELECCIONES Y PARTIDOS POLÍTICOS

PVP: 1.300 ptas.

Información: Servicio de Diario de Sesiones y Publicaciones no Periódicas del Parlamento de Andalucía

Pedidos a: Servicio de Gestión Económica del Parlamento de Andalucía.
C/ Parlamento s/n
41009 Sevilla

Forma de pago: Giro postal o talón nominativo conformado a nombre del Parlamento de Andalucía
Todas las publicaciones llevan incluido el 4% de IVA